EL REINO.

DIARIO DE LA TARDE.

Año III.

Este periódico se publica todos los días, excepto los domingos.

Lunes 11 de Marzo de 1861.

Redacción, Administración e Imprenta, calle de Hita, núm. 5, cuarto principal.

Núm. 429.

PARTES TELEGRÁFICAS.

DEL EXTERIOR.

París 9.—El Monitor de hoy dice que al presentar el mensaje la comisión del Senado al emperador, éste ha contestado:

«La discusión ha ilustrado al país acerca de las grandes cuestiones demostrando que no hemos abandonado ninguno de los opuestos intereses por los que era preciso velar. Mi política será siempre firme, leal y sin doblez. El mensaje del Senado aprueba mi conducta pasada y me expresa su confianza para lo porvenir. Os doy por ello las gracias.»

Roma 8.—La Reina de España ha ofrecido su palacio de Madrid al Padre Santo; pero Su Santidad, que no piensa abandonar a Roma, ha llamado a todos sus soldados a la capital, excepto tres compañías de suavos que están lejos de ella.

Nápoles 5.—Con motivo de haber rehusado el arzobispo de Trani asistir al Te Deum por la renuncia de Gaeta, ha habido un motin, siendo atacado el palacio arzobispal.

Nápoles 9.—Han empezado las hostilidades contra la ciudadela de Messina, y los buques extranjeros han abandonado aquellas aguas, a excepción de los anglo-americanos y los ingleses. Estos últimos han declarado que se quedaban para defender las propiedades de sus compatriotas. Ciardini ha intimado al gobernador de la ciudadela, general Fergola, que no conceda la capitulación a la guarnición: que confiscará los bienes de jefes y oficiales para indemnizar a la ciudad de las pérdidas que pueda causar el bombardeo; y que entregará a Fergola y sus oficiales a la venganza del pueblo, porque no verá en ellos militares, sino asesinos.

Marsella 9.—Se han recibido órdenes para preparar el yacimiento del príncipe Napoleón, que saldrá dentro de diez días para Italia.

Varsovia 9.—En Lublin ha tenido lugar una gran demostración con motivo del aniversario de la batalla de Grochow. En la catedral se celebraron exequias por los soldados muertos combatiendo en aquel hecho de armas, y ofició el obispo. Asistieron diputaciones de toda la provincia. Después del oficio fúnebre, desfiló la procesión en medio de una gran concurrencia. No se turbó el orden, y las autoridades rusas no pusieron obstáculo a esta demostración pacífica. Reina tranquilidad material en toda Polonia, pero se aguardan con impaciencia las resoluciones del emperador.

Londres 9.—El gobierno inglés, reponiendo a una interpelación del marqués de Bath, ha dicho que existe la nota del gobierno ruso a su embajador en París aprobando la ocupación francesa en Siria; pero que continúan las negociaciones y que no es posible decir hoy la marcha que en este asunto deberá seguir más adelante el gobierno inglés.

La noche del 7 giró la discusión en la Cámara de los comunes sobre la política inglesa en Italia. Lord Gladstone habló contra la tiranía de Austria.

París 10.—Una carta del general Turrá Klapka suplica a los húngaros que no comprometan las esperanzas de Hungría con un levantamiento prematuro que los agentes austriacos procuran fomentar.

Cracovia 8.—Con motivo de haber rehusado el Banco polaco pagar en metalico el importe del papel ruso que tiene en depósito, la autoridad militar ha tomado una suma equivalente de la caja del Banco.

Marsella.—Se han expedido órdenes severas en Nápoles respecto a la resistencia de los prelados. El vapor de Constantinopla trae cuatro millones y medio, gran parte de estos en monedas turcas. Gran inquietud comercial en aquella ciudad. La penuria del Tesoro ha obligado a reducir a una mitad el contingente de reserva llamado a las armas. Diez batallones mandados a la Rumelia llevan orden de reprimir con rigor los movimientos.

Un periódico ministerial de Turquía, al anunciar el envío de la escuadra con cuatro mil hombres al Adriático, dice que el gobierno turco está decidido a tomar medidas energéticas contra las provincias del litoral.

El sultán, a pesar de las notas extranjeras, ha entregado solemnemente al gran visir, ministro de Negocios extranjeros, y enviado a Fud-Baja, sables de honor de gran precio, en muestra de su satisfacción.

Turin 9.—El 14, cumpleaños del rey, gran revista de tropas. Se preparan funciones para celebrar la llegada del príncipe Napoleón y su esposa.

París 9.—Los emigrados polacos residentes en París y Londres se han adherido a la exposición dirigida al emperador de Rusia por los habitantes de Varsovia.

El vice-almirante que manda la división naval de las Antillas y del golfo de Méjico ha enviado dos buques de guerra a Veracruz, al saber las violencias cometidas contra el consúl.

París 9.—Quedan el 3 francos a 68-20; el 1/2 a 95-75; el interior español a 47; el exterior a 48 1/2; la diferida a 41; y la amortizable a 60.

Londres 9.—Quedan los consolidados de 92 1/8 a 1/4.

SECCION EXTRANJERA.

Las noticias de Varsovia que encontramos en los diarios extranjeros son ambiguas y contradictorias, principalmente en lo que se refiere a la conducta del gobierno ruso. Por un lado se confirma que el czar, aun cuando haya sabido con disgusto los acontecimientos de la antigua capital de Polonia, no se mostrará duro con los polacos; y por otro se asegura que no solo ha desaprobado altamente la conducta del príncipe Gortschakoff como débil y demasiado condescendiente con los descontentos, sino que ha mandado se declare aquella ciudad en estado de sitio, y se adopten disposiciones severas respecto de todos los polacos. Más. Dicese que el gabinete de San Petersburgo ha dirigido una comunicación al de las Tullerías, declarándole que cualquier muestra de simpatía por ligera que fuese, dada por Francia a Polonia, bastaría para que el emperador Napoleón se enagenase la amistad del emperador Alejandro.

Otros pretenden, por el contrario, que el gobierno francés está de acuerdo con el ruso, lo

mismo en la cuestión de Polonia que en la de Oriente, y que ha logrado convencer al czar de la necesidad de proclamar el restablecimiento de la Constitución polaca de 1815; pero hay que advertir que ni los polacos recuerdan semejante Constitución, ni han formulado el deseo de que se les otorgue, como se ha dicho, en la exposición elevada al emperador. Sus aspiraciones van más lejos, y los términos con que las expresan manifiestan que no ha de ser tan fácil contentarlos. Piden satisfacción para las necesidades de los pueblos, respeto para el sentimiento nacional que no ha cesado de animarlos, y que se les conceda los medios legales para llegar hasta el trono imperial, cuando hayan de recurrir en queja y dar pábulo a sus legítimos votos. En una palabra, claman por la autonomía de la Polonia rusa, con la seguridad, sin duda, de que pronto se levantarán sus compatriotas pidiendo iguales concesiones en la Polonia austriaca y en la prusiana.

Bajo este concepto, nos inclinamos a creer en la existencia de la nota apuntada del gabinete de San Petersburgo al de París; y atendiendo a la política liberal a que Francia parece inclinarse, se nos figura muy probable el que surjan dificultades en las relaciones de entrambos. Por de pronto, los periódicos ociosos franceses no han vacilado en mostrarse afectos al movimiento de Varsovia.

De Turin escriben anunciando el próximo restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Piemonte y nuestro vecino imperio. El gobierno sardo piensa aprovechar la ocasión de la proclamación del nuevo reino de Italia, que se realizará el 14 del corriente, aniversario del nacimiento de Víctor Manuel, para enviar un embajador a París encargado de participar tan gran suceso, y se espera que el gabinete de las Tullerías corresponda a esta deferencia, enviando a su vez otro embajador a Turin, donde lo dejará establecido como representante de Francia. El viaje del príncipe Napoleón a Italia, que nos anuncia el telégrafo, no será extraño a este acontecimiento.

Entretanto, merecen consignarse que la *Voz Popular*, diario napolitano, se queja amargamente de que se estén haciendo alistamientos en la Italia meridional en favor del príncipe Murat. Hé aquí sus palabras:

«Estamos indignados, como lo está toda la prensa, de los alistamientos militares que se hacen para el príncipe Murat, sin que nadie se oponga ni se inquiete.»

Estamos indignados contra el ministerio de policía que no repara en esos complots llenos de peligros. De un día a otro podemos encontrarnos en una conmoción, y el ministerio de policía duerme.

Publicamos el siguiente documento y daremos otros:

«Legion adriática.—Muy señor mío: El general jefe de la legion, tiene el honor de manifestaros que por resolución del comité, habeis sido nombrado teniente.»

Se os entregará el despacho al entrar en campaña, y vuestro sueldo contará a partir de esta época.—Firmado, el general Nicolás Weylandt.—El jefe de E. M., F. Lochet.

Nápoles 4 de Febrero.

Esta es una prueba más de las bases sobre que descansan la tranquilidad y el orden de la península italiana. También puede considerarse como una muestra de la unanimidad de los italianos respecto a la consumación del gran pensamiento de los gobernantes de Turin.

Días pasados dijimos que el ministerio inglés tenía amenada su existencia. Hoy podemos añadir que en la sesión de la Cámara de los comunes del 5 ha sufrido una derrota con motivo de una proposición presentada a favor de los ascensos de la marina. El asunto no era de gran importancia. Lord Palmerston se la dió oponiéndose a que se votara la proposición, lo cual no pudo conseguir de la mayoría, pues el gabinete obtuvo cinco votos menos que sus contrarios.

Este incidente es tanto más significativo cuanto que en estos últimos días los torrys han ganado varias elecciones, y además los católicos que habían apoyado al gabinete se muestran descontentos de la política de lord John Russell en la cuestión de Roma. La caída de lord Palmerston sería un verdadero acontecimiento en las actuales circunstancias de Europa.

Los piemonteses han sufrido un descalabro en Civitella. Según la *Opinione* de Turin, el general Mezzacapo invitó a la plaza a aceptar la capitulación de Gaeta, que fué rechazada. Los piemonteses, con gran trabajo, lograron establecer 20 piezas de artillería en las alturas que dominan a Civitella, y rompieron el fuego el día 8. La plaza contestaba vigorosamente con 20 cañones, casi todos de grueso calibre.

Los piemonteses continuaron sin interrupción el fuego todo el día y toda la noche; pero como causase poco efecto en la plaza, fueron disminuyendo en los días sucesivos. Corrió el rumor de que entró la guarnición de Civitella habiendo sobrevenido graves disensiones, y a consecuencia de esto el general Mezzacapo dispuso que en la madrugada del 25, tres columnas asaltarán simultáneamente las tres puertas principales de la plaza.

Los sitiados, por lo visto, tuvieron noticia de este proyecto, pues cuando los piemonteses subían una cuesta escarpadísima a tiro de la plaza, se vieron abrumados por un espantoso fuego de metralla

llá y fusilería que no pudieron resistir, y se retiraron precipitadamente, merced a lo cual experimentaron pocas pérdidas. A la fecha del 27 se ocupaban los sitiadores en abrir trincheras. La guarnición dicen que se compone de unos 500 hombres, entre soldados, guardias urbanos y voluntarios.

Se ha publicado al fin en París el folleto de M. Veuillot *El Papa y la diplomacia*, que es el reverso de la medalla del folleto de M. de La-Gueronnière. En dos días se han vendido, solo en casa del editor Dentu, 22,000 ejemplares.

El embajador de Prusia cerca de Francisco II, Sr. Perponcher, que se fué a Berlín cuando el cuerpo diplomático se encerró con este monarca en Gaeta, acaba de volver a Italia para entregar al mismo soberano la respuesta a la felicitación que de él recibió Guillermo I al ocupar el trono prusiano. El gabinete de Berlín signe, pues, reconociendo a Francisco II como rey legítimo de las Dos-Sicilias.

Correspondencias de Turin que inserta *La Patrie* dicen que ha habido, con motivo de las elecciones, graves disensiones en el Congreso italiano.

Desde que el 25 de Diciembre entraron los liberales en Méjico, hasta el 23 de Enero, fecha a que alcanzan las últimas noticias, habían ocurrido dos cambios de ministerio. El que regia últimamente, estaba presidido por D. Francisco Zarco, antiguo redactor de *El Siglo XXI*, y uno de los enemigos más encarnizados de España y de los intereses españoles. Juárez, que desde Veracruz había convocado el Congreso para el último domingo de Febrero, luego que se vió en Méjico, dió un nuevo decreto trasfiriendo el plazo hasta el 21 de Abril. El representante francés no había presentado aún sus credenciales al gobierno constitucional, y se aseguraba que regresaría a su país sin entablar relaciones con Juárez.

Una carta de Méjico que publica *La América* dice que a pesar de haber declarado el gobierno que los bienes del clero pertenecen a la nación, y a pesar de haberse cogido las ricas alhajas de los templos, cuyo valor de solo las de la catedral monta a la enorme suma de 600,000 duros, sin contar las demás iglesias, la administración no tiene una peseta, y los más de los días no puede pagar a la tropa que da la guarnición en la capital. «La guerra civil, añade, sigue hoy más encanizada que nunca. Vicario está en el Sur con una fuerza de 4,000 hombres, cuyo lema es en sus dichos y demostraciones: *mueran los extranjeros, vivan los religiosos y sus caballos ligeros; ni pedimos ni damos cuartel*. El general Mejía está con la misma bandera en el Estado de San Luis, cuya capital ocupa, y una infinidad de partidas sueltas se hallan por todas partes en el mismo sentido: esto es interminable.»

Muchísimos españoles quisieron dar al Sr. Pacheco a su salida de Méjico una despedida aun más espléndida de lo que fué su entrada el 1.º de Junio de 1860; pero él con su amabilidad acostumbrada renunció a todo obsequio, pues dijo temía que por ello sufrirían algunos ultrajes en el futuro. A las ocho de la mañana salió de la ciudad, en su cupé particular, acompañado del señor D. Manuel Mendoza Cortina, marchando detrás como de respeto el coche de este apreciable sujeto, con dos individuos, que eran D. Pedro Guillet y otro: así atravesaron la plaza de Armas, donde se juntó a la pequeña comitiva el coche de D. Manuel Escandon, que conducía al Sr. Dubois de Saligny, ministro de Francia; llegó a la garita de San Lázaro, donde se apeó para despedirse del representante francés y demás personas que le habían acompañado o ido a aquel lugar con el fin de darle el último adiós: un momento después llegaron tres diligencias que debían conducir a los ilustres expulsados del suelo mejicano. El señor embajador montó en la primera con todo el personal de la embajada, y desde el carruaje amonestó a los españoles que tuvieran prudencia, a lo que contestó el buen español D. Francisco Fernández de Mobellán: «Señor embajador, tendremos prudencia hasta donde se pueda.» Dos ilmos. arzobispos y cinco obispos ocuparon la segunda diligencia, montando en la tercera, de vanguardia, el señor D. Felipe N. del Barrio, ministro de Guatemala.

SECCION OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta real familia continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

CORTES.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

PRESIDENCIA DEL SR. MARTINEZ DE LA ROSA.

Extracto de la sesión celebrada el día 9 de Marzo de 1861.

Abierta a las dos y media, se leyó el acta de la anterior, y quedó aprobada. El Sr. RIBO.—Presento una exposición de los ayuntamientos del Campo de Cariñena, adhirién-

dose a la del ayuntamiento de Zaragoza, para que se prolonge el ferro-carril por Canfranc al Pirineo oriental. Como tengo pedida la palabra para cuando se trate de la exposición del ayuntamiento de Zaragoza, me reservo entonces apoyar a la vez las dos.

ORDEN DEL DIA.

Peticiones.

Continuando la discusión que quedó pendiente el sábado, sobre la petición núm. 97, del pueblo de Sanfelices de los Gallegos, dijo

El Sr. OLOZAGA.—Quedé en el uso de la palabra para tratar de esta petición; y estando presente el señor ministro de la Gobernación, diré que estoy conforme con las que S. S. pronunció. Yo tuve la fortuna de defender en el tribunal Supremo de Justicia, al pueblo de Sanfelices de los Gallegos, y de obtener la emancipación de las trabas que sufría a consecuencia de los antiguos señores. Un pleito de esta clase exige dispendios extraordinarios, y los vecinos habían agotado sus recursos, cuando recordando que tenían papel de suministradores de la guerra de la independencia, resolvieron enagenarlo, y encargaron de ello a un individuo de ayuntamiento que lo enagenó al precio corriente.

Si se cree que el gobierno está obligado a averiguar quienes fueron los compradores de ese papel, hallará que en cuanto al pueblo, la enagenación fué legal, y resultará la generosidad de los dueños del papel que lo cedieron en beneficio público. Esto, no obstante, los bienes de aquella ayuntamiento están embargados, y yo quisiera oír del gobierno algunas palabras de consuelo.

El señor ministro de la GOBERNACION.—Siendo los hechos, como creo, tales como S. S. los ha manifestado, no habrá ninguna dificultad en la resolución de ese negocio. No ha habido ahí, a lo que aparece, más que un error de forma; y si los hechos resultan justificados, la resolución del gobierno satisfará los deseos del Sr. Olozaga.

Sin más discusión, quedó aprobado el dictamen. Igualmente se aprobó el relativo a la petición núm. 95.

Se leyó el referente a la petición núm. 99, que decía así:

«Doña Rosa Armada, viuda de D. José Rodríguez, catedrático que fué de retórica y poética en el instituto de segunda enseñanza de Avila, solicita una pensión.»

La comisión propone que pase al señor ministro de Fomento.

El Sr. FIGUEROA.—Suplico al gobierno tome en cuenta la triste situación de los profesores de institutos provinciales, cuyos huérfanos y viudas no tienen derecho a pensión. Sin condición no puede ser más precaria, y el gobierno debe proponer un remedio.

El señor ministro de la GOBERNACION.—Me interesa como S. S. en la suerte de los catedráticos de instituto, y haré presente al señor ministro de Fomento las indicaciones del Sr. Figueroa.

Sin más discusión, se aprobó el dictamen.

Interpelación sobre la política del gobierno en Italia.

El Sr. OLOZAGA.—Por no molestar mucho al Congreso, me reservo para después rectificar las equivocas bastante graves en que incurrió el señor ministro de Estado.

El Sr. MENA Y ZORRILLA.—No tengo la vana pretensión de ofrecer mi cooperación al gobierno. Bastase a sí mismo para sostenerse, y si hubiese menester el apoyo de la mayoría, no sería yo, el más humilde de sus órganos, quien podría dársele. No hablo tampoco a nombre de la mayoría, ni aun a nombre de aquellos con quienes me liga una comunidad íntima de ideas y de sentimientos. Estoy reducido a mi modesta personalidad, y voy a hablar con la independencia del que no hace solidarios a los demás de las ideas que emite.

Comenzaré por observar que estos debates son una especie de protesta contra las ideas de los que los han promovido. Cuando hay tantos adoradores del éxito, vosotros, los que entonces uno y otro ditrambo en loor de una empresa sin héroes, de una guerra sin batallas; los que aplaudís el triunfo de la libertad cuando sueñe el derecho, decidme: cuando todos, gobiernos y pueblos, sienten vivas simpatías por Italia, ¿merecía causa tan noble tener por ministros la fuerza y la impostura? La libertad y la independencia de Italia, ¿merecían ser puestas en antagonismo con otra cosa que vale más, pues representa libertades más íntimas e independientes mas sagradas? Los que defendemos el derecho podemos preciarnos de más liberales que vosotros, de que tenemos más fe en los triunfos pacíficos de la justicia.

Las notas pasadas por el gobierno sobre esta cuestión son el pretexto de este debate, con el cual se ha pretendido también influir en la política interior del país; y digo que esta discusión tiene ese pretexto, pues bien considerada la política del gobierno en Italia, la veo tan intachable, como la creencia no merecedora de elogios si en estos tiempos de perturbación moral no fuese un mérito cumplir con su deber. A los que quieren que el gobierno aplauda la violación de los tratados, que cuando vivimos en la legitimidad y por ella tenemos libertad presentan argumentos que ni caben en la Constitución ni en el orden público, les diré que para pagar tributo a su partido, han tenido que quebrantar la lógica.

Se ataca la política del gobierno por sus adversarios, suponiendo que es una política absolutista. Han visto que en las notas se habla de parientes de S. M., aunque nada han visto desfavorable a la libertad de Italia. Señores, la diplomacia, al constituirse órgano de las relaciones internacionales, se constituye en los tiempos del absolutismo, y tomó la forma analoga a este régimen: el monarca lo personificaba todo, y bajo el colorido de intereses dinásticos, eran cuestiones internacionales las que se debatían.

Verdad es que las ideas modernas exigen una reforma del derecho internacional; pero cómo ha de ser esa reforma? Aquí hay dos escuelas: la revolucionaria y la conservadora; la de 1793 y la de 1789: la primera tiene por principio el desprecio completo de la tradición: donde hay pequeños dominios que hablan una misma lengua, allí presenta la idea de una gran asociación, y los medios de que se vale son las turbas. Esta escuela concluye al fin con la libertad. La escuela de 1789 no camina así; al contrario, calza la tradición con las conquistas pacíficas del derecho.

En 1815 se inauguró un nuevo período: su emblema era el león de Waterloo; su base los tratados de aquella época. No seré yo quien los aplauda; pero importa, antes de fijar lo que tenían de bueno, ver la participación que tenía en ellos la política española. Ha supuesto el Sr. Sagasta que el gobierno había pugnado por sostener aquellos tratados. Esto es inexacto: lo violado en Italia no

son precisamente los tratados de 1815, sino los principios del derecho de gentes; y contra esa violación ha protestado el gobierno.

Dice el Sr. Sagasta: esos tratados desmembraron la Italia: tampoco es esto exacto; esos tratados no hicieron más que restaurar la Italia que estaba antes, menos la república de Venecia que se dió al Austria, y la de Génova que se dió al Piemonte; y España en 1815 no quiso firmar esos tratados, porque sostenía la independencia de los Estados pequeños, y sobre todo la de la república de Génova. De manera que esos tratados fueron injustos, pero no como dice el Sr. Sagasta.

Además, sobre la injusticia y los errores de esos tratados estaba el equilibrio europeo, y estaban los intereses de la paz. ¿Y dónde ha visto el Sr. Sagasta que en los tratados de Viena se pudiese ningún valedor a la libertad? Con esos tratados de 1815 viciado la corte francesa.

Este período histórico terminó en 1848. Entonces principiá la época moderna. Aplaudan los que quieren este nuevo período, yo lloraré siempre la pérdida de tanta libertad, y de tantas ilusiones, cuando se crea que la guerra era ya imposible, cuando la tribuna francesa alumbra al mundo, cuando la libertad pacífica y progresiva se extendía por todas partes.

Este 89 internacional no trataba de crear grandes organismos políticos; respetaba la tradición, respetaba el estado de las naciones. Este sistema tenía la sanción más grande que podía tener: el voto de sus enemigos. ¿Por qué Austria ligó a los Estados de Italia con la obligación de cerrar la puerta a toda libertad? Imaginad una Italia cubierta de Bélgica, y estas Bélgica unidas por un lazo federal: ¿cuánto hubieran tardado en llegar a Viena las ideas triunfantes de toda la Italia unida?

Se me dirá que este sistema es el de un célebre folleto, es la política de Francia; es verdad; pero la Francia y el folleto fueron plagiarios. Esa política es la política de Pio IX. En los primeros días de su pontificado, antes que consejos imprudentes le hubiesen señalado como víctima a la impostura, a la ambición y a la demagogia, comenzó el Pontífice a caminar por la senda de las reformas. Entonces el Papa tenía el sufragio de todas las naciones.

Pero aquella reforma murió a manos del eterno enemigo de la independencia, la guerra; y del eterno enemigo de la libertad, la revolución.

En ningún Estado de Italia fué más dura la reacción en 1814 que en el Piemonte. En 1848, el Piemonte es el último que entra en el camino de las concesiones; más tarde es invitado por Florencia y Roma a la federación, y el Piemonte a rechaza. El Piemonte compromete después la suerte de Italia en una guerra temeraria, y rechaza la paz que se le propuso en Milan y en Londres, paz que llevaba la libertad, no ya hasta el Mincio, sino hasta el Adige.

Comparemos, señores, la conducta de Piemonte con Roma. No se necesita ser cristiano, ni católico, ni sincero siquiera; basta tener corazón para comprender todo lo grande que hay en *non possumus* de Pio IX. Nunca me ha parecido tan legítimo sucesor del que en un frágil leño marchaba tranquilo en medio de las mayores tempestades del mar de Galicia.

Se ataca la política del gobierno por los progresistas puros, porque creen que la unidad de Italia es efecto del principio de la soberanía nacional. A esta idea se opuso por el señor ministro de Estado la comparación de los números entre la población y los votantes de Toscana.

El Sr. Olozaga apeló para contestar esta observación a su propia autoridad, y dijo que por entonces estuvo S. S. en Florencia, y podía asegurar que todos decían ¡viva Italia! No comparo yo a S. S. con un viajero que al llegar a las márgenes del Rin, viendo que una posadera tenía pelo rubio y mal genio, dijo que todas las alemanas eran rubias e irritables. S. S. debe considerar que los perturbadores son gurrillos y viciologeros, y que los hombres sensatos guardan silencio.

No se puede comprender que los amantes de la unidad italiana fuesen a casa del Sr. Olozaga a dar un voto inútil, y no fuesen a las urnas a emitir.

Se ha hablado de la facilidad con que ha triunfado el rey Víctor Manuel. ¿Cuándo en Italia no se abrieron todas las puertas al vencedor? Acaso entre los motivos por los cuales ese país no ha podido formar una gran nacionalidad, el más principal es que los italianos no han conocido a sus verdaderos enemigos ni a sus verdaderos amigos. ¿Tendré necesidad de probarlo? Os hablaré de Odoacro que, recibido al principio con grandes aplausos, cuando fué vencido encontró cerradas todas las puertas? Os hablaré de los franceses, os hablaré de Napoleón, os hablaré de esos mismos austriacos, recibidos en triunfo primero, y aborrecidos después? La suerte de las naciones no se debe fiar a la veledad de las pasiones populares.

Pero debo hacer notar aquí un cambio feliz sufrido en las ideas del Sr. Olozaga hablando de Francisco II. A la primera noticia de la toma de Gaeta, dijo S. S. que la caída del rey había sido ignominiosa. Pero después S. S. ha variado de parecer y ha hecho bien: querer que muriera entre las ruinas de Gaeta, no era proporcionado al adversario que tenía.

Dice el Sr. Olozaga que su valor muestra que era impopular, porque de otro modo podría haber resistido desde el principio. Señores, es preciso estudiar los acontecimientos. Aun presidiendo de que en Cápu triunfó Francisco II, y vinieron a arrebatárselo los soldados de una nación que se había dicho amiga, ¿en qué país no hay gente fanática de alguna idea, y gente capaz de vender a su patria? Pues supongamos que estos hombres se reunen en sociedad secreta y se cubren con tal máscara, que llegan al ejército y a los empleos, y son generales de confianza, y son ministros, y en el día del peligro faltan al rey.

Estas sociedades secretas apelan a toda clase de medios, incluso el regicidio. Entretanto, los gobiernos de Europa comienzan por denunciar los abusos, ofrecen protección a condición de que se tomen ciertos consejos, y cuando se toman los consejos, la protección se retira para volverla de un modo tardío e incompleto. Y se imponen ministros a ese rey, y alianzas que han de ahogarlo; y en frente de él se coloca otra potencia que puede faltar a la verdad sin faltar a su honor; que puede desaprobar una expedición, para decir luego: esos eran la vanguardia de un ejército conquistador.

Vease si en esta situación fué fácil el derrocamiento del rey de Nápoles.

Yo aplaudo el valor y franqueza de Garibaldi; pero en esta empresa no hay héroes. Nápoles fué vencido como Troya.

La unidad de Italia no era posible de otra manera. Ya lo había conocido el grande historiador César Balbo, condenando proféticamente esa política tortuosa que se ha seguido. Condenando la política de Maquiavelo, decía: «No se restaura, no se

conserva la libertad de una nacion por las insidias. Empresas de esta clase requieren la union de los animos, y esta no se consigue sino por una virtud leal, clara, publica.

Con gran sorpresa mia, oí ayer al Sr. Olózaqa una revelacion para mi nueva. Como última prueba de ser la unidad el deseo general de los italianos, invocó S. S. el voto universal, y decía: la conquista es un medio de adquirir. Pues lo que se da a la fuerza, ¿se negará a la voluntad? ¿Y admite S. S. que la guerra sea legítimo medio de adquirir? No: en Europa no será nunca la conquista medio legítimo; han de venir los tratados a legitimar lo adquirido.

¿Y admite S. S. el sufragio universal en la esfera del derecho de gentes? Pues ¿por qué no en el régimen interior? Y si lo admite en el régimen interior, ¿por qué no sentarse más arriba? Admitir el sufragio universal en las relaciones internacionales y no en el régimen interior, me ha parecido una cosa ilógica. S. S. dice que no admite el sufragio universal en la vida interior, porque la ilustracion no ha eundido bastante.

Pues pregunto yo: si con relacion a lo que está dentro de casa, las últimas clases de la sociedad no están bastante ilustradas, ¿es posible que lo sean para intervenir en el derecho de gentes y en las relaciones internacionales? Precisamente S. S. admite el sufragio donde es inadmisibile. En el interior yo creo el sufragio universal funesto a la monarquía y a la libertad; pero no lo creo absurdo. En las relaciones internacionales las naciones son ciudadanos de la gran república europea; sus constituciones son los tratados; y el sufragio universal en esa gran república consiste en que el débil y el fuerte tengan voto en el Congreso; en que los fuertes respeten a los débiles, en que los tratados se cumplan por todos.

Esto en cuanto a la teoría del sufragio universal, pero algo hay que decir sobre su práctica. Si fuese cierto que la vez última en que puso su planta en España el representante del absolutismo venia con el sufragio universal, ¿verdaderamente ese sufragio habria tenido una buena representación en nuestro país? Señores, el sufragio universal, como dice un célebre escritor, no sirve sino para las grandes abdicaciones.

Pero hay más: no son las fronteras las que constituyen las naciones; las constituyen una historia, unas costumbres, una bandera, un grito de guerra, y cómo hemos de creer que Florencia, la ciudad de los Médicis, y Nápoles, monarquía de siete siglos, consentian en abdicar y ser provincias de una nacion que no lo ha sido nunca? El señor Sagasta, que ha dado a Nápoles por patria a Horacio, a Virgilio, a Ovidio, de los cuales, por desgracia de S. S., ninguno nació allí, el Sr. Sagasta debe recordar que en tiempo de la liga lombarda, en que la Italia estuvo más cerca de su unidad, la Italia no se constituyó porque no tuvo idea de su unidad.

Roma tenía ciudades ligadas con ella, pero desunidas entre sí; y cuando la espada de los bárbaros cortó el lazo que a Roma les unia, quedaron municipios aislados. Y, señores, esa patria que se trata de constituir, es tan de los italianos como nuestra; pues nosotros fuimos tan individuos del imperio romano como ellos. Es, pues, una idea nueva, peregrina, revolucionaria, la de construir una Italia por que allí hay un idioma comun. Si la lengua constituye nacionalidad, ¿por qué no la raza? ¿Por qué no será una raza latina? Ved cómo se dan la mano los sueños de los ambiciosos, sueños que ha pagado nuestro país con tanta sangre.

¿Cómo creer que el sufragio era verdadera expresión de la voluntad del pueblo de Toscana, cuando coincidía con el voto de Saboya y Niza? Saboya, que habia defendido a Italia con su sangre, ¿cómo habia de querer salir de esa Italia cuando se regeneraba? No; aquí no ha habido regeneracion; lo que ha habido es un cambio, un comercio de italianos, un contrato de *do ut des*, un contrato que los romanos, con profético poder, quisieron quedase inominado.

Este contrato no ha sido una cosa nueva. Víctor Amadeo III firmaba un tratado en 1796, en virtud del cual, dejando en poder de Austria posesiones italianas, tomaba el apoyo de esta potencia para extenderse por Suiza. Su sucesor hace el mismo tratado con Francia para extenderse por Italia. El Sr. Olózaqa tenía que nuestras discordias civiles viniesen a ser exacerbadas por el sentimiento religioso; y esta aprension suya parece que debia obligarle a una gran circunspeccion. Pero esa circunspeccion no se aviene con ciertas ideas que emitió S. S. Aludó a lo de la union ibérica. S. S., al tratar esta cuestion, creí que lo haria para poner algun correctivo a lo que habia dicho el Sr. Sagasta; pero S. S. hizo todo lo contrario, pues presentó la union ibérica como una necesidad inmediata, y cuando el Sr. Sagasta solo la habia presentado como remota, S. S. dijo que la union italiana podia hacer necesaria la union ibérica.

Yo no comprendo la fuerza de este argumento; si para algo sirve esa nacion italiana que aspira a constituirse, ha de ser para contrapeso de la Francia; y si nuestra independencia ha estado segura cuando no habia este contrapeso, ¿cómo ha ser necesaria, cuando le haya, esa union ibérica, esa quimera?

Pero esta es, además, una idea peligrosa para la Europa, a quien se da a entender que hay aquí pensamientos ambiciosos; peligrosa para el pueblo a quien se amenaza con la absorcion, y peligrosa aquí porque esa union no se puede hacer sino por buenos medios. ¿Pues qué! En este sitio una persona tan respetable, ¿deberia lanzar así una tea de discordia que pueden aprovechar los aventureros, los discolos? Si S. S. hubiera, al fin, dicho los medios de llevar a cabo esa union, ya que dijo el objeto, el mal estaria reparado; porque yo no culpo a S. S. sino por el silencio. Si los medios no son los que se han empleado en Italia, ¿a lo menos eso es lo que a mí se me ocurre desde luego al oír al Sr. Olózaqa, y temo que esa mala senda en que van los italianos sea la que S. S. ha demostrado abierta.

Una de las cosas que más vivamente han herido al progresismo puro, es el empeño del gobierno en sostener la legitimidad, que, en sentir de SS. SS., es muy poca cosa. Porque SS. SS. son puramente progresistas, que no miran a lo pasado para destruirlo ni para conservarlo, y así los hombres de gobierno los desconocen, y los anarquistas los repudian; dichosos ellos si en circunstancias difíciles dejan a salvo el honor de su bandera. SS. SS. lo que quieren es una república con monarquía, es decir, nada; pero este nada, está en armonía con ese principio de la soberanía nacional, cuyo órgano verdadero es el sufragio universal.

Con este principio, S. M. sería Reina de los progresistas, que sería ser poca cosa; pero como además su derecho es hereditario, por eso es Reina legítima de España. La monarquía no se satisfice con el voto de una generacion; ha menester el sufragio de muchas generaciones; y esta legitimidad es más necesaria que en otra alguna en los gobiernos representativos, porque solamente ella puede entregar sus actos y sus ministros a los vientos de la discusion.

La segunda restauracion en Francia trajo al trono una dinastía que venia muerta: mas cuando vino una dinastía nueva no pudo arrostrar las disensiones y sus peligros. Felices nosotros que tenemos toda la legitimidad; y como la legitimidad es el asiento de la libertad, el gobierno que ha sostenido la legitimidad de Italia, ha sostenido las libertades italianas.

La verdad es, señores, que en el mundo solo la democracia está hoy de enhorabuena. Yo no deploro la herida que ha recibido la veneranda institución del trono en la persona de Francisco II; ha

caído noblemente: donde deploro la herida de esa institución es en la persona de su vencedor.

No nos deslumbran las aclamaciones que le siguen; tambien las tuvo Pío IX; pero nos ilusionen esas palabras que podría repetir, como Napoleón al ceñirse la corona de hierro: *¡gare à qui la touche!* Nada hay sólido si no se asienta sobre los principios morales; pero ¿qué principios morales han quedado en pie en la península italiana?

Voy a tratar de la cuestion de Roma. Verdaderamente el Sr. Olózaqa es cruel para las personas a quienes elogia. Yo estoy seguro del amargo sentimiento que sus palabras habrán llevado al corazón del venerable obispo de Barcelona, cuya pastoral leyó S. S. en parte, porque S. S. nunca suele leerlo todo. Si hubiera leído más, habria visto que el prelado no era partidario de la abolicion del poder temporal, sino que decía que las puertas del infierno no prevalecerian contra la Iglesia.

El obispo, comentando las palabras del Evangelio, consolaba a sus ovejas diciéndoles: no temáis; el Papa en cualquier parte será jefe de la cristiandad. ¿Era esto decirles que era lícito llevar al Papa de una parte a otra? El Papa no ha estado solo en Avignon y en Fontainebleau: ha estado en las Caticumbas. Pero podia citarse esto para decir que era lícito llevarle al martirio? El obispo decía que al fin vendría a triunfar el derecho.

¿No habia de prevalecer la justicia sobre la violencia? No seríamos liberales si no lo creyésemos.

El Sr. Sagasta presenta dos soluciones a la cuestion romana. La una era la que en otra parte ha propuesto un senador augusto, diciendo que la naturaleza habia dividido a Roma en dos partes iguales. ¿Peregrinas coincidencias! Cuando se trata de unidad italiana, los progresistas coinciden con un príncipe proscribo, con D. Juan; cuando se trata de ideas religiosas, coinciden con los protestantes; cuando se trata de independencia, coinciden con un Napoleón.

La segunda solución del Sr. Sagasta era llevar al Padre Santo a Jerusalén. El señor ministro de Estado le contestó: ¿vamos a llevar al Santo Padre a perecer víctima de los sarracenos?

Debo decir a S. S. que para la Iglesia no ha terminado nunca la edad de los mártires: donde hay ignorancia é idolatría que combatir, allí va el misionero, allí va el mártir. Pero es necesario no confundir el espíritu de los primeros tiempos con los presentes.

Cuando Roma recibió el cristianismo, la silla del Soberano Pontífice se estableció allí como asiento de la civilización. ¿Ignora S. S. que bajo la túnica del misionero va el médico, va el artista, va el poligloto, va el hombre científico?

Pues véase por qué es menester que el asiento del catolicismo esté en el asiento de la civilización, para poder producir predicadores que al mismo tiempo vayan conquistando almas a la fe y pueblos a la civilización, no al comercio, no al ocio, no a los vicios.

Y luego, no sé, señores, cómo al Sr. Sagasta, en su clarísimo talento, se le ocultaba que por salvarse de Roma, donde a su modo de ver está el nudo de la cuestion europea, que S. S. llama la cuestion italiana, llevaba S. S. al Santo Padre a Jerusalén; es decir, al nudo de una cuestion universal, y, por desgracia, insoluble.

Y además, señores, aquí no hay solo que consultar la voluntad de los romanos; hay que consultar a todo el orbe católico, que tiene por patria a Roma, y que tiene un interés en evitar que la riqueza artística allí acumulada sea patrimonio de un rey de Italia. Yo protesto contra esa usurpacion; todos protestamos contra ella: *civis romani sumus*. Levantémonos contra los galos cisalpinos que amenazan al Capitolio.

Voy a concluir, señores: no me atrevo a molestar por más tiempo al Congreso; yo no defiendo aquí la política del ministerio: hablo por mi cuenta exclusivamente, y por tanto no me meto a considerar si la política seguida ha sido más ó menos liberal. Veo solo que ha sido una política de estricta neutralidad, y por eso la aplaudo, convencido de lo necesario que era para que Europa pueda encontrarnos mañana cuando nos necesite, y comprenda cuánto se ha perdido en el tiempo en que la fortuna nos abandonó, sin que jamás nos hubiéramos hecho indignos de ella.

El Sr. SAGASTA.—Señores, el Sr. Mena y Zorrilla ha defendido energicamente los tratados de 1815, que yo habia energicamente combatido el otro día; y ha querido poetizarlos hasta el punto de creerlos dignos de la alabanza del pueblo español; pero por más esfuerzos que haga S. S., nunca podrá sacar de su quicio la verdad, y no podrá convencernos de que esos tratados no sean el triunfo del absolutismo contra la libertad, y de que en ellos se tratara bien mal a la nacion española, que fué la primera en resistir al coloso del mundo a cuya caída se hicieron esos tratados.

Después de otras consideraciones, ha venido S. S. a decir que, según nuestras doctrinas, la Reina debía ser Reina de los progresistas. No, señor Mena; nadie ha sostenido eso, y por fortuna no sucede así, porque ¿ay de los monarcas que descienden de su elevado puesto para venir a afiliarse en un partido político! este, como todos, no puede más de ser transitorio, y cuando el partido pasa...

El Sr. VICEPRESIDENTE (marqués de la Vega de Armijo).—Sr. Sagasta, S. S. comprende que eso es discurrir de nuevo, y no rectificar.

El Sr. SAGASTA.—No solo por el respeto que debo a esa silla, sino tambien por el particular afecto que me inspira S. S., me apresuro a obedecer a sus indicaciones, y dejo ese punto.

Ha hablado el Sr. Mena de los escrutinios, y yo no me he ocupado de tal cosa, ni necesitaba hacerlo, porque antes del escrutinio se habia manifestado bien clara la voluntad nacional; y la prueba de eso es el triunfo que allí han tenido las ideas de union y de independencia, que no han triunfado por las traiciones hechas en Nápoles, sino por la voluntad del pueblo, pues España en 1808 se vió completamente desamparada por todo el mundo, y sin embargo, triunfó de la invasion extranjera, porque estaba contra ella la opinion nacional.

Suponía tambien el Sr. Mena que mis compañeros y yo nos llamábamos progresistas *puros* porque teníamos los ojos fijos en el porvenir, olvidando lo pasado y lo presente. Tampoco es esto exacto; nos llamamos *puros* para distinguirnos de otros, que no habiendo seguido nuestra conducta, quisieron continuar con el nombre de progresistas. Y no nos hemos quedado satisfechos porque, habiéndonos arrojado de aquí a cañonazos quedara ileso nuestra bandera: nos quedamos tranquilos, porque después de eso podíamos decir: «todo se ha perdido menos el honor.» ¡Ojalá que todos pudiesen decir otro tanto!

El Sr. OLOZAGA.—El Sr. Mena, diciendo que hago más agravio que favor a las personas a quienes dispense elogios, me ha quitado el derecho de poder hacerle justicia por su florido discurso; pero ya que no deba hacer esto para no incomodar a S. S., voy al menos a rectificar algunas de las cosas que ha dicho.

Manifestaba S. S. que si yo vi en Florencia el entusiasmo de los que se alegraban por la unidad de Italia, no pude ver el sentimiento de los que en su retiro gemian al ver las calamidades que caian sobre aquel desventurado país; y lo digo a S. S. más; me alegro de no haberlos visto, porque yo no quiero ver a aquellos que gimen cuando su nacion entera se regocija por haber recobrado su independencia.

Respecto de lo que yo habia manifestado de las costumbres de Roma, decía S. S. que sin duda habia tenido allí *mala compañía*. Yo extraño que a mi edad se me suponga ya buscando *compañías* de las que queria sin duda indicar el Sr. Mena, y dejo al juicio del Congreso el buen gusto de estas palabras de S. S.; pero le debo decir que durante

mi estancia en Roma, nunca, ni por curiosidad de viajero, he frecuentado ningun paraje donde no concurrieran los *monseñores*; y que estando últimamente en esa ciudad, me he escandalizado de ver el poco respeto con que se trataba al Sumo Pontífice, y que nacia indudablemente del disgusto que allí inspira su poder temporal.

En cuanto que habíamos asegurado la integridad de los dominios del Papa, repito que lo hemos hecho, y el número 27 de los documentos remitidos al Congreso es el despacho a que yo me he referido. En este despacho hay un párrafo que dice así: «... Que el gobierno español insistirá, si fuese necesario, para que se mantuviese la integridad de los Estados Pontificios, y para que se respetase la independencia del Padre Santo, sin que por esto el gobierno de S. M. dejase de ver con agrado las reformas que Su Santidad tuviese a bien hacer espontáneamente...»

Por último, el señor ministro me dijo que era falso lo que yo habia asegurado de que nuestro ministro en Gaeta habia aconsejado la guerra a Francisco II. Voy a leer al Congreso lo que dice el *Moniteur Universel* del 30 de Enero del año actual: Circular dirigida por el ministro de Negocios extranjeros de S. M. siciliana a los representantes de las potencias acreditadas cerca del rey Francisco II en Gaeta.

«Gaeta 18 de Enero de 1861.—El infrascrito, presidente del Consejo de ministros y encargado del ministerio de Negocios extranjeros de S. M. siciliana, tiene el honor de dirigirse a S. E. monseñor Giannelli, nuncio apostólico de la Santa Sede, en calidad de decano del cuerpo diplomático, para darle a conocer que S. M. el rey, su augusto amo, deseando tener cerca de su persona en circunstancias extremas los representantes de los soberanos, aliados y amigos suyos, se ha decidido a invitar formalmente a todos los jefes de las legaciones extranjeras a permanecer en Gaeta, donde por interés general están acreditados.

«Otra circunstancia ha determinado aún a S. M. Cuando en el día de ayer el cuerpo diplomático se ha presentado al rey, los jefes de legacion que tuvieron la honra de hablarle del sitio de Gaeta, le han animado a resistir, aun después de que la retirada de la escuadra francesa hubiese dejado el campo libre para un bloqueo y un ataque por mar. Desde hoy S. M. presta una gran consideracion a las opiniones de ministros tan importantes. Los consejos extensamente motivados de estos honorables representantes, han sido a favor de la resistencia. Después de haber oido estos consejos, S. M. no duda ya, y ha tomado inmediatamente la resolucion de encerrarse en Gaeta y defender hasta el último instante este resto de la monarquía.»

Véase, señores, si era exacto lo que yo habia aquí manifestado; véase si era cierto que teníamos al mismo tiempo un ministro de guerra en Gaeta y un ministro de paz en Turin.

El señor presidente del CONSEJO DE MINISTROS.—Señores, me levanto únicamente para decir al Sr. Olózaqa que, a pesar de lo que ha leído, el gobierno sostiene que es inexacto que nuestro ministro aconsejara la guerra a Francisco II. El gobierno sostiene esto, por dos razones: la primera, porque su ministro cerca de Francisco II le manifestó que cuando en esa sesion a que se refiere el periódico que ha leído el Sr. Olózaqa se le preguntó su opinion, dijo que la reservaba; y porque además, habiéndome leído el señor embajador de Francia, siendo yo ministro interino de Estado, un despacho de su ministro de Negocios extranjeros, en que se decía que nuestro plenipotenciario en Gaeta se habia manifestado partidario de la guerra, al cabo de unos días me leyó otro en que se manifestaba que esa noticia no era exacta. Conste, pues, que era inexacto lo manifestado por el Sr. Olózaqa.

El Sr. OLOZAGA.—Si eso fuera así, entonces la culpa de mi inexactitud la tendrá el gobierno de S. M., que ha permitido circular sin correctivo una noticia que podia dar lugar a que se pensara que España habia seguido en esta cuestion una política de dos caras.

El señor presidente del CONSEJO DE MINISTROS.—El gobierno no necesitaba hacer eso, porque a los pocos días se circularé el despacho que a mí me leyó el señor embajador de Francia, en el cual constaba que la noticia de que el ministro de España en Gaeta habia aconsejado a Francisco II la guerra, no era exacta.

Después de rectificar los Sres. Mena y Sagasta, acordó el Congreso pasar a otro asunto.

Se leyó y pasó a la comision una enmienda al proyecto de ley de diputaciones y gobiernos de Provincias.

El Sr. VICEPRESIDENTE (marqués de la Vega de Armijo).—Orden del día para el lunes: la discusion pendiente.

Se levanta la sesion. Eran las siete menos cuarto.

EL REINO.

MADRID 11 DE MARZO DE 1861.

CRÓNICA PARLAMENTARIA.

CONGRESO.

En la sesion celebrada el sábado oímos con mucho gusto el discurso pronunciado por el Sr. Mena y Zorrilla en defensa de la política del gobierno en los asuntos de Italia. Nutrido de sanas doctrinas, sin descubrir en todo el pasion ilegítima ni espíritu de partido, abundante en citas históricas adecuadas a su objeto, fué sin duda un gran triunfo para el joven orador, y un motivo de pura alegría para todos los hombres sensatos. Su forma y distribucion correspondió dignamente al fondo, é hizo ver que los progresistas, superficiales y casi frívolos en sus creencias políticas, no pecan tampoco ni por exceso de instruccion, ni por el acierto con que miran las cuestiones internacionales.

El derecho de gentes europeo halló en el señor Mena un elocuente defensor, mostrando las contradicciones históricas en que ha incurrido tantas veces el Piemonte, su ambicion sin límites, y el heroico papel que ha tocado desempeñar en esta época de tribulaciones al virtuoso sucesor de San Pedro. S. S. atacó tambien de frente la tortuosa é inexplicable política del tercer de los Napoleones, sin miedo ni rebozo, como quien no teme el efecto que pudieran producir sus palabras, confiado en la justicia y en la verdad de su causa.

El Sr. Mena abogó tambien por la neutralidad de España en estos asuntos, si bien no sa-

có en esta parte todo el fruto que pudiera haber sacado quien observara estos sucesos con esperanza de utilizarlos. En nuestro juicio, por lo ménos, tiene gravísima importancia un punto estrechamente ligado con esos hechos, del cual hasta ahora no recordamos que se hayan hecho cargo los oradores de la oposicion ni los ministeriales. La política de neutralidad es por regla general una política egoísta y utilitaria, fundada casi siempre en la debilidad propia. La podríamos comparar a la conducta que observan ciertos hombres cuando ven que otros dos discuten ó vienen a las manos, y se limitan a ser meros observadores de la lucha sin tomar la defensa del débil contra el fuerte, ni la del que lleva la razon contra el que carece de ella, ya por una indiferencia que se da la mano con el más refinado egoísmo, ya por interés propio y por carecer de creencias profundas, ya, en fin, porque conocen su falta de fuerzas para terciar en la contienda con condiciones de buen éxito.

España se encuentra en este último caso, habiendo mostrado su gobierno, aunque de un modo metódico y con mil vacilaciones y alternativas poco propias de la grandeza de la causa y del espíritu de la nacion, el disgusto con que miraba la conculcacion del derecho europeo de causar a todo buen español, a todo verdadero católico la tristísima suerte del Soberano Pontífice. Si, pues, nosotros nos mantenemos neutrales, no es porque aprobemos los desmanes que se han cometido en Italia, ni el despojo y los violentos ataques que están sufriendo Pío IX y tantos otros dignísimos soberanos. Si España fuera una nacion tan poderosa como en tiempo de Carlos V ó de Felipe II, si sus recursos pudieran equipararse a los de otros Estados actuales de Europa, no solo no debiera haber contemplado de lejos esos acontecimientos, sino que el hacerlo así hubiera sido un gran delito. Creemos, sin embargo, que algo más hubiera podido hacerse de lo que ha hecho el gobierno en una cuestion a la que no somos ni podemos ser agenos, como hijos de la nacion católica por excelencia.

¿Cuándo se ofrecerá ocasion como esta para predicar la union y concordia de los españoles en todo aquello que tienda al engrandecimiento de la patria, lo cual es tan superior al espíritu de partido, que en nuestro juicio es acaso el único medio de encaminar a todos y a cada uno por su verdadero cauce? ¿Y quién sino el gobierno debiera haber tomado en ello la iniciativa con un proceder franco, noble, resuelto y verdaderamente español?

Esto parece tan obvio que no se comprende que hasta ahora ninguno de los oradores que han intervenido en esos debates se haya hecho cargo de ello, por razones que no podemos adivinar, aun tratándose del Sr. Mena y Zorrilla, que sin darse infulas de diputado ministerial ha defendido al gobierno mejor y más cumplidamente que ninguno de los ministros. En su discurso, pues, tan notable por el saber que revela, por su erudicion y clásicas formas, por la rectitud de intencion y de miras que en todo él se descubre, echamos de ménos esa parte, que hubiera sido otra de tantas joyas como lo adornan, ó mejor dicho, su corona y más bello remate.

Tal es la consecuencia de práctica aplicacion a nuestro país que debió sacarse de estos debates; consecuencia de grandísimo interés para excitar a los partidos políticos y a sus hombres más caracterizados a que se levanten alguna vez sobre las miserias que nos rodean y eleven su aliento a más altas y trascendentales empresas. No se deja, sin embargo, de comprender que ni el gobierno ni sus amigos hayan tratado de este punto, porque acaso se convirtiera en argumento terrible para el uno y para los otros. Si España es débil, si no puede luchar con la Italia revolucionaria ni defender el poder temporal del Papa, si hace ascos a Francia é Inglaterra unidas para proteger a los piemonteses, ¿quién toca en ello la mayor responsabilidad? ¿Qué han hecho para engrandecerla en tres años los actuales gobernantes? ¿Qué partido han procurado sacar del gran ejemplo que dimos cuando la guerra de África? ¿Dónde están las reformas de verdadera importancia, dónde las leyes útiles y fecundas en provechosos resultados; dónde, en fin, tantas promesas de regeneracion, casi perdidas ya por completo?

Diremos, para concluir, que los progresistas salieron mal trechos de este debate, especialmente los Sres. Olózaqa y Sagasta, a pesar de las rectificaciones que hicieron al acabar su notable discurso el Sr. Mena. Este diputado por su parte probó cumplidamente la verdad de aquel precepto de Horacio que aplicado a la oratoria diria así: *loquenti recte sapere est principium et fons*, ó lo que es lo mismo, que el Congreso no es el lugar más a propósito para echar coplas de repente. Antes conocíamos

al Sr. Mena como joven de vasto saber: hoy podemos añadir que discurre con tanto juicio como habla con correccion, gracia y elocuencia.

En otro lugar insertamos integro el discurso que pronunció en la alta Cámara el señor marqués de la Habana, con motivo de las injuriosas apreciaciones de lord Palmerston en el Parlamento de Londres, relativas a la buena fe de España en el cumplimiento de los tratados que tienen por objeto abolir la trata de negros.

La peroracion del no há mucho tiempo dignísimo capitán general de la isla de Cuba es una noble protesta contra las torpes palabras del primer ministro de la reina Victoria. El general Concha ha levantado su autorizada voz para vindicar la honra de nuestra patria vulnerada, demostrando la incomprensible injusticia con que acusa a una nacion activa y generosa de falta de buena fe en sus relaciones internacionales, un hombre de Estado en quien nunca han resplandecido la mesura y dignidad que deben caracterizar a los que representan a un gran pueblo.

Llamamos la atencion hácia dicho notable discurso, y sentimos no haber podido comunicarlo antes a nuestros lectores por falta de espacio.

Merecen llamar seriamente la atencion los estados de recaudacion y pagos correspondientes al mes de Enero último que aparecen en la *Gaceta* de hoy.

La total recaudacion, tanto del presupuesto de 1860 como de 1861, asciende a 130 millones. Los ramos eventuales de mayor importancia presentan un exceso de recaudacion de más de 11 millones, comparada, con la recaudacion obtenida en Enero de 1860.

Se distinguen entre estos ramos los de aduanas, cuya subida de valores pasa de 3.700.000 rs.: el de tabacos, que excede de 3.900.000, y el de sales, con una subida igualmente de más de 1.300.000.

La totalidad de los pagos consiste en 229 millones por ambos presupuestos de 1860 y 1861; y aunque se incluyan en estos pagos los verificados por cuenta del semestre de la deuda que venció en 31 de Diciembre, es lo cierto que no habiéndose recaudado en Enero más que 130 millones por los presupuestos, presenta ese mes un déficit contra el Tesoro de noventa y nueve millones de reales.

A las noticias que ya hemos dado sobre el particular, añade hoy un diario ministerial lo siguiente:

«El 21 de Enero salieron de Méjico el Sr. Pacheco, el conde de Alcazar, D. Felipe Neri del Barrio, ministro de Guatemala, el delegado de Su Santidad monseñor Clementi, el arzobispo de Méjico y los obispos de Mechoacan, Guadalajara, Potosí, Linares y Penagra, y llegaron a Veracruz el 27 a medio día. El populacho recibió a pedradas a tan ilustre comitiva, en medio de los mueras más execrables. El delegado de Su Santidad tuvo que refugiarse en el consulado francés, y a los obispos se los puso presos, para evitar mayores males, con objeto de juzgarlos. Por este motivo no se embarcaron para la Habana más que el Sr. Pacheco, el conde de Alcazar y monseñor Clementi, los cuales llegaron a la capital de Cuba el 4 de Febrero en el vapor de S. M. *Velasco*.

Después de correr inminente peligro, el general Miramon logró entrar de incógnito en Veracruz y embarcarse en un buque que le condujo tambien a la Habana. Los destierros seguan en Méjico en mayor escala, y entre los proscrios se contaba el encargado de negocios del Ecuador. Juárez habia cambiado su ministerio, por no estar satisfecho el pueblo de la moderacion de los individuos que desempeñaban las carteras. Es muy posible que a estas fechas el general Gonzalez Ortega, el vencedor de Miramon, haya caído en completa desgracia por opinar que la prudencia y la religiosidad no están renidas con el liberalismo, como Juárez parece creer.»

La Correspondencia de hoy dice lo siguiente: «Las últimas noticias de la Habana son del 16, pues ni aun las llegadas por la vía de Inglaterra alcanzan más que hasta el 15 de Febrero. A aquella fecha segun la tirantez mercantil de la plaza por efecto de los sucesos de los Estados Unidos; pero afortunadamente han sido las desgracias ménos que las que se temian. Todavía no se habia realizado el anuncio de que una de las casas que se habian presentado en quiebra era la acreditada de Noriega y compañía. Estaba liquidando, y aunque nadie podia conocer la extension de sus compromisos, personas de crédito esperaban que su activo excedería a su pasivo en un millón de pesos.»

Tambien nosotros tenemos cartas del 16, y vemos que afortunadamente no ha sido todavía confirmada la noticia que algunos habian anunciado respecto a la quiebra de la antigua y respetable casa de los Sres. Noriega, Olmo y compañía, que tiene un capital muy considerable en fincas; pero la crisis mercantil continuaba en aumento, y se temia que se resintiesen algunas de las casas principales de aquella isla, a no recibir pronto el auxilio que se prometian y era de esperar, en vista de sus garantías y activo suficiente a cubrir sus compromisos.

El señor ministro de Hacienda ha encargado al Consejo de Estado, con arreglo a la ley orgánica del mismo, la redaccion de un proyecto de ley relativo a las cargas de justicia que hoy percibe el Sr. Infante D. Sebastian.

Pronto llegarán a Madrid, segun dice un periódico, los 16 prelados mejicanos expulsados por Juárez: entre ellos viene el Sr. Munguía, obispo de Mechoacan, varon tan eminente por su virtud como por su ciencia.

Ha sido elegido diputado a Cortes en el distrito de Medina de Pomar, provincia de Burgos, el candidato ministerial Sr. Careaga.

El sábado tuvieron en el Congreso una larga conferencia el señor duque de Tetuan y el Sr. Rios Rosas, acerca de lo cual dice *La Correspondencia* lo siguiente:

«La conferencia que han tenido esta tarde los señores duque de Tetuan y D. Antonio de los Rios y Rosas ha durado más de una hora, y temerosos de equivocarnos sobre lo que en ella ha pasado, diremos únicamente que estos dos hombres políticos no han estado completamente acordes sobre

el modo de apreciar la situación de las cosas públicas.

La Gaceta de hoy trae el decreto, fecha del 8, por el cual se admite la renuncia que ha hecho D. Miguel María Fuentes del destino de contador general de la deuda pública.

Por otros decretos de igual fecha que publica asimismo la Gaceta de hoy, se nombra contador general de la deuda á D. José Cabello y Goytia, administrador de Hacienda pública de la provincia de Madrid, y para esta plaza á D. José Fernandez de Riero, inspector general de contribuciones é impuestos.

Segun un periódico de noticias, el Sr. Permanyer ha sido proclamado candidato de la union liberal en Barcelona. El comité formado para dirigir la eleccion está presidido por un progresista, y formado por hombres influyentes de todas las opiniones. El gobierno permanece neutral en medio de la lucha, segun el mismo periódico.

En la subasta celebrada hoy en la direccion general de rentas estancadas para contratar las conducciones terrestres de sal en la península é islas Baleares desde 1.º de Abril próximo hasta 31 de Marzo de 1861, ha quedado adjudicado el remate á favor de D. José Ruiz de Quevedo, por el precio de 11 rs. 49 céntimos. El precio fijado por el gobierno fué el de 12 reales 75 céntimos.

La Gaceta de ayer inserta varios reales decretos por los que S. M. se ha servido acordar los siguientes nombramientos:

Para comisario régio del Observatorio astronómico de esta corte á D. Francisco Luxan.

Para director de armamentos y pertrechos en el ministerio de Marina, en virtud del relevo de don José Martinez y Vinalte que ha pasado de comandante subinspector al arsenal del Ferrol, al brigadier de la armada D. Francisco de Paula Pavía.

Y para las plazas de vocales de la junta consultiva de la armada creadas por real decreto de 6 del actual, á los brigadieres D. Antonio Osorio y Mallen y D. Ramon María Pery y Ravé.

Se ha adjudicado la concesion del ferro-carril servido por fuerza animal desde Carcagente á Gandía á D. Vicente Alcalá del Olmo.

La direccion general de correos publica los pliegos de condiciones bajo las cuales se sacan á subasta las condiciones diarias de ida y vuelta de los correos entre Plasencia y Coria y entre Córdoba y Lucena.

El 5 del próximo Abril, á las doce de su mañana, se adjudicará en subasta pública las obras de afirmado del trozo 14.º de la carretera de Manresa á Gerona, cuyo presupuesto asciende á 168,639 reales y 56 céntimos; como tambien las de un puente sobre el barranco Beniopá, en el trozo 5.º de la de Alicante á Sella, presupuestadas en 157,001 reales y 89 céntimos.

En el mismo día y hora se efectuará la adjudicacion de las obras que faltan en los puentes Buró y Lliesca, entre Besalú y Olot, cuyo presupuesto es de 269,576 reales 4 céntimos, y las de los de Funés, Matamós, Romansa y Revardit, entre Gerona y Olot, presupuestadas en 608,727 reales 4 céntimos.

Han salido de Cádiz para la Habana la fragata Princesa de Asturias y las goletas Colon y Cruz destinadas á reforzar nuestra escuadra en la isla de Cuba.

El Excmo. señor patriarca de las Indias, limosnero mayor de S. M., ha entregado al señor gobernador civil de la provincia, presidente de la junta superior de cárceles, la cantidad de 13,800 reales destinados al socorro de los pobres presos de las cárceles y al auxilio de las familias de los mismos más necesitadas á juicio de dicha junta.

Mañana á las diez de la misma tarde principia la vista de la causa del Sr. Yañez Rivadeneira.

Hoy empieza sus reuniones la comision nombrada por el gobierno para distribuir los 16 millones de reales destinados á auxiliar á los que han sufrido daños en las últimas inundaciones.

Parece que dentro de dos ó tres dias llegará á esta corte el ingeniero general señor marqués de los Castillejos, que ha terminado la revista de inspeccion de nuestras plazas del Mediterráneo en la Peninsula y en Africa.

Se ha concedido la cruz de beneficencia de tercera clase á D. Pedro Berruexo, vecino de Oribeña, por los servicios que prestó en el tiempo que el cólera morbo affligia aquella ciudad.

Aplaudimos las recompensas que se conceden por tales servicios, sobre todo cuando se dan con tanta justicia como la á que se refieren las anteriores líneas.

Parece que por una real orden que todavía no ha llegado á publicarse, se suprime el uso del baston de mando en la clase de jefes de todas armas, comprendidos desde coronel inclusive abajo.

Dícese que la escuela de caballería establecida en Alcalá de Henares pasará á Valladolid, y ocupará uno de los lados del edificio en que está el colegio de cadetes de la misma arma, aunque con separacion absoluta.

Para el arreglo de estas obras, y sobre la cesion del terreno que el ayuntamiento de Valladolid ha ofrecido para picaderos, fraguas y demás oficinas, ha pasado á aquella ciudad el señor director general de caballería.

En la Bolsa de hoy quedaba el consolidado á 49, publicado; á plazo, 49-40, 35, 25, 20 y 15, á fin cor. ó á vol.

El diferido á 42-40 d., no publicado; á plazo, 42-70, 65, 60 y 50 á fin cor. vol.

La deuda del personal á 23-40, publicado.

CUESTION DE AFRICA.

El dia 8 no ocurría novedad alguna en los puntos ocupados por nuestras tropas, y continuaba bien el estado sanitario.

Por lo que aseguran los órganos oficiosos del ministerio, parece que en todo el mes de Mayo abandonarán nuestras tropas la ciudad de Tetuan. Sin embargo, nuestra humilde opinion es dudar de esta noticia, si para llevar á efecto la evacuacion ha de preceder el pago de los 90 millones, estipulado dentro de esta fecha, pues como para satisfacer 140 han tardado los marroquíes diez meses, y

lo han hecho á duras penas, ahora que llueve sobre mojado, tememos que se pase el verano antes de que lo verifiquen. Allá veredes.

ÚLTIMA HORA.

SENADO.

Sesion del día 11 de Marzo de 1861.

Abrióse á las dos y media, presidiendo el señor marqués del Duero.

Leída y aprobada el acta de la anterior, se dió cuenta del despacho ordinario.

El señor secretario Cantero participó al Senado que S. M. la Reina se trasladará al real sitio de Aranjuez el 23 del actual.

El señor marqués de O'Gavan anunció una interpelecion al gobierno sobre los medios de abolir la trata de negros en la isla de Cuba, y sobre la inobservancia de los tratados referentes á la misma.

Leyéronse dos proyectos de ley remitidos por el Congreso de diputados.

El Sr. Rivero apoya su proyecto de ley pidiendo una pensión para la viuda y huérfana del comandante Maestro.

A las dos y tres cuartos se levantó la sesion, para reunirse el Senado en secciones.

CONGRESO.

Sesion del día 11 de Marzo de 1861.

Se abrió á las dos y media, bajo la presidencia del Sr. Martinez de la Rosa.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.

El Sr. Rivero usa de la palabra sobre la interpelecion de los asuntos de Italia.

Al retirarnos de la tribuna, continuaba S. S. en el uso de la palabra.

CORREO DE ULTRAMAR.

El viernes 8 de Febrero fueron presentados en la secretaría del gobierno de Matanzas tres marineros naufragos de la barca francesa Angeline.

Este buque salió del Havre con direccion á un puerto de las Antillas: mas á las siete ó las ocho de la noche del 1.º de dicho mes encalló en una roca, haciéndose el casco pedazos al día siguiente.

Inmediatamente metiéronse en el bote mayor el capitán M. Leroux, su señora, su hijo y nueve tripulantes, y en otro bote el contramaestre con dos marineros: estos tres son los que han llegado á las playas cubanas. El bote donde iba el capitán servia de guia al otro con una luz durante la noche; mas un recio golpe de mar apagó esta señal, y quedaron los naufragos aparecidos perdidos totalmente.

Á los dos dias alcanzaron la costa, de donde despues de mil trabajos pudieron llegar á Matanzas. Se ignora completamente la suerte del capitán y sus compañeros.

Los tres infelices que llegaron al puerto, recibieron todas las atenciones que requería su estado.

—Va desapareciendo la escasez de arroz que se experimentaba en aquella plaza por haber faltado sus entradas de los Estados-Unidos durante casi todo el mes de Enero último, habiéndose consumido todas las existencias del arroz americano en almacén, y subido los precios al pormenor; pero los últimos arribos han proporcionado una gran cantidad del artículo enunciado, y por ahora queda remediada su carestía, como tambien en parte la de manteca, de la cual se encuentra ya medianamente abastecida la ciudad.

—El Excmo. Sr. D. Joaquin Francisco Pacheco recibió, durante su estancia en la Habana, de todas las corporaciones y personas notables las más vivas muestras de simpatía por su distinguido talento. Tambien fué visitado por el clero y personas notables el Excmo. é Ilmo. señor arzobispo de Damasco, monseñor Clementi, delegado apostólico de Su Santidad en Méjico.

—Acaba de descubrirse en Cuba una nueva mina en que se encuentra el oro en granos, y en estado nativo, que ofrece más riqueza que todas las descubiertas hasta la fecha.

Preciso es convenir en que Cuba es rica bajo cualquier concepto que se la mire, y que sus crisis no pueden ser más que pasajeras, con elementos tan eficaces á evitarlas.

—El Carnaval se ha celebrado en la Habana con grande animacion, sin que haya ocurrido ningun lance desagradable.

SECCION DE PROVINCIAS.

Con fecha 7 deien de Barcelona:

«En la reunion electoral que se celebró ayer noche en la sala de tejedores de velos, á la cual asistió gran número de electores, se ha proclamado por unanimidad candidato de eleccion á don Francisco Permanyer y Tuyet, y pasóse á nombrar comité para dirigir la eleccion.»

—Con igual fecha escriben desde Sevilla:

«La diputacion arqueológica sevillana celebró sesion en la noche del lunes, ocupándose de varios particulares, y entre ellos del derribo de las murallas, con motivo del informe pedido sobre este proyecto por la municipalidad, nombrándose en el acto una comision encargada de redactarlo, y compuesta de los Sres. Bueno, Ries, Tubino y Williams.»

—El ayuntamiento de Alcalá de Guadaira ha terminado la creacion de una partida de guardias municipales de campo. El sueldo será de 16 rs. diarios para el comandante, y 14 á los demás individuos.

—Oviedo 5.—Se ha comenzado á trabajar en la construccion de una hilera de casas en la acera de la izquierda del Estanco del Medio, en una área ocupada hasta ahora por prados y huertas. Con la edificacion de estas viviendas ganará mucho aquella parte de la ciudad, y llevará hacia sí la atencion de la municipalidad y del vecindario.

—El viernes, con motivo de la festividad de San Juan de Dios, recibieron la sagrada comunión los enfermos de ambos sexos existentes en el hospital civil de Alicante. Este acto religioso se celebró con la mayor pompa, habiendo asistido una de las músicas de aquella capital, y una comision de la junta provincial de beneficencia. El Sr. Beneyte, canónigo magistral de San Nicolás, dirigió á los enfermos una sentida plática.

—El viernes quedaron subastadas en Zaragoza y Soría la carretera de tercer orden de Egea de

los Caballeros á Sangüesa, y los trozos primero, segundo y quinto de la carretera de Garay á Calahorra.

Sobresalto. El jueves por la noche hubo en el teatro de Zaragoza una pequeña alarma, por haberse prendido fuego á unas gasas que adornaban la decoracion del primer acto de la comedia de magia titulada Urganda. Por fortuna, el fuego se extinguió instantáneamente, volviendo la tranquilidad á los ánimos que más se habían alarmado.

Túnel. El perforado á las inmediaciones de Bilbao está ya de todo punto transitable, y los wagones le cruzan sin dificultad.

Desgracia. Otra nueva ocurrió el viernes en la estacion del ferro-carril de Valladolid: un tren derribó á un pobre trabajador, sobre el cual pasaron varios wagones, dejándole cadáver.

Nombramiento. En remplazo del Sr. Madramany, alcalde corregidor de Reus, ha sido nombrado D. Gregorio Mijares, subgobernador quera de Canarias.

Draga. Anteayer entró en el puerto de Cartagena la draga de vapor Diligente, procedente de Londres.

GACETILLAS.

DE LA CAPITAL.

Caja de ahorros. Ayer ingresaron en este establecimiento 164,442 rs. vn. depositados por 2,765 individuos, de los cuales los 108 han sido nuevos imponentes. Se han devuelto 122,412 rs. 36 céntimos, á solicitud de 97 interesados.

Pérdida sensible. El sábado por la tarde falleció en esta corte el apreciable y simpático jóven don Antonio Garcés de Marsilla, hijo del Sr. Baron de Andilla. Quizá no habria cumplido veinte años, cuando la muerte inexorable le ha arrebatado al cariño de su familia y amigos, dejándole sumidos en el más profundo desconsuelo. Acompañamos en su dolor á nuestro respetable amigo el señor baron y su señora, y deploramos como ellos tan sensible pérdida.

Datos curiosos. 30,000 locomotoras y 900,000 carruajes corren por 70,000 kilómetros de carril asentados sobre el planeta en que vivimos. Las inquietas máquinas andan todos los años 1,100 millones de kilómetros, ó veinte y siete veces y media la circunferencia de la tierra; reducen á polvo 115,000 toneladas de hierro por año, que necesitan una reparacion de 500,000 toneladas del mismo metal y una fabricacion de 666,000 toneladas anuales de fundicion; gastan bosques de madera; queman casi 100 millones de toneladas de carbon mineral por mes, y evaporan 120 toneladas de agua por minuto.

Enganchadas todas las locomotoras una tras otra, ocuparían desde Madrid hasta la Ginebra, en el camino del Mediterráneo: los carruajes pudieran contener en un solo circuito la península y las islas Baleares: los empleados, verdaderos soldados de paz, en número de más de 510,000, exceden por fortuna á los ejércitos de guerra de muchos Estados: los cientos de millones de viajeros que anualmente corren por el camino de hierro, darían á la Europa mayor poblacion que la existente.—Hace 30 años la máxima velocidad del vapor era 5 leguas por hora; hoy puede recorrer 33 leguas en el mismo tiempo. Mientras en los coches diligencias ha habido un muerto por 355,463 viajeros, en los caminos de hierro de Prusia solo ha muerto uno por 17 millones de personas.

Academia preparatoria. En la calle de la Aduana, núm. 37 cuarto segundo, se ha abierto una, donde se enseña aritmética, álgebra, geometría analítica de dos y tres dimensiones, física, química, trigonometría, historia, geografía, francés é inglés. Las clases están encomendadas á profesores de reconocido celo é inteligencia.

Que tenga feliz éxito. El Sr. D. Narciso Monturiol, inventor del *létino ó barco-pep*, ha salido de esta corte para Alicante con objeto de dirigir algunos detalles indispensables para el buen éxito de la última prueba de su invento.

Vacante. La Real Academia Española publica ayer un aviso manifestando que habiendo vacado una plaza de académico de número de este cuerpo literario, podrán los que aspiren á obtenerla dirigir sus solicitudes á la secretaría hasta el día 6 inclusive del próximo Abril.

¡Habrá tuno! Dice un colega: «Anteanoche presenciámos en la tienda de andaluces de la calle del Príncipe una escena bastante original, por no decir otra cosa.

Un caballero francés que como todos los dias en dicho establecimiento, entregó al mozo una moneda de 100 rs. para que cobrase el gacho hecho. El mozo entregó la moneda al dueño, este la examinó, y hallándola buena, fué á dar la vuelta; pero no teniendo bastante moneda de plata, entregó el doble á un muchacho para que lo cambiase en una tienda inmediata. Á los pocos minutos volvió el chico diciendo que el mozo de una panadería, despues de examinar la moneda, se la habia devuelto, diciéndole que era falsa. Como al dueño de la tienda de andaluces le constaba lo contrario, recurrió á la policia; pero interin acudia esta, se presentó el panadero y devolvió la moneda buena, manifestando que el mozo habia efectuado el trueque de ella por otra falsa que tenia en su poder.

Cuando acudió la policia todo habia concluido, pero el delegado de aquella manifestó que su tardanza habia sido motivada por hallarse ocupado en las primeras investigaciones de un robo de tres ó cuatro mil francos que acababa de perpetrarse. El amor á lo ageno se va desarrollando de una manera increíble.»

Conformes. Personas muy entendidas en asuntos de policia urbana nos encarecen la necesidad de autorizar al ayuntamiento de Madrid para hacer un empréstito de 50 ó 100 millones emitiendo acciones, que sin duda serian solicitadas, al 6 por 100, y nos indican tambien lo urgentes que son ya el trazado de las principales calles de la nueva zona sin cuyo requisito es imposible que los particulares adquieran terrenos para edificar, y no menos que el consejo de administracion del canal de Isabel II piense en el que ha de atravesar desde el camino de Fuencarral á la venta del Espíritu Santo, que tanto ha de contribuir á amenizar aquellos áridos terrenos.

¡Angelito! Anteayer tarde, sobre las cinco, iba por la Puerta del Sol un cochero sobre su carrocinado pescante contemplando con tal arrobamiento... no sabemos qué, pero bien podemos suponer que seria la nube de polvo que cubria el espacio, que no vio, porque los ojos tenia vueltos del revés, cómo su exigua, cadavérica y trasparente calabazadora se daba de pecho con un muchacho, que por un milagro no cayó bajo las ruedas del vehiculo, gracias á la distraccion de su espiritual autodemonte.

Traslado. Parece que se ha decidido que en la antigua casa de los Consejos queden solamente el Supremo Tribunal de justicia y el Consejo de Estado con sus respectivas dependencias, trasladándose á otro punto, como alguna lo ha verificado ya, las demás oficinas del gobierno que han estado allí establecidas hasta ahora.

DOCUMENTO PARLAMENTARIO.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR MARQUÉS DE LA HABANA EN EL SENADO EN LA SESION DEL 5 DEL ACTUAL.

El señor marqués de la HABANA.—Mi interpelecion tiene que versar sobre los agravios inferidos á la nacion española en el discurso pronunciado en la Cámara de los comunes por el jefe del gabinete inglés, lord Palmerston. Me propongo en esta interpelecion hacerme cargo de las ofensas inferidas á la nacion española, y pedir al gobierno de S. M. que se sirva dar las explicaciones que estime convenientes para poner la honra del país á la altura que le corresponde.

Si el gobierno de S. M. cree oportuno hacerse cargo desde luego de mi interpelecion, pasaré á explicarla.

El señor presidente del CONSEJO DE MINISTROS (duque de Tetuan).—El gobierno está dispuesto á contestar á S. S. en este momento.

El Sr. PRESIDENTE.—El señor marqués de la Habana tiene la palabra.

El señor marqués de la HABANA.—Señores, hace mucho tiempo que viene siendo costumbre en las Cámaras inglesas el ocuparse casi anualmente de la cuestion del tráfico de negros. Apenas ha habido una sola vez en que ese asunto haya sido objeto de los debates del Parlamento inglés, que no se hayan inferido ofensas más ó menos graves al gobierno de S. M., á la misma nacion española y á las autoridades que mandaban en la isla de Cuba. Pero recientemente han sido tan graves esas ofensas, que creo un deber de decoro para la nacion, y más especialmente para los que hemos tenido la honra de mandar en aquel país, el explicar hasta qué punto son infundadas é inexactas las acusaciones que se dirigen al gobierno español. Yo espero que este podrá dar explicaciones completamente satisfactorias, para que se comprenda cuán distante está de merecer los agravios y ofensas que se le han inferido en el Parlamento británico.

Lord Palmerston ha empezado su discurso por hacerse cargo de algunas proposiciones hechas con objeto de disminuir el tráfico de negros, manifestando los pasos que el gobierno inglés habia dado á fin de reprimir la trata.

Lord Palmerston se ha felicitado del buen éxito obtenido en todas las naciones de Europa, así en Francia como en Holanda, así en Holanda como en Portugal. El único punto donde existe el tráfico negro, segun el ministro inglés, es la isla de Cuba; y sin entrar á explicar las causas que podian producirlo, lo achaca todo á la mala fé del gobierno español.

Al hablar, señores, de España, empieza ya lord Palmerston por citar á Cuba, designándola como un centro de abominacion universal. Yo no sé que el ministro inglés pueda calificar de esta manera una de las posesiones más importantes de la monarquía española, á no moverle á ello la naturaleza misma de los elementos que constituyen su estado social, y tambien la razon de que en dicha isla puede hacerse en mayor ó menor escala el tráfico de negros. Efectivamente, señores, en Cuba existe la esclavitud. La esclavitud es una institucion en sí misma detestable para todos los corazones generosos; pero esa esclavitud existe tambien en los Estados del Sur de América, y sin embargo, lord Palmerston no tiene en su discurso una sola palabra de abominacion que pronunciar contra esas naciones.

En la isla de Cuba puede hacerse el tráfico de negros; pero téngase en cuenta que eso se verifica por medio de expediciones que vienen bajo bandera americana, y sin que allí se haga más que comprar una mercancía que es tan indispensable para el porvenir y prosperidad de aquel país; mientras que á los Estados del Sur de América llegan tambien expediciones importadas por buques americanos, entrando á la luz de todo el mundo, y siendo conocidas y consentidas; no los son como las que entran en la isla de Cuba.

Y qué razon, señores, hay para que lord Palmerston califique de país abominable á nuestra Antilla solamente porque allí existe la esclavitud, y se introduce alguna que otra expedicion de esclavos? La razon de la diferencia que lord Palmerston establece entre aquellos Estados y la isla no es ciertamente más que una muy poderosa para el ministro inglés. Si la isla de Cuba produjese algodón y los Estados del Sur produjeran azúcar, es probable que lord Palmerston, como individuo del gobierno inglés, estuviera interesado hasta en mantener ese tráfico para conservar la prosperidad siempre creciente de la isla de Cuba. (Bien, bien.) Pero la isla de Cuba produce azúcar, y los Estados del Sur producen algodón; por consiguiente estos Estados no vienen á amenazar la miserable produccion de azúcar que obtienen las colonias inglesas: así es que lord Palmerston no puede mirar sin celo, hasta sin odio, la prosperidad siempre creciente de aquella isla, que tanto dice en favor de la administracion allí establecida bajo la direccion del gobierno de S. M.

Si despues se viene á examinar lo que ha sido y lo que es la esclavitud en los Estados españoles, y lo que ha sido en las comarcas que dependian de Inglaterra, y lo que es en los Estados-Unidos, se verá hasta qué punto la nacion española puede estar orgullosa de los principios filosóficos y humanitarios que han guiado su legislación respecto de la esclavitud, comparados con los que dominaron en la de aquellos países. Bien distinta es la condicion del esclavo en la isla de Cuba de la que tiene en los Estados-Unidos, donde no es más que una cosa, y donde carece de todo derecho: compárese esta situacion con la de los esclavos en la isla de Cuba, que vienen á ser casi un individuo de la familia que los tiene; y hasta qué punto facilita la legislación española la manumision de los esclavos lo demuestra lo que pasa en Puerto-Rico, donde apenas se cuentan 39,000 esclavos, siendo el resto de la poblacion de color completamente libre.

Y en la misma Cuba, señores, apenas pasa un año en que no se manumitan más de 2,000 esclavos por efecto de la liberalidad, de la humanidad, de la generosidad de nuestra legislación; así se comprenderá si puede compararse la conducta que ha tenido la España en sus posesiones de América relativamente á la cuestion de la esclavitud, con la conducta que tuvo la Inglaterra, y con la que hoy tienen sus hijos los ciudadanos de los Estados-Unidos.

Pues bien, señores: si bajo este punto de vista nosotros podemos levantar muy alta nuestra voz; si en todo lo que se refiere á nuestras posesiones ultramarinas podemos presentarnos con la cabeza muy erguida, haciendo ver que siempre hemos llevado por delante los principios de humanidad y de generosidad; si siempre hemos tenido como enseña los principios del catolicismo, cómo se nos viene á echar en cara que sostengamos en esta cuestion una conducta impropia de lo que exige la cultura y civilizacion de nuestro siglo? No hay, pues, razon alguna, absolutamente ninguna, más que la del interés material, que pueda haber guiado al ministro inglés para que hablara como ha hablado en lo que hace relacion al tráfico de negros en la isla de Cuba.

No parece, señores, sino que hace mucho tiempo, muchos años, que la Inglaterra se puso al frente de esa idea humanitaria y filosófica. No parece sino que la Inglaterra cuenta siglos en la tarea de combatir la institucion de la esclavitud, cuando se nos viene á presentar, por el hecho solo de ser hoy contrario á ella, como el país donde se tienen más en cuenta los principios que tanto proclamaba lord Palmerston en su discurso.

La Inglaterra, señores, ha tenido esclavos en sus colonias hasta el año 33. ¿Y qué! la Inglaterra

no ha sido en la, no ha sido ilustrada hasta la época de la emancipacion de la esclavitud? ¿Acaso los hombres de Estado que han precedido á lord Palmerston han sido hombres sin principios generosos, sin principios filosóficos, sin principios humanitarios? ¿Era quizás necesario que llegase la época actual y subiera al poder lord Palmerston, para que hubiéramos de bajar la cabeza ante su gracia y reconocerle como el hombre más humano, más benéfico y más caritativo que hay sobre la tierra?

Voy á permitirme decir, aunque sea ligeramente, lo que ha sido en Inglaterra la cuestion de la esclavitud y de la trata de negros. No data más que de fines del siglo pasado y año de 1787 la época en que la cuestion de la abolicion de la trata se consideró como una cuestion politica en Inglaterra. Esta cuestion principió á agitarse profundamente en esa época, y solo cedió y terminó cuando los excesos de la revolucion francesa hicieron temer por los excesos de todas las libertades. Cuando Inglaterra, en sus guerras con Napoleon, se hizo dueña de las colonias holandesas, el tráfico de negros tomó tales proporciones, que facilitó el camino á los abolicionistas, los cuales pudieron conseguir en 1805 y 1806 medidas que redujeran aquel tráfico á ciertas y determinadas posesiones inglesas.

Al principio, pues, de este siglo existía en Inglaterra la esclavitud y el tráfico de negros; fué ganando despues terreno la opinion abolicionista, y en 1807 se declaró ya legal dicho tráfico en todas las posesiones inglesas; pero á pesar de esta declaracion continuó el tráfico, hasta el punto de que en 1811 tuvieron que darse disposiciones penales, que se aumentaron notablemente en 1824, y declarándolo piratería y castigándolo con la pena de muerte.

Pero aun así, la Inglaterra, á pesar de haber tratado su gobierno de acabar con el tráfico, no pudo conseguirlo en sus mismas posesiones hasta el año de 1833 en que abolió la esclavitud de sus colonias mediante el pago de 20 millones de libras que se dieron á los propietarios de esclavos. Hé aquí la historia sucinta de lo que ha pasado en Inglaterra con respecto á la esclavitud y al tráfico de negros, historia que nos explica perfectamente la dificultad inmensa que hay para cortar de una vez un tráfico que no viene á ser más que un contrabando, pero un contrabando que proporciona grandes utilidades á los que en él se ocupan.

Pues bien: veamos cuál es la conducta del gobierno español en esta materia. Yo bien sé que el término á que la Inglaterra quisiera conducirnos seria acabar con la esclavitud en la isla de Cuba, porque acabando la esclavitud, naturalmente se acabaría el tráfico negro; pero nosotros tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en la misma Inglaterra, y no podemos ni debemos nunca acabar con la esclavitud de Cuba, porque á ella están enlazados los intereses y la existencia de más de 100,000 familias españolas.

La Inglaterra, cuando abolió la esclavitud, á pesar de las grandes indemnizaciones que concedió, arrojó completamente á sus colonias: si nosotros acabáramos con la esclavitud de Cuba, si la atacáramos de frente, arrojáramos como digo 100,000 familias españolas. ¿Y para qué? ¿Qué ventajas obtendríamos? ¿Qué ventajas ha obtenido la Inglaterra? ¿Por ventura esta nacion ha dado á las razas negras cultura, civilizacion y bienestar? Nada de eso; lo único que les ha dado ha sido el deseo de no trabajar. (Bien, bien.)

Pues bien: ante ese ejemplo y ante esos principios, por más repugnante que la esclavitud sea para todos, como lo es para mí, no podemos atacarla en Cuba. No hay más que un medio para llegar en lo sucesivo á ese resultado sin grandes quebrantos, y ese medio no es otro que la sabia y acertada medida que ha determinado el gobierno de S. M. estableciendo la inmigracion de chinos en la isla de Cuba. Esa inmigracion puede venir á sustituir con el trabajo del hombre libre el trabajo del esclavo, que en sí es de malas condiciones; y el día en que, como yo deseo, se aumente esa inmigracion, ese día disminuirá la importancia que hoy tienen los esclavos.

Y ¡cosa singular, señores! Cuando las autoridades de Cuba protegian la inmigracion de chinos, los primeros que á ella se opusieron fueron los agentes del gobierno inglés en la India. ¿Y bajo qué pretexto, señores?

Bajo un pretexto completamente infundado, bajo el pretexto de que se les arrancaba á la fuerza. Yo he recibido, siendo capitán general de Cuba, en una porcion de cargamentos, más de 40,000 chinos. He hecho investigaciones por medio de intérpretes, he tomado declaraciones á los chinos, y no he encontrado uno que viniera forzado. Ninguno pidió pasaporte para regresar á su país, y si lo hubiera pedido, inmediatamente se lo hubiera dado. Al ver lo que pasa en esta como en otras cuestiones, no parece, señores, sino que solo en Inglaterra hay probidad, hay rectitud; que solamente los ingleses se rigen por principios de humanidad, y que los demás individuos de las naciones europeas somos abyectos y desconocemos los principios del honor, de la probidad y de la rectitud. (Muy bien, muy bien.) El gobierno español, que nunca se ha quedado atrás en las ideas generosas, y que va delante en las grandes ideas, no ha quedado ni podía quedarse rezagado en la extincion del tráfico de negros. El gobierno español el primer paso que dió en este asunto fué el tratado de 1817, por el cual se comprometió con Inglaterra á declarar ilegal en sus posesiones, recibiendo 40 millones de reales que nos ha echado en cara lord Palmerston; pero no se crea que los recibí como una recompensa, como el premio de una accion deshonrosa; eso no es cierto: el gobierno español no aceptó en ese sentido los 40 millones; véanse los artículos 3.º y 4.º del tratado: los recibí únicamente para pagar las indemnizaciones legítimas por las presas que habian hecho los ingleses antes del tratado, y las que hiciesen hasta su ratificacion.

No es, pues, exacto lo que dice lord Palmerston en esta parte; por lo mismo yo levanto mi voz hasta el gobierno, y le pido, esperando que el Senado apoyará mi peticion por unanimidad, y si ha sobrado algun dinero despues de las indemnizaciones por consecuencia de ese tratado, que se devuelva á Inglaterra el dinero que haya quedado. (Bien, muy bien.)

Yo se lo ruego, y estoy seguro que en esta parte habrá un sentimiento uniforme en toda la nacion, como lo hubo al satisfacer los 40 millones que debíamos al gobierno inglés por los servicios que nos prestó en la guerra civil; y que tambien nos echó en cara lord Palmerston: 40 millones, señores, que por cierto fueron pedidos en hora menudada para el honor, el prestigio y el crédito del gobierno inglés.

Despues del tratado de 1817, viendo que este tratado no habia producido sus efectos, como no se lo produjeron en 1807 y en 1811 al gobierno inglés las medidas que habia tomado para la represion de la trata, el gobierno inglés, tal vez aprovechando la ocasion, y creyéndola buena para obtener soluciones convenientes á su politica, consiguió en 1835 que se hiciera el tratado que tan conocido es de todos los señores senadores, y seguramente en situacion bien apurada para España. Por ese tratado hicimos concesiones que nos han sido muy funestas para nuestro comercio de Africa, y por ese tratado nos hemos visto cinco veces humillados por Inglaterra. Y no hago cargo al gabinete que le celebró, porque real, verdadera y sinceramente soy enemigo de la trata de negros y creo se debe caminar á su extincion.

No obstante el tratado, continuaban los obstáculos para la represion del tráfico, presentándose así mismas dificultades con que Inglaterra habia

Inchado durante treinta y cinco años: así es que, no satisfecho aún el gobierno de esta nación, pidió al de España una ley penal contra los contrabanderos del tráfico; ley penal que se consiguió en 1845; pero todavía, a pesar del celo y energía desplegados por las autoridades de Cuba, no ha podido obtenerse el resultado que el gobierno de S. M. y las autoridades de aquella isla han deseado, porque no era posible. Y de esto me haré cargo más adelante.

En último resultado, señores, la cuestión del tráfico de negros no viene á ser en esencia más que una cuestión de contrabando. El gobierno se ha comprometido á impedir, en cuanto sea posible, ese contrabando; pero algunas veces no puede impedirlo. ¿Se ha de decir por esto que obra de mala fe? Pues que, señores, la Inglaterra, que gasta todos los años 5 millones de libras esterlinas, que tiene una numerosa escuadra estacionada en la costa de África, que cuenta con recursos inmensos comparativamente á los nuestros, que tiene menos costas que vigilar que nosotros, no ve á pesar de eso que los buques que hacen la trata ciuden la persecución y se burlan de la vigilancia de sus sus cruceros? Y por eso, ¿ha levantado nadie su voz para decir que los comandantes y comandantes ingleses toman parte en el tráfico? He dicho antes que el tráfico de negros no es más que un contrabando.

Hay un principio muy reconocido en Inglaterra de que todo contrabando que deja más del 30 por 100 de utilidad es muy difícil evitar; y si es muy difícil evitar un contrabando que proporciona una ganancia de un 30 por 100, ¿qué no será el que deja 800 ó 1,000? En efecto, á causa de las medidas de represión adoptadas en Cuba, y á consecuencia del celo desplegado por el gobierno y las autoridades de aquella isla, el precio de los esclavos ha subido de 400 pesos á 1,200 que hoy tienen. ¿Qué extraño es pues que haya hombres que se dediquen á ese tráfico, por más peligros que en él corran?

Y después de todo, ¿quién lo hace? ¿Son los españoles, como dice lord Palmerston? No son los americanos. Lo que hacen los habitantes de Cuba, en donde existe la esclavitud, es comprar los negros que tanto necesitan. Véase pues sobre quién debe recaer la odiosidad del tráfico: si sobre el que comercia vendiendo esclavos, ó sobre el que los compra porque los cree necesarios para trabajar las haciendas que han de producir pan para él y para sus hijos.

De todos modos, no alcanzo á comprender cómo la Inglaterra, que no puede evitar de ninguna manera la salida de las expediciones negreras de África á pesar de los inmensos recursos que para ello tiene, viene á hacer un cargo á las autoridades españolas de Cuba por que desembarca una expedición en aquella isla que mide 2,000 millas de costas, y está rodeada de bajíos, ensenadas y caños, que permiten perfectamente la ocultación de buques, habiendo espacio de cuarenta leguas de distancia, en el que se puede desembarcar con la seguridad de no encontrar en cuatro leguas otro agente del gobierno que lo que en el país se llama un teniente de partido, que es un vecino de aquel punto.

Francamente, cuando se ha explicado mil veces ya la situación de Cuba, no sé cómo no se comprende en Inglaterra que habiendo tanta extensión de costas que guardar, no es posible que las autoridades de Cuba, con sus pocos recursos, puedan evitar todos los desembarcos. Cuando estas lo han podido, han hecho uso de la fuerza de nuestra marina, escasa como es, y con medios inadecuados, dando por resultado el que se capturaran en 1857 en alta mar cinco buques con 2,000 negros.

Hoy mismo mi digno amigo y sucesor el señor don Francisco Serrano acaba de aprehender cerca de 2,000, con los buques de aquel apostadero. ¿Y todavía se nos hacen cargos por que desembarquen algunas expediciones! ¿Hay lealtad en esto? ¿Hay buena fe? Yo pondré más en evidencia el género de ataques que se nos dirigen; demostraré cuál es el móvil, y contestaré como debe contestar un senador español, que reúne á esta circunstancia la de haber sido capitán general de Cuba, á los insultos y agravios que se nos han inferido por lord Palmerston. (Bien, bien.)

He explicado ligeramente las dificultades que puede haber y hay para evitar el desembarco de todas las expediciones de negros, y ahora voy á explicar sencillamente las inmensas dificultades que se encuentran también para aprehender los negros, una vez desembarcados.

Señores, la Inglaterra ha encontrado una dificultad insuperable en la aprehensión de las expediciones negreras en alta mar. ¿Cuál es esta dificultad? El derecho de visita. La Inglaterra no conseguirá seguramente que los Estados-Unidos quieran avenirse al derecho de visita ejercido por los buques ingleses; y este solo hecho hace muy difícil, si no imposible, la persecución de los buques negreros en alta mar. Pues bien: el gobierno español, que debe respetar y respetar allí donde existe la propiedad, que en Cuba como en todas partes está garantida por la ley, consignó en la penal de 1845 los fueros que no por tratarse de esclavos pueden dejar de guardarse á lo que es y ha sido siempre una verdadera propiedad, y la más valiosa de todas en la isla de Cuba. El gobierno y las Cortes que formaron aquella ley hicieron bien.

Y cuenta, señores, que yo tengo un derecho grande para hablar así, porque como capitán general de Cuba, me he extralimitado en mis atribuciones, he traspasado la ley, y he ido á sacar los negros de las fincas, porque de no hacerlo veía comprometida mi honra, que estimo antes que todo. Pero allí, señores, hay leyes que sin duda lord Palmerston no conoce; y si los hombres de Estado de Inglaterra creen que solo donde existen las instituciones de su país hay leyes y justicia, permítame que les diga que no entiendo ese género de ilustración y de cultura con que pretenden distinguirse. En Cuba hay leyes, y sobre el capitán general están los tribunales, que deben defender la propiedad y resolver las cuestiones que á ella se refieren; y cuando la autoridad superior se trasmita, como yo lo he hecho, y lo hizo el señor general Pezuela, vienen los tribunales á decidir sobre la propiedad de los esclavos que los capitanes generales han ido á coger de las haciendas, extralimitándose de la ley. Esos tribunales tienen que juzgar por pruebas. ¿Y no se comprende perfectamente la dificultad de esas pruebas? ¿Basta que se tenga por un hecho público? ¿Basta el convencimiento moral de las mismas autoridades? ¿Basta la convicción moral de los mismos jueces? Nuestra legislación, como todas las legislaciones de todos los países donde existen esos tribunales, requiere pruebas, y las pruebas son muy difíciles de hallar. Y esto se comprende y se explica bien, cuando la pasión política no entra para nada en el examen de ciertas cuestiones.

En un país de esclavitud, donde todo el mundo compra negros, donde todos los venden, donde se vende y se separa la madre del hijo y la mujer del esposo, ¿se cree que puede haber la opinión de que es un delito el comprar negros? ¿Es posible que el gobierno inglés no comprenda esta diferencia? ¿Es posible que ignore que lo que puede ser un delito indiano para el pueblo inglés, no se tendrá por delito en un país donde existe la esclavitud? Cuando las autoridades se encuentran con la opinión unánime de un pueblo que no reconoce por delito lo que por delito entiende la autoridad, y cuando este pueblo siente la necesidad de trabajar para trabajar las fincas del país, y busca estos brazos en la esclavitud, no debe causar extrañeza la inmensa dificultad de encontrar esas pruebas en el aislamiento en que la opinión coloca á la autoridad y aun á los mismos tribunales.

Voy á citar un hecho, el cual demostrará cuál es la acción de los tribunales de Cuba, y cuál el espíritu de las autoridades de aquella isla. Mi antecesor, el digno general Sr. Pezuela, deseoso de conservar su honra, fué á buscar dentro de una finca los negros que creyó procedentes de un desembarco, y con motivo de esa aprehensión se formó después, á petición del propietario, una causa. De resultas de esta causa, el tribunal declaró que una parte de los negros aprehendidos eran esclavos legítimos, y la otra introducidos de la costa de África, y como tal emancipados. Había trascurrido algún tiempo, durante el cual murieron algunos negros. Era ya casi imposible el designar cuáles deberían ser declarados esclavos, y cuáles declarados libres. ¿Y sabe el Senado lo que hizo el capitán general de Cuba? Antes que exponerse á declarar esclavo á uno solo de los negros que debiera ser libre, pagó al propietario todos los esclavos, y á todos los declaró libres. Hé aquí de qué manera han entendido los gobernadores capitanes generales de Cuba su misión respecto á la esclavitud y á la cuestión del tráfico de los negros.

He dicho todas las dificultades que hay para impedir los desembarcos de las expediciones negreras; he expresado, aunque ligeramente, todas las que existen para encontrar después los esclavos introducidos en la isla; y cansaría mucho al Senado si fuese á enumerar una por una todas las disposiciones tomadas en los últimos años, tanto por el gobierno de S. M. como por los capitanes generales de Cuba, para obtener, hasta donde era posible, la extinción del tráfico negro.

En 1851 se resolvió el gobierno á formar un registro general de los esclavos. Esa disposición era tan inmensamente grave, que causó una alarma completa en los propietarios de Cuba; pero esa disposición no llegó á realizarse en todas sus partes. Cuando tuvo por segunda vez la honra de tomar el mando de la isla, llevaba autorización para suspender la orden del registro, porque el gobierno de S. M. se había persuadido de los inconvenientes que en la práctica tenía esta medida. Cualquiera comprenderá que no debía yo ignorar hasta qué punto sería popular para mi suspender la primera disposición del registro; sin embargo, á pesar de la autorización, me decidí á formular una especie de registro por medio de las cédulas de seguridad. Y á este propósito decía yo entonces al gobierno: «Comprendo todo lo que para mi popularidad sería el abolir completamente el registro; pero si levanto las prevenciones dadas por el gobierno, el país va á creer que soy propenso á tolerar el tráfico negro, y por eso prefiero emplear un sistema represivo contra ese tráfico.» En efecto, hice cuanto estaba de mi parte para reprimirlo; y puesto que á mi honra cumple, séame permitido citar alguna de mis disposiciones. Hé aquí una de ellas:

«Habana 8 de Julio de 1857.—Circular á los tenientes gobernadores del departamento occidental.—Teniendo noticias de que se preparan nuevas expediciones de negros bozales en varios puntos de la isla, he creído conveniente recordar á V. el exacto y estricto cumplimiento de mis circulares (reservadas) de 25 de Mayo de 1856; en la inteligencia de que por el solo hecho de verificarse el desembarco por cualquier punto sin haberse adoptado ninguna de las disposiciones que allí se expresan, procederé contra la autoridad del distrito, á su separación y á las demás medidas que me competen en uso de la autoridad que me está confiada.»

Como en su discurso se refiere lord Palmerston á los últimos años del gobierno de Cuba, el Senado no extrañará que habiendo tenido yo la honra de ser capitán general de la isla desde fines de Septiembre de 1854 hasta principios de Diciembre de 1859, tenga que hacerme cargo de algunas cuestiones que me son personales.

Tengo pues que decir que al principio de la primera época de mi segundo mando en 1855, recibí una comunicación directa de lord Clarendon, en la cual, quejándose del aumento que había tenido la introducción de negros en 1854, me manifestaba las esperanzas que tenía de que siguiendo la línea de conducta que en la primera época de mi mando había seguido, conseguiría grandes resultados en la represión del tráfico. Contesté á esa comunicación haciendo completa justicia á mi digno antecesor el señor marqués de la Pezuela, que había merecido grandes elogios del gobierno inglés, y haciendo ver, por la misma comunicación de lord Clarendon, que las disposiciones fuertes no son siempre las que conducen ni bastan por sí solas á contener el tráfico negro. Esto lo demostraba la misma comunicación del citado lord, en que me decía que en 1854 el tráfico había sido mayor que en los años anteriores, á excepción del año 53.

Pues bien, señores: según esa comunicación, el número de negros importados en Cuba en 1854 fué de 5,564. Según las comunicaciones oficiales del consúl general de Inglaterra en la Habana, la introducción de negros en 1855 fué de 4,906; en 1856, de 3,478; y en 1857, de 5,478. Y cuenta, señores, que el consúl general de Inglaterra tiene allí inmensos medios para saber los negros que entran; pero movido por un celo natural en su posición, tiende siempre á exagerar el número de las expediciones, las confunde completamente, y á lo que es una amenaza de introducción, lo da en las comunicaciones oficiales por expedición realizada. Yo puedo, por consiguiente, asegurar bajo mi honra, que son siempre exageradas las cifras que presenta el consúl inglés, y son las que he leído.

Pero todavía, señores, debo decir y declarar que considero de mala fe los ataques de lord Palmerston, toda vez que el gobierno de S. M. Británica tiene comunicaciones oficiales de sus agentes en Cuba, entre ellas algunas como las que voy á tener el honor de leer al Senado.

M. Bacheuse, árbitro del tribunal mixto en la Habana, asesinado en aquel punto, no por españoles, sino por un secretario inglés de la comisión que tomaba parte en las expediciones negreras, en una carta, núm. 45 del año 56, publicada en el Parlamento, decía al gobierno, entre otras cosas, lo siguiente: «El general Concha no puede hacer más de lo que ha hecho. Aunque el general Concha está de corazón dispuesto á perseguir el tráfico, su autoridad es insuficiente para castigar á aquellos de quienes está moralmente convencido que están comprometidos en él ó que le favorecen ó auxilian.»

Eso decía, señores, un agente del gobierno inglés, y más adelante, en la misma carta, explicaba eso que llamaba aumento del tráfico, de la manera siguiente: «Pero el alto precio del azúcar produce tan fuerte estímulo para extender el cultivo de la caña, que están haciendo los mayores esfuerzos á fin de obtener brazos con que fomentar nuevos ingenios, y si no pueden proporcionárselos por alguno de aquellos dos medios (el de inmigración de negros libres ó chinos), el tráfico de esclavos continuará con creciente actividad.»

Tal era pues la opinión de uno de los agentes del gobierno inglés en Cuba sobre las causas que producían el tráfico negro, y sobre la conducta de las autoridades superiores de la isla. Yo, señores, no tenía notas de las introducciones de negros en 1855 y 59; pero hoy, habiéndome acercado á tomar datos en las dependencias oficiales del gobierno de S. M., me he encontrado con que el consúl de S. M. Británica calcula en 12,000 los negros introducidos en 1855, haciendo una relación de buques, entre los cuales he visto uno que supone llevaba 1,600 esclavos. Desde luego puedo asegurar á M. Clafford que eso no es exacto, que nunca ha llegado á Cuba durante mi mando un buque con tan inmenso número de negros, lo cual por otra parte es imposible. Hoy que los norte-americanos dedican sus vapores al tráfico de negros, la expedición más grande, el buque que más negros

conduce, lleva 800 ó 900; por consiguiente, lo que se dice de 12,000 negros es inexacto, como lo es también lo manifestado en su despacho al gobierno respecto á que en 1859 entraron en Cuba 22,000 según cálculo del consúl inglés.

De todos modos, señores, sería la mayor de las injusticias atribuir, no digo á esos móviles indignos que atribuyen ciertos hombres políticos en Inglaterra la conducta de las autoridades de Cuba, ni siquiera á falta de celo en el cumplimiento de sus deberes, el no haber conseguido la completa extinción del tráfico. Eso no ha podido lograrse, por las dificultades que antes he indicado al recordar las que tuvo Inglaterra hasta llegar á establecer la abolición de la esclavitud en sus colonias.

Y si yo tuviera que presentar testimonio de la conducta del gobierno de S. M., y aun de la mía propia, me bastaría tomar, entre mil comunicaciones oficiales, algunos extractos de ellos muy ligeros que me voy á permitir tener el honor de leer al Senado, y deseo que esto conste bien por los señores tanquigrafos, para que entienda lord Palmerston y los hombres de Estado en Inglaterra hasta qué punto miran las autoridades españolas, hasta qué punto han mirado siempre los capitanes generales de Cuba todo lo que toca á su honra y al cumplimiento de sus deberes. Yo, señores, al proponer al gobierno de S. M. la aprobación de medidas más tomadas sobreponiéndome á las leyes de 1845, decía, entre otras cosas, lo siguiente: «Y sépalo V. E.: la intervención en semejante negocio para todo lo que no sea la represión franca, decidida, absoluta, significará siempre participación en sus fabulosas ganancias. A mí, Excmo. señor, se me apoca el ánimo ante una situación de tan poca dignidad y ninguna defensa para mi autoridad, y resultadamente es imposible que yo represente bien ni mal cualquiera política en que no sea la primera condición la represión de la trata, si bien reconozco la necesidad de no inquietar en su posesión á los dueños de esclavos.»

Poco después, al contestarme el gobierno á esa comunicación, entre otras cosas me decía estas terminantes palabras: «V. E. no debe ignorar la rigurosa severidad con que el gobierno de S. M. ha procurado constantemente que se evite la introducción de negros bozales en la isla de Cuba. V. E. mismo, al encargarse por primera vez del gobierno de esa isla, recibió sobre el punto que nos ocupa mis instrucciones escritas y verales que le dí como ministro de Estado á la sazón; y podrá fácilmente recordar los terminantes, especiales y apremiantes encargos que le hice para que reprimiera por todos los medios posibles un tráfico que, prescindiendo de otras consideraciones, compromete la moralidad del gobierno español en el cumplimiento de los tratados, y complicaba á la sazón en gran manera nuestras relaciones con la Gran Bretaña.»

Tal era, señores, el lenguaje oficial que usaba el gobierno de S. M. con el capitán general de Cuba, y el de este para con aquel. Véase si puede haber en esto mala fe, doblez, ni nada absolutamente de esas indignas pasiones, de esos indignos sentimientos que atribuye lord Palmerston al gobierno de S. M. y a sus representantes en la isla de Cuba. Y esta cuestión del tráfico de negros es tan grave y delicada para las autoridades de esta isla, que no bastan los mayores esfuerzos de su parte para ser libres de culumnia las reputaciones más acrisoladas. Yo, señores, que me había creado enemigos por mi conducta con respecto á la represión del tráfico negro, me vi una vez calamitado en las columnas del Times: ese periódico llegó á decir en una correspondencia particular de Madrid, que el general Concha iba á ser relevado por los graves cargos que contra él había dirigido lord Howden, suponiéndole connivencia en el tráfico negro hasta tal punto, que se decía había aumentado su fortuna particular en un millón de pesos. Pues bien, señores: lo primero que hice al recibir ese periódico, fué traducirlo literalmente y estampar esa acusación tan grave para mi honra en la Gaceta oficial de la Habana, sin comentarios de ninguna especie. ¡Oh! Yo sabía perfectamente bien cómo iba á responder la opinión general de los habitantes de Cuba ante tan bajas y groseras calumnias.

Pero no me contenté con eso, sino que dí plenos poderes á mi amigo el Sr. Comyn, á la sazón encargado de negocios de S. M. en Londres, para perseguir como calumniador ante los tribunales al Times; yo estaba decidido á sacrificar aunque fuese toda mi fortuna para llevar allí ante los tribunales de Inglaterra la vindicación de mi honor ultrajado. El Sr. Comyn, con plenos poderes para el efecto, como he dicho, se personó con el director del Times, quien, procediendo con hidalguía y honradez, se convenció completa y absolutamente de la culumnia de que había sido instrumento sin saberlo, y puso en el número del 24 de Noviembre de 1857 un artículo, del cual voy á leer fragmento, porque siento cansar al Senado, algunas pocas palabras.

Después de hablar de las dificultades y sacrificios que hacía el gobierno para la represión de la trata de negros, decía: «Tenemos datos para asegurar, en favor del general Concha, capitán general de Cuba, que las voces propagadas en Madrid respecto á su connivencia en el tráfico, no procedían de las sospechas inductivas de anteriores sucesos, sino que únicamente fueron debidas á maliciosas é interesadas miras de sus émulos políticos.»

Estos asertos, podemos decirlo, se fundan, así en el testimonio oficial de la misma Cuba, como en el de nuestro propio país, para el cual la política y administración del general Concha respecto al tráfico negro está exenta de toda censura por parte de toda autoridad competente é imparcial. Y aquí, señores, voy á leer esto, no tanto por mí, sino porque real y positivamente en estas frases aparece la explicación del tráfico negro; explicación que es imposible desconocer los hombres de Estado de Inglaterra.

«Las dificultades que hemos experimentado, continuaba el Times, en la penosa tarea de la supresión del tráfico, hacen comprender al menos líneas la ineficacia de las medidas adoptadas por el general Concha con igual objeto, sin necesidad de atribuirle descuido ó connivencia por su parte. Si no puede contener la importación de esclavos, tampoco nosotros podemos impedir su exportación. Ambos caminamos á un mismo fin; ambos tenemos que bloquear una costa interminable, bajo la triste persuasión de que el menor descuido se aprovechará (por los armadores). El tiene que vigilar sobre 2,000 millas de costas llenas de arrecifes, y contrarestar los esfuerzos de una población cuyos habitantes todos lo son contrarios.»

Sigue, señores, y no quiero con su lectura cansar más al Senado, porque este es un documento que á su tiempo se publicó, y que yo me tomaré la pena de publicar nuevamente, para refrescar las ideas y para contestar con él en parte á las acusaciones de lord Palmerston.

Explicada ya cual ha sido constantemente la conducta del gobierno de S. M. y de todos los capitanes generales de la isla de Cuba en el cumplimiento de los tratados celebrados con Inglaterra, voy á leer al Senado las expresiones que usó lord Palmerston en su discurso; por lo mismo, señores, que son tan ofensivas, es preciso que de ellas tenga completo conocimiento el Senado y el país entero. «Pero tengo el sentimiento, dice lord Palmerston, de manifestar que en estos últimos años se ha aumentado considerablemente el tráfico ultramarino, y como á por qué ha aumentado? Es porque el gobierno americano, por razones por las cuales debemos tal vez respetarle (note bien el Senado esta expresión de lord Palmerston), por un error de sentimiento ó de honor nacional, se ha terpuerto para amparar con la impunidad esa

prostitución de la bandera americana que á su vez ampara la abominación del tráfico de esclavos.»

Ya ve el Senado que lord Palmerston atribuye toda la culpa al gobierno americano; ya ve el Senado que la bandera americana es la que prohíbe hoy el tráfico negro; y ya ve el Senado cómo se explica, y en virtud de qué causas, el aumento de ese tráfico.

Pues bien, señores: ahora vea el Senado lo que dice lord Palmerston respecto á España: «Cuando se habla de España, es imposible expresar en términos demasiado fuertes el sentimiento de indignación que produce el ver la impudicia é ignominiosa mala fe con que la nación española ha procedido respecto de los tratados celebrados con Inglaterra sobre esta materia. Es singular que una nación compuesta de hombres que cada uno de por sí se avergonzaría de hacer la menor cosa que no fuese perfectamente honrada y leal, sea, tomada en conjunto, culpable de tan descarada y abominable violación de la buena fe.»

Tales son, señores, las expresiones del jefe del gabinete inglés; tales son las expresiones con que se viene á manillar la nunca desmentida honra española.

Es verdad que lord Palmerston reconoce que aquí en cada particular hay un sentimiento de honradez y de hidalguía; pero cómo es posible que la nación española, que no es más que el conjunto de todos los españoles, deje de ser el prototipo de la hidalguía y de la honradez? No, mil veces no; y lord Palmerston no podrá nunca acusar á la nación española de nada que no sea noble y generoso, sin faltar á toda verdad, sin faltar á toda consideración respetable, y sin que nosotros podamos darle aquí un solemne mentís, como se lo dará la nación española el día que vea esas palabras que se han vertido en la Cámara de los comunes. (Bien, bien.)

Es singular, señores: lord Palmerston, que se ha aprovechado de esta ocasión para echarnos en cara los sacrificios hechos algún día á nuestro favor por la Inglaterra; lord Palmerston, que viene suponiendo contra toda verdad que nosotros hemos recibido 40 millones de reales por hacer que se extinguiera el tráfico de negros, lord Palmerston, que viene todavía recordándonos los servicios que hizo por la causa de la libertad en España en el año de 1833, por habernos enviado una legión que de nada nos sirvió, lord Palmerston viene hoy á insultarnos por esos servicios de una manera que yo estoy seguro que la misma nación inglesa desaprobará en el jefe de ese gabinete, porque sería imposible que España, al tomar un día en cuenta los servicios, pudiera dejar de tomar también en cuenta los agravios que se nos viene infliriendo.

Y, señores, esto es tanto más notable, cuanto que se trata de un asunto en el cual el gobierno español ha obrado siempre guiado de la buena fe de acabar el tráfico; acabar el tráfico, sí, pero no acabar lo que el gabinete inglés quiere que se acabe, que no es el tráfico, sino nuestras posesiones de Ultramar. Y lo más extraño, señores, es que lord Palmerston se nos venga poco á poco con la amenaza de declarar la guerra, cuando la Inglaterra se humilla ante las pausas de algodón de los Estados-Unidos. (Bien, muy bien.)

Señores, no hay más que leer ese discurso de lord Palmerston para ver que cuando reconoce que la bandera americana es hoy la causa de que se sostenga el tráfico de negros (pues si ella no lo protegiera sería casi nulo), no tiene sin embargo mas que algunas palabras insignificantes para explicar las dificultades que los Estados-Unidos oponen á que se pueda acabar con el tráfico. Cuando se trata de esta nación, hay, señores, y tengo necesidad de decirlo, hechos muy vergonzosos para el gobierno inglés.

Me hallaba de capitán general de la isla de Cuba, cuando en uno de esos momentos de exaltación del gobierno inglés en lo relativo á la extinción del tráfico negro, en uno de esos momentos en que al gobierno inglés le acomoda dar una muestra de humanidad para ganarse un poco de popularidad en las Cámaras, dió sus disposiciones para que varios buques de su escuadra fuesen á las costas de Cuba á perseguir el tráfico negro.

En virtud de sus instrucciones, los oficiales que mandaban los buques empezaron por visitar á los buques españoles y americanos dentro de nuestros mismos puertos. Yo creí que ante todo debía dejar á cubierto la honra nacional, y al efecto empecé por dar órdenes para que se rechazasen á todo trance esos atropellos dentro de nuestras costas, y costara lo que costara, previne que el castillo del Morro cañonease los buques ingleses que se presentasen á ejercer tales actos bajo sus fuegos.

Por el mismo tiempo la prensa americana empezó á declarar contra lo mismo, y esos Estados-Unidos, que no son poderosos por la fuerza, pero que lo son por el algodón, esos Estados-Unidos que no son fuertes por su marina, enviaron unas goletas que nada valían, presenciando toda la Habana el hecho de que alguna goleta americana pasase y volviese á pasar dando vuelta en todas direcciones por delante de la fragata inglesa que allí se encontraba, presentando ante ella su pabellón estrellado cuantas veces le pareció conveniente. Allí se vio, señores, la bandera inglesa humillada, no ante la fuerza de los Estados-Unidos, sino ante el algodón; y después de esto se viene echando bravatas é insultos á una tracción heroica que siempre ha sido generosa, y que constantemente ha tenido las más grandes simpatías por ese gobierno y por ese país.

Después de todo, señores, si analizamos bien el discurso de lord Palmerston, cuando se ve como termina, debe traducirse en mi sentir en la forma siguiente: lord Palmerston, señores, hace en alta voz, para que todo el mundo lo oiga, la protesta de colocarse al frente de todas las ideas generosas, de todas las ideas humanitarias; la protesta de acabar con el tráfico negro, cueste lo que cueste, sobre todo si tiene que habérselas con España; pero al mismo tiempo previene á los miembros de la Cámara cuiden de que no se crea que su verdadero objeto (y ese es el verdadero) no es acabar con el tráfico de negros, sino el acabar con la riqueza de la isla de Cuba, que hace sombra á esas pobres y miserables colonias inglesas.

De todos modos, al gobierno de S. M., que está obligado por un tratado solemne á reprimir el tráfico de negros, desde luego le aconsejaré, aunque sé que no tiene necesidad de mis consejos, que haga todo lo posible para impedir la trata, como se ha hecho ya hasta aquí.

Si embargo, yo repetiré al gobierno de S. M. que todos los esfuerzos que haga para obtener la captura de los negros bozales serán impotentes, y vendrán á dar por único resultado el desprestigio de las autoridades en la isla de Cuba, mientras la bandera americana siga protegiendo el tráfico de esclavos.

Yo pido al gobierno de S. M. que aumente los buques en la costa de la isla de Cuba cuanto sea posible, para que la Inglaterra y el mundo entero vean que España procedió siempre con la buena fe que le es característica; y pido esto, al mismo tiempo que le es protección necesaria para la propiedad de esa clase que existe en la isla de Cuba, que es su vida, su existencia, y sin la cual sobrevendría la muerte de su riqueza. Por eso suplico al gobierno de S. M. que se dirija al gobierno inglés, á fin de que, ya que es tan fuerte y tan potente y quiere evitar la trata de negros á toda costa, se entienda con los Estados-Unidos (porque de allí es de donde salen los buques que hacen los cargamentos) y les obligue á que acaben con ese tráfico, que de otro modo no podemos evitar.

He concluido, señores, sintiendo haber molestado tanto tiempo al Senado; pero el Senado comprenderá que tenía necesidad de ocuparme de esta cuestión por dos causas: primera, por una cuestión

de honra personal, y en cuestiones de honra personal jamás cedo ni transijo. Yo me creo en mis sentimientos de probidad y de honor tan alto como puede pretenderlo estar lord Palmerston: de consiguiente, he debido levantar aquí mi voz para que todo el mundo lo oiga, contestando á cuantos hombres de Estado ó no de Estado ingleses puedan poner en duda la probidad del general Concha durante su mando en Cuba, en donde ha desempeñado con toda lealtad su misión, como lo han hecho sus antecesoros y lo verifica hoy su digno capitán general Sr. Serrano.

Que presente Inglaterra los gobernadores de sus posesiones, á ver si pueden salir con ventaja en la comparación que se haga con los que España ha tenido y tiene en sus posesiones de Ultramar.

Yo podría evocar el nombre del digno general Valdés, modelo de desinterés y probidad; podría evocar el nombre de otros muchos con quienes podría hacer con ventaja la comparación, sin tener ni nombre en cuenta para nada, aunque yo, el último de los capitanes generales que ha habido en esas posesiones, me creo tan caballero como el primer caballero de la nación inglesa.

Después de defender la cuestión que me ha sido personal, he procurado hacer comprender la noble y leal conducta del gobierno en este punto, y yo espero que el digno presidente del Consejo de ministros dará cuantas explicaciones sean necesarias, para que al menos quede como debe quedar el honor y la dignidad de la nación española. (Bien, muy bien.)

SECCION RELIGIOSA.

SANTOS DE MAÑANA. San Gregorio el Magno, doctor.

FUNCIONES DE IGLESIA. Cuarenta horas en la de San Ginés, donde prosigue celebrándose la novena de San José: por la mañana predicará D. Eugenio Aguado, y por la tarde D. Pio Hernandez Fraile.

También continúa la misma novena, predicando en Monserrat D. José Pascual Garcia en la misa mayor, y D. Gregorio Mejia por la tarde: en San Luis tendrá el sermón por la tarde D. Bernabé Meneses.

Prosiguen por la noche los ejercicios diarios en San Ignacio, Italianos, Loreto, Bóveda de San Ginés y San Isidro.

SECCION COMERCIAL.

BOLSA DE MADRID.

Cotización del día 9 de Marzo de 1861.

FONDOS PUBLICOS.

Titulos del 3 por 100 consolidado, publicado, 49 20 c.; á plazo, 49-20 y 35 c. á fin cor. vol. Titulos del 3 por 100 diferido, no publicado, 42 50; á plazo, 42-40 y 55 c. fin cor. vol. Deuda amortizable de primera clase, publicado, 31-50. Idem de segunda, id., no publicado, 17-40 d. Deuda del personal, no publicado, 23-50. Acciones de carreteras.—Emisión de 1.º de Abril de 1850 de 4,000 rs., 6 por 100 anual, no publicado, 99 d. Idem de 2,000 rs., no publicado, 99-50 d. Idem de 1.º de Junio de 1851 de 2,000 rs., no publicado, 93. Idem de 31 de Agosto de 1852 de 2,000 rs., no publicado, 96-25. Idem de 1.º de Julio de 1856 de 2,000 rs., no publicado, 94-80 d. Acciones de obras públicas de 1.º de Julio de 1853, no publicado, 95. Idem del canal de Isabel II, de 1,000 rs., 3 por 100 anual, no publicado, 109 p. Obligaciones del Estado para subvenciones de ferro-carriles, no publicado, 92 d. Acciones del Banco de España, no publicado, 213-50. Idem de la compañía metalúrgica de San Juan de Alcaraz, idem, 31-25 d. Idem del de Barcelona á Zaragoza, idem 1800.

CAMBIOS.

Londres á 90 días fecha, 50-10. París á 8 días vista, 5-21.

ESPECTACULOS.

TEATRO REAL. A las ocho y media de la noche.—Primera representación de Don Pasquale, ópera en tres actos.

TEATRO DEL PRINCIPE. A las ocho de la noche.—Los potos de la madre Celestina, comedia de magia en tres actos.

TEATRO DEL CIRCO. A las ocho de la noche.—Cegar para ver.—Laynada y tropa.

TEATRO DE LA ZARZUELA. A las ocho de la noche.—Entre mi mujer y el negro.—Los peregrinos.

THEATRE FRANCAIS. A las ocho y media de la noche.—La joie fait peur.—Pisette.—Les suites d'un premier lit.

TEATRO DE NOVEDADES. No se ha recibido el anuncio.

PUNTOS DE SUSCRICION.

MADRID: Oficinas de este periódico, calle de Hita, núm. 5, cuarto principal; en las librerías de Moro, Puerta del Sol; en la Americana y en la de Bailly-Bailliere, calle del Principe, y Publicidad, Passage de Mathen.

PROVINCIAS: En todas las librerías y administraciones de correos.

ULTRAMAR: Habana, D. Benito G. Tánago; Obispo, 96.—Santiago de Cuba, D. Juan Langier.—Matilla, D. Manuel Ramirez.—Gran Canaria, don Amaranito Martínez de Escobar.—Puerto-Rico, D. Ignacio Guasco.—Santa Cruz de Tenerife, don Jacinto Jimeno.

EXTRANJERO: Paris, Mr. Lafitte Bullier y Compañía, 20, rue de la Banque.—Mr. Lejolliv, Notre Dame des Victoires.—Londres, Mr. Thomas, Catherine street.—Gibraltar, D. Manuel R. Pito.—Lisboa, Diario dos Pobres.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

	MADRID.	PROVINCIAS.			ULTRAMAR.	EXTRANJERO.
		En metálico ó libranzas.	En casa de los comisionados.	En casa de los comisionados.		
Un mes.	12 rs.	14 rs.	15 rs.	"	"	
3 meses.	32 "	36 "	40 "	3 pn.	60 rs.	
6 meses.	60 "	70 "	76 "	6 "	120 "	

Editor responsable: D. RAMON ARQUELLANA. Madrid, 1861.—Imp. de M. Tello, calle de Hita, 5.

Con motivo del proyecto de ley para el arreglo de la deuda de Ultramar, verá en breve la luz pública un folleto, que nosotros creemos conveniente insertar íntegro en este suplemento para ilustrar la opinión sobre materia tan grave, y que dice así:

EXPOSICION

AL

EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.

Excmo. señor ministro de Hacienda:

Los que suscriben, por sí y a nombre de los tenedores de las deudas amortizables de primera y segunda clase, acuden de nuevo á V. E. apoyados en su derecho, consignado de la manera más explícita en los artículos 3.º, 7.º, 16, 18, 21 y 25 de la ley de 1.º de Agosto de 1851, á fin de que se sirva reformar el proyecto de ley para el arreglo de la deuda de Ultramar asignando á la misma un fondo de amortización independiente del que reconoció la citada ley de 1.º de Agosto para la extinción de las deudas amortizables de primera y segunda clase.

Las poderosas é indestructibles razones que para adoptar esta justa medida existen, han sido expuestas á V. E. de palabra y por escrito. En corroboración de las mismas tienen hoy los exponentes la honra de acompañar á V. E. trece dictámenes, que han emitido los miembros más ilustres por su saber y experiencia del colegio de abogados de esta corte, Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martínez, Excmo. Sr. D. Manuel Cortina, Excmo. señor D. Cándido Nocedal, Sr. D. Nicolás María Rivero, Sr. D. Gregorio de Mota, Sr. D. Luis Díaz Pérez, Sr. D. Juan González Acevedo, Sr. D. José de Olózaga, Sr. D. Antonio del Rivero Cidraque, Sr. D. Manuel Ruiz de Quevedo, Sr. D. Miguel López Martínez, Sr. D. Rafael Monares, señor don Francisco Permany, que han considerado la cuestión como la han comprendido los exponentes. Hasta tal punto son claros, definidos y concretos los derechos de los acreedores reclamantes.

En vista, pues, de estos solemnes testimonios de los hombres de ley, abrigan los exponentes la esperanza de que V. E., tan justo, tan entendido, y á quien tanto debe el crédito de la nación, no dejará de modificar una opinión que, si al redactarse el proyecto de ley de arreglo de la deuda de Ultramar pudo prevalecer en su ánimo por falta de datos, hoy no es sostenible bajo el punto de vista de la legalidad, después del parecer de los hombres concededores del derecho. Así lo esperan de la justificación de V. E.; pero si por desgracia insistiese en llevar adelante su primitivo pensamiento, los reclamantes, por sí y a nombre de los tenedores de las deudas amortizables, protestan solemnemente en uso de su derecho todos los daños y perjuicios que se les causen, y que desde luego anunciarán serán de gran consideración.

Al efecto solo esperan la resolución de V. E. para hacer uso de su protesta ante los tribunales, ante el poder legislativo, y ante la misma Corona; y si esto no bastase, apelarán al juicio del país, que no podrá dejar de contemplar asombrado este injustificable ataque á los derechos de los acreedores de la nación en una época en que parecía se había inaugurado una era de legalidad y justicia respecto á los mismos.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Enero de 1861.—Antonio de Murga.—Santos Arenzana.—Francisco Pérez Crespo.—Estanislao de Urquijo.

Dictámenes de los juriscónsultos que se expresan, acerca del respeto que merece la ley de arreglo de la deuda de 1.º de Agosto de 1851, cuyas disposiciones se alteran en el proyecto de ley de la deuda de Ultramar en perjuicio de los tenedores de la deuda amortizable de primera y segunda clase.

JURISCONSULTOS.

Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martínez.
Excmo. Sr. D. Manuel Cortina.
Excmo. Sr. D. Cándido Nocedal.
Sr. D. Nicolás María de Rivero.
Sr. D. Gregorio de Mota.
Sr. D. Luis Díaz Pérez.
Sr. D. Juan González Acevedo.
Sr. D. José de Olózaga.
Sr. D. Antonio del Rivero Cidraque.
Sr. D. Manuel Ruiz de Quevedo.
Sr. D. Miguel López Martínez.
Sr. D. Rafael Monares.
Sr. D. Francisco Permany.

ARTICULOS DE LA LEY DE 1.º DE AGOSTO DE 1851.

Artículo 3.º

La deuda amortizable se dividirá en dos clases. La primera comprenderá:
1.º Los capitales de la corriente á papel.—2.º Los capitales de la deuda provisional que por esta ley no se consideran en otra categoría.—Y 3.º Los valores no consolidados.

La segunda comprenderá: las deudas llamadas sin interés, pasiva y diferida de 1831.

Artículo 7.º

Los créditos pendientes de liquidación, y que hubieran sido presentados en tiempo hábil, se considerarán de abono en las mismas clases de papel á que tengan derecho, con arreglo á las disposiciones vigentes, pasando desde luego á la categoría que les corresponda según la presente ley.

Artículo 16.

La deuda amortizable no pasará á la clase de renta perpétua consolidada ó diferida, y se procesará desde luego á su amortización, destinándose

1.º Todas las fincas, foros y derechos pertenecientes al Estado, como mostrencos, y los procedentes de tanteos y adjudicaciones por débitos.
2.º Los realengos y baldíos, á cuya enajenación se procederá con las excepciones y en la forma que se establezcan en una ley especial, para lo

qual someterá el gobierno á las Cortés el oportuno proyecto en la presente legislatura.

3.º El producto total de 20 por 100 con que se hallan gravados á favor del Estado los bienes pertenecientes á los propios de los pueblos.

4.º Doce millones de reales efectivos que se consignarán anualmente en el presupuesto general de gastos del Estado desde 1.º de Julio de 1851 con destino á dicho objeto.

Artículo 18.

Las cantidades asignadas por esta ley á la amortización de la deuda amortizable se emplearán mensualmente en la compra de dicha deuda, destinándose la mitad á la de primera clase, y la otra á la de segunda.

Un reglamento especial que formará el gobierno sobre las bases contenidas en esta ley, fijará las reglas á que han de sujetarse todas estas operaciones.

Artículo 21.

Para que el cuarto arbitrio que señala el artículo 16 con destino á la amortización de la deuda amortizable sea efectivo, se pondrán á disposición de la junta directiva todos los productos del fondo de equivalencias á metálico por residuos de los pagos de fincas nacionales, y mensualmente pasará el gobierno á la misma la cantidad que fuere necesaria para completar un millón como parte de los doce correspondientes á cada año. La junta no permitirá que por ninguna causa se distraigan aquellos fondos y valores de su especial y exclusivo objeto, quedando responsables todos los vocales que no justifiquen su opinión contraria á cualquier acto que lleve consigo la violación de esta medida.

Artículo 23.

Serán objeto de una ley especial, que el gobierno someterá á la aprobación de las Cortés, la deuda de Ultramar, los créditos procedentes de oficios enajenados, y cualquiera otro cuyo reconocimiento esté en la actualidad en suspenso.

Artículo 25.

Todos los años se hará cargo el gobierno, al presentar los presupuestos, del estado de la deuda pública; y cuando lo permita el resultado que afrezcan aquellos, propondrá el aumento de arbitrios, para la más pronta extinción de la deuda amortizable, y la aplicación de fondos que pueda hacerse á la amortización de la renta perpétua.

PREGUNTA.

¿Puede, sin faltar á los artículos 3.º, 7.º, 16, 18 y 23 de la ley de 1.º de Agosto de 1851 y á los derechos que los mismos consignan en favor de los acreedores por las deudas amortizables de primera y segunda clase, verificarse la emisión de nuevas láminas de dichas deudas en los términos que aparecen en el proyecto de ley adjunto relativo á la deuda de Ultramar?

Ó DE OTRA MANERA:

¿Tiene facultad el gobierno, dentro de la ley, para acumular á la deuda amortizable que fuera objeto exclusivo de la citada ley de 1.º de Agosto de 1851, la que reservó para una ley especial el art. 23 de dicha ley, aunque se le reconozca una cantidad proporcional para la amortización de las mismas?

DECRETOS.

DICTAMEN

DEL EXCMO. SR. D. MANUEL ALONSO MARTINEZ.

Me he enterado de la consulta precedente; y después de examinar las disposiciones legales que con ella tienen relación, he formado el convencimiento de que los bienes, derechos y arbitrios destinados, ya sea á garantizar, ya sea á comprar los valores que la ley ha declarado deuda amortizable, no pueden distraerse en manera alguna de su objeto; y por consiguiente, que declarar ahora deuda amortizable la deuda de Ultramar, la de los oficios enajenados de la Corona ó cualquiera otra que por la ley de 1.º de Agosto de 1851 no mereció tal calificación, es barrenar esta ley, defraudar las esperanzas legítimas de los tenedores y compradores de aquella deuda, introducir la perturbación en el mercado y abrir una brecha en el crédito del país.

Para mí la ley de 1.º de Agosto de 1851 no es más que un pacto entre el Estado y sus acreedores. La promesa de pago que á estos se hizo en ella, debe cumplirse religiosamente. El gobierno del país hizo entonces una calificación de los créditos, distribuyendo en varias clases á sus acreedores, y estableciendo para cada clase una forma determinada de pago. «Serán deuda amortizable, dice el art. 3.º, los capitales de la corriente, los de la deuda provisional, los vales no consolidados, y las deudas sin interés, pasiva y diferida de 1831.» Hé aquí, pues, los únicos valores que se convierten en deuda amortizable; no figuran entre ellos ni los oficios enajenados de la Corona ni la deuda de Ultramar; al revés, respecto de estos créditos hay en la ley un artículo especial.

¿Y cuáles son los medios de pago que ofrece el deudor á los tenedores y compradores de esos valores que él mismo declara deuda amortizable? La ley les niega el pago de intereses ó réditos; pero en cambio se obliga á amortizar la deuda.

Y esta obligación de amortizar la deuda, ¿es una obligación puramente personal, de cuyo cumplimiento responda el Estado de una manera vaga y general, con sus bienes presentes y futuros, ó es, por decirlo así, una obligación real é hipotecaria, á cuyo pago quedaron especialmente afectos ciertos y determinados bienes y derechos? Y el Estado, ¿es árbitro de amortizar mucho ó amortizar poco, de amortizar cuando quiera y destinar las cantidades que le parezcan?

Los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21, responden satisfactoriamente á estas preguntas. La ley dijo á los tenedores y compradores del papel declarado por la misma «deuda amortizable»:—Se destinará tal cantidad mensual para la amortización de vuestra deuda; la compra de vuestros títulos se hará en pública licitación; y para que en ningún caso pueda faltar la cantidad que destino á la adquisición de vuestros créditos, os concedo una especie

de hipoteca, esto es, os señalo ciertos y determinados bienes, derechos y arbitrios, que quedarán especialmente afectos al cumplimiento de esta obligación; la conversión, venta de fincas y compra á metálico de vuestro papel, se verificará bajo la inspección de una comisión permanente de diputados y senadores; y la junta directiva de la deuda pública, á cuya disposición pongo los fondos destinados á la amortización, no permitirá que por ninguna causa se distraigan dichos fondos y valores de su especial y exclusivo objeto, siendo en otro caso individualmente responsables sus vocales; por último, yo os prometo aumentar los arbitrios para la más pronta extinción de vuestros créditos el día que sea más próspero el estado de la Hacienda pública.

Hé aquí condensadas todas las disposiciones de la ley respecto de la deuda amortizable. De ellas se deduce claramente que los acreedores de esta especie tienen: 1.º Derecho exclusivo á una cantidad fija mensual. 2.º Derecho igualmente exclusivo á los bienes, derechos y arbitrios que constituyen el fondo de amortización, tal como le establece el art. 16; y como consecuencia lógica é ineludible de estas dos proposiciones, que la participación ó concurrencia de cualesquiera otros acreedores con los derechos por deuda amortizable, tanto respecto de la cantidad mensual como del fondo de amortización, es abiertamente contraria al espíritu y texto de la ley de 1.º de Agosto de 1851. La obligación del Estado respecto de los tenedores de la deuda amortizable, no es una obligación meramente personal; es una obligación real hipotecaria: el deudor no tiene hoy facultad para ofrecer esa hipoteca á otros acreedores, en concurrencia con los que anteriormente han adquirido ese derecho real de un modo irrevocable. A ese fondo de amortización y á la cantidad mensual no se puede tocar, sino para aumentarlos, llegado que sea el caso previsto en el art. 25. Entretanto, hay que dejar las cosas como están; y si se ofreciera á otros acreedores el fondo de amortización como garantía, respetar en los poseedores de deuda amortizable su derecho anterior y su indispensable preferencia.

Con esto queda virtualmente resuelta la segunda cuestión que se me propone. ¿Tendrá derecho el Estado para establecer la concurrencia de los acreedores por deuda de Ultramar con los tenedores de la amortizable, aumentando proporcionalmente la cantidad mensual y el fondo de amortización? Esta cuestión tiene tres aspectos: el financiero ó económico, el de la legalidad estricta, y el constitucional ó de crédito público. No me toca examinar el primero. Dado mucho, sin embargo, que pueda establecerse la proporción con una exactitud matemática, y que aun así dejen de sufrir algún perjuicio los tenedores de deuda amortizable; pero repito que esto no es de mi incumbencia, ni me considero competente para resolverlo.

Limitándome, pues, á la cuestión de derecho, insisto en que no es legal establecer la concurrencia de otros acreedores al fondo de amortización, quitando á los tenedores de la deuda amortizable, contra su voluntad, el derecho preferente que han adquirido á dicho fondo. Por otra parte, aunque la proporción que se estableciera fuese exacta, el peligro está en el precedente que se sienta. Retóquese una vez la ley; y con el mismo derecho que este ministro y las actuales Cortés, podrán mañana otras Cortés y otro gobierno modificarla ó derogarla con menos miramiento, causando perjuicio considerable. La primera condición del crédito es la estabilidad de la ley; por eso se ha creído en muchas partes que era necesario apoyar las leyes de crédito en la Constitución, que no puede ser derogada por la vía ordinaria. Aun esto no basta, porque también las Constituciones caen y se mudan. La opinión, sin embargo, ha venido á remediar el mal, y hoy todos los partidos políticos y todos los gobiernos, cualquiera que sea su forma, respetan lo hecho por sus antecesores, convencidos de que el crédito público no se establece sino á condición de hacer del Estado un deudor tan estrechamente obligado como cualquier particular. Por eso la amortización descansa en la idea de una caja particular, que constituye en la administración financiera una persona jurídica aparte y distinta del Tesoro, con su existencia y su contabilidad propias, y su capital inalienable. Esa caja compra los créditos y le constituye por una verdadera novación de contrato á los acreedores originarios. La inalienabilidad temporal del fondo de amortización, de cuyos productos dispone la junta directiva de la deuda pública, bajo la responsabilidad individual de sus vocales, y la inspección de la comisión permanente de senadores y diputados, me parece una condición esencial para el mantenimiento del crédito público; y esa inalienabilidad sería ilusoria si el Estado aplicara hoy dicho fondo de amortización á otros acreedores, antes de haberse extinguido por completo la deuda amortizable.

Tal es al menos mi dictamen, dado en mi estudio de Madrid á 12 de Noviembre de 1860.—Manuel Alonso Martínez.

DICTAMEN

DEL EXCMO. SR. D. MANUEL CORTINA.

La ley de 1.º de Agosto de 1851, en su art. 3.º, declaró que la deuda amortizable de primera clase comprendería los capitales de la corriente á papel, los de la deuda provisional que por la misma ley no eran considerados en otra categoría, y los vales no consolidados; y que la de segunda clase comprendería las deudas llamadas sin interés, pasiva y diferida de 1831.

A la amortización de dicha deuda, que se decla-

ró no pasaría nunca á la clase de renta perpétua consolidada, se aplicaron varios arbitrios por el artículo 16 de la mencionada ley; y en el art. 23 se consignó por último que serían objeto de otra especial la deuda de Ultramar, los créditos procedentes de oficios enajenados, y cualquiera otro cuyo reconocimiento se hallase á la sazón en suspenso. Este supuesto, para mí es incuestionable que el gobierno, dentro de dicha ley, no tiene facultad para acumular á la deuda amortizable por ella creada, la que la misma reservó para otra especial, aun cuando se reconociera al mismo tiempo una cantidad proporcional para la amortización de ella. Cuanto hiciera en semejante sentido sería ilegal, y cualquier tenedor de deuda amortizable podría, con esperanza legítima de obtenerlo, demandar en la vía contenciosa la nulidad de cualquier resolución que se dictase contra lo prevenido en la citada ley, y que fuera depresivo de los derechos que la misma otorgó á los tenedores de dicha deuda amortizable.

Pero esto no es de temer que suceda, en el hecho de haber propuesto el gobierno á las Cortés el proyecto de ley que tengo á la vista, relativo á la deuda á que se refirió el art. 23 de la ley de 1.º de Agosto de 1851; ha reconocido que carece de facultades para hacer la acumulación de una y otra deuda y para alterar ó modificar en lo más mínimo directa ni indirectamente lo que respecto á ella está determinado.

La cuestión que se propone en esta pregunta (la segunda) es de otra naturaleza muy distinta. No se trata ya, como en la anterior, de si dentro de una ley dada puede ó no el gobierno hacer tal ó cual cosa; sino de si es posible alterar dicha ley; de si otra puede modificar los derechos que ella haya creado y de que se esté quieta y pacíficamente en posesión; y concretándose al si se puede, debo contestar afirmativamente. La historia financiera de todos los países, y la del nuestro muy particularmente, nos presentan ejemplos muy frecuentes de alteraciones y modificaciones semejantes, hechas y llevadas á cabo inflexiblemente. La misma ley de 1.º de Agosto ofrece pruebas de ello en gran número de sus disposiciones, y las civiles y las mercantiles, aun tratándose de derechos entre particulares, han admitido la posibilidad de alterarlos y modificarlos por sucesos posteriores á su adquisición, imponiendo á los que en ello no estuvieran conformes la ley de las mayorías, y obligándolos á perder lo que estas hubiesen convenido en perder también por su parte.

Se puede, por tanto, verificar la emisión de nuevas láminas de deuda amortizable de primera y segunda clase en los términos que aparecen del proyecto de ley relativo á la de Ultramar; y contra el acto legislativo en que así se decreta, no alcanzo que haya recurso de ninguna especie.

Trasportada la cuestión á este terreno, pierde el carácter de legalidad estricta con que la he examinado y resultado al contestar la primera pregunta, y es forzoso considerarla con el de justicia y conveniencia solamente; y bajo este punto de vista creo que no debe hacerse semejante novedad, y que no se halla justificada de ninguna manera, ni merecería siquiera disculpa.

Los tenedores de la deuda amortizable adquirieron incontestable derecho por la ley de 1851 á que solo se comprendieran en ella los créditos que tácitamente se expresaron en su art. 3.º, y si duda pudiera haber habido sobre ello en vista de lo dispuesto en dicho artículo, la habría hecho desaparecer cumplidamente el 23, por el cual se declaró que los otros créditos que había ó pudiera haber además de los que según ella debían constituir la renta perpétua consolidada ó diferida — las deudas amortizables de primera y segunda clase, haciéndose especial mención de la deuda de Ultramar, serían objeto de una ley especial, que el gobierno someterá á las Cortés; esto es, que se arreglarían y pagarían como de nuevo se ordenase en buen hora; pero fuera de la ley de 1851, sin perjuicio de los derechos que ella atribuía y con otros recursos que los que la misma establecía.

Tales son el verdadero espíritu y la genuina inteligencia de la ley de 1851, y nadie la ha entendido, ni podido, ni debido entender, de otra manera. En la confianza que esto ha inspirado, han podido hacerse, y se habrán hecho sin duda, operaciones sobre la deuda amortizable; sus tenedores habrán podido conservarla aguardando el turno de su amortización, y los derechos de unos y otros quedarían incontestablemente burlados, bien aumentándose la deuda amortizable con otros créditos no expresados en el referido art. 3.º, y reservados para otra ley por el 23, bien distrayéndose los arbitrios consignados para su amortización de su primera y exclusiva aplicación: ni una cosa ni otra pueden hacerse sin faltar abiertamente á la justicia; sin defraudar derechos respetables; sin burlar esperanzas legítimamente concebidas.

Y sería esto tanto menos disculpable, cuanto que nada ha ocurrido después de 1851 capaz de coonestarlo siquiera. El estado del país y de su Tesoro es mejor que el de aquel año; lejos de haber obstáculos, que entonces no hubiera, para cumplir las obligaciones que se contrajeron, pueden llenarse hoy más fácil y desembarazadamente; ¿por qué, pues, se ha de escatimar su cumplimiento? ¿Se concibe siquiera que un deudor se presente á sus acreedores pidiéndoles quita ni aun espera sin que les diga al mismo tiempo, y sea verdad, que su situación ha empeorado y que no le permite hacer lo que podía cuando contrato para con ellos sus obligaciones? Los arreglos de deudas, que han llevado consigo modificaciones ó reducción de derechos anteriores, han descansado siempre en la falta de posibilidad de los Estados que los han he-

cho, y en la necesidad consiguiente de disminuir ó aplazar sus obligaciones; pero al gobierno español no le es dado decir en 1860 que puede menos que en 1851; que sus recursos hayan disminuido; que le sea imposible hoy cumplir lo que hace nueve años ofreció espontáneamente en cambio de no pequeños sacrificios que exigió de sus acreedores, y á que estos se resignaron: no hay, por tanto, ni aun esa razón suprema de la imposibilidad, ante la cual tienen que sucumbir derechos que sin ella deberían y no podrían menos de hacerse efectivos.

Y si esto es incontestable respecto á toda clase de deuda, lo es mucho más respecto á la que no devenga intereses, en cuyo caso se halla la amortizable. Entorpeciendo ó dilatando el pago de la consolidada ó diferida, sin dejar de pagar sus cupones, no se la hace desmerecer, como á la que debe su valor en el mercado exclusivamente á la seguridad y rapidez con que haya de ser amortizada; y toda medida, por consiguiente, que produzca entorpecimiento ó dilación en su pago, es de más gravedad y causa de mayor perjuicio para sus tenedores que para los que lo son de la que devenga interés, que continúan percibiendo sin interrupción.

Hay además otro aspecto, bajo el cual, lo mismo el gobierno que los llamados á legislar sobre este asunto, no podrían, sin olvidarse de sus deberes, dejar de considerar la cuestión que están llamados á resolver, y es el de la conveniencia. La alteración de la deuda pública en daño de sus tenedores, sin que haya una causa muy grave y conocida que la justifique, ó por lo menos disculpe, daña considerablemente el crédito de los Estados por la perturbación que produce en los derechos legítimamente adquiridos y la inseguridad de que es necesariamente causa: y ya que el de España se halla tan alto hoy; cuando los capitales extranjeros se imponen con confianza en nuestras rentas; cuando los que solo pensaban hace poco en enterrar sus economías, las imponen también y hacen así productiva una riqueza de que nada reportaban antes ni el país ni sus poseedores, sería indolente error destruir, ó amenguar por lo más mínimo, esa saludable confianza, que tanto ha contribuido al incremento del crédito público y al desarrollo de la pública prosperidad.

Pero todas las consideraciones que acabo de exponer para persuadir que deben ser respetados los derechos que la ley de 1851 dió á los tenedores de deuda amortizable, y que no pueden aumentarse los créditos que la constituyen, ni distraerse los recursos destinados á su amortización sin manifiesta injusticia, no bastan á impedir que se aumente la mencionada deuda amortizable con cualquiera otra que se crea oportuno agregarle, toda vez que en rigorosa proporción se otorguen nuevos arbitrios para la amortización de este aumento, sin perjudicar en lo más mínimo á la reconocida como tal en 1851. El gobierno, como cualquier otro deudor, está en su derecho haciendo esto; y los acreedores, siempre que queden intactos sus derechos adquiridos, y que no se perjudiquen bajo ningún punto de vista, no pueden oponerse á que su deudor haga los arreglos que estime convenientes respecto á otros acreedores que pueda tener.

Resumiendo, pues, todo lo expuesto,

OPINIO:

1.º Que el gobierno por sí solo no puede hacer nada que esté en oposición con la ley de 1.º de Agosto de 1851, y que contra cualquier cosa que hiciera en semejante sentido procedería una demanda contencioso-administrativa que en mi concepto no podría menos de prosperar.

2.º Que si bien posible, sería injusto que otra ley anulase los derechos reconocidos por la citada de 1851, ya sea aumentando los créditos que constituyen la deuda amortizable, ya distrayendo los recursos con que debe ser amortizada; si bien contra lo que una ley hiciera en tal sentido, no encuentro recurso posible.

3.º Que solo podría acumularse la deuda amortizable, aumentando también en rigorosa proporción arbitrios para amortizar el aumento que se hiciese; de manera que los anteriormente establecidos quedaran consagrados á la amortización de la reconocida hoy, á fin de que no se dilatasen ni un solo momento, ni se perjudicasen los derechos de sus tenedores, los cuales no podrían ser atacados ni menguados sin una notoria violencia é injusticia; siendo, como es por fortuna, mejor el estado del deudor, que cuando los reconoció en 1851.

Madrid y Diciembre 29 de 1860.—M. Cortina.

DICTAMEN

DEL EXCMO. SR. D. CÁNDIDO NOCEDAL.

El letrado que suscribe ha examinado atentamente la consulta anterior, y pasa á exponer acerca de ella su dictamen según su leal saber y entender.

La ley de 1.º de Agosto de 1851 es á todas luces un arreglo de la deuda hecho por la nación con sus acreedores. No importa que sea una ley para que se entienda como un contrato bilateral: la Constitución del Estado exige la concurrencia de las Cortés con el rey para ciertas cosas, y muy especialmente para las de esta índole y naturaleza: la concurrencia de las Cortés con el rey es una garantía mayor para el contrato; pero no por eso deja de ser la tal ley el remate más seguro de un contrato, y la más eficaz garantía de su cumplimiento. Ella crea derechos en los acreedores, les da seguridades, les afianza un modo cierto y estable de cobrar, y sería una injusticia, una agresión de derechos, el faltar en lo más mínimo á lo convenido y decretado. La ley será buena, ó será mala; será ó no previsora; será completa ó incompleta; será ó no haberse

hecho, aprobado y sancionado; pero se hizo, se aprobó, se sancionó y se promulgó, y no es lícito ir contra las esperanzas, ¿qué digo esperanzas? contra los derechos que confiere a los acreedores del Estado, porque es, lo repito, un contrato hecho con ellos, el cual fué convertido en ley para mayor seguridad de cumplimiento y duración, y para que nadie fuese osado á tocarle.

Pero una ley, se dirá, se puede derogar por otra. Si, cuando es una ley general, que nace espontáneamente del ánimo del legislador, que no tiene por objeto arreglar pasadas diferencias, entre partes mutuamente interesadas. No, cuando la ley es el efecto de un contrato bilateral, el remate de un arreglo hecho de comun acuerdo entre el deudor y los acreedores. Para que esta ley pueda ser derogada ó variada, es menester que lo consientan los interesados en ella; si no, su derogación ó variación será una injusticia, uno de esos actos que lastiman hondamente el crédito de un país. Aun las leyes de la primera clase enunciadas en el principio de este párrafo, han de respetar, para ser buenas y prudentes, los derechos y las esperanzas legítimas, creadas á la sombra y bajo el amparo de leyes anteriores.

El art. 3.º de la ley de 1.º de Agosto designa claramente los valores que son objeto del arreglo que contiene la misma ley, y el art. 16 señala los fondos para la amortización de los valores del artículo 3.º El 18 establece textualmente que las cantidades asignadas por esta ley á la amortización de la deuda amortizable, se emplearán mensualmente en la compra de dicha deuda, destinándose la mitad á la primera clase y la otra mitad á la segunda. Es, pues, claro que todos los medios que señala el artículo 16 son pura y exclusivamente dedicados á los valores marcados en el 3.º, sin lo cual sus poseedores serían burlados en el derecho que les dió el art. 15.

Ahora bien: con arreglo á estos principios, creo que los acreedores tenedores de la amortizable de primera y segunda no pueden tener coparticipes en ninguno de los cuatro medios que designa el art. 16 de la ley de 1.º de Agosto, y creo además que toda amalgama hecha sin su conocimiento y voluntad, será un ataque á su derecho, y un acto injusto y arbitrario de parte del legislador.

El gobierno puede y debe presentar un proyecto de ley de arreglo de la deuda de Ultramar, en cumplimiento del art. 23 de la ley de 1.º de Agosto. Puede y debe el legislador señalar valores para ella; puede crear unas lánimas especiales que representen esa deuda, y atribuir á su seguridad valores iguales, mayores ó menores, mejores ó peores, que los señalados en el art. 16 de la ley de 1.º de Agosto; pero no debe ni puede tocar á estos sin su consentimiento; no debe ni puede hacer á nadie partícipe de esta fianza que se ha de emplear por mitad en la compra de cada una de las deudas comprendidas en aquella ley de 1851; no debe ni puede alterar el contrato hecho con sus acreedores; no debe ni puede introducir la concurrencia de otros acreedores por medio de una amalgama que no será justa si no es convenida con los primeros.

El aumento de fondos en el presupuesto tampoco servirá para hacer equitativa la amalgama. El legislador puede crear otros y proponer la votación de medios permanentes ó anuales; pero no involucrar y mezclar una deuda con otra. Este será á los ojos de algunas personas un defecto de la ley de 1.º de Agosto; pero defectuosa ó no, que sobre esto no estoy en el caso de dar mi opinión, ni se me pregunta, ni hay para qué, votada fué por las Cortes, sancionada por la Corona, promulgada como ley, y se le debe omnimodo respeto: en primer lugar, como ley del reino; y en segundo, como sanción de un contrato bilateral que uno de los contratantes no debe romper sin contar con la buena voluntad del otro.

Mas contra el mal que amaga, ¿qué recurso cabe? Judicial no veo ninguno. Es menester ilustrar el ánimo de los legisladores, acudir á ellos, exponerles el derecho; demostrarles que el legislador no lo puede todo, que está obligado á respetar los derechos legítimamente creados, que su poder es limitado como todos los poderes humanos, por las reglas del derecho, de la justicia y de la conveniencia pública; que abusan de su facultad y faltan á su deber los que lastiman el derecho ajeno, y matan el crédito, fuente de vida de las sociedades modernas, del cual se abusa en muchas ocasiones y se le exagera en otras, pero que debe ser respetado y considerado dentro de sus justos límites; y no los hay más sagrados que los que están garantidos por una ley y por un arreglo convenido.

El derecho del legislador tiene la compensación, como todos los derechos de los hombres, del cumplimiento de su obligación; y pocas obligaciones serán más claras que el de respetar los sagrados derechos de un tercero. Proceder de otro modo, es obrar revolucionariamente; porque tanto es revolucionario el que atropella en son de motín y de asonada los derechos existentes, como el que abusa de su poder constitucional y de la fuerza pública para el mismo objeto.

La exposición, debidamente ampliada, de estas y otras análogas observaciones, puede influir favorablemente en el ánimo de los poderes públicos llamados á examinar, discutir y votar el proyecto de ley. Si ellos no se convenciesen, se puede acudir á la Corona para que niegue la sanción en su día. Una y otra cosa puede hacerse, si se quiere, en forma de protesta solemne, para mayor efecto.

Acaso sería conveniente llamar la atención del mismo señor ministro de Hacienda, en un razonado escrito sobre estos puntos, porque acaso no los ha examinado á la luz de estos principios, y haya creído que está en el caso de obrar como se propone, en cumplimiento del art. 23 de la misma ley de 1.º de Agosto. Sería quizá oportuno hacerle entender razonadamente, que en presentar un proyecto de ley de arreglo de la deuda de Ultramar, cumple lo prevenido en el referido artículo de la ley; pero que una cosa es hacer ese arreglo, y otra amalgamar las deudas que no sufren ya amalgama con arreglo á los otros artículos de la ley misma.

Si todo esto no produce resultado ninguno, no veo camino legal que ponga en salvo los derechos

amenazados sobre que versa la consulta que se me ha hecho la honra de dirigirme.

Madrid 26 de Diciembre de 1860.—L. Cándido Nocedal.

DICTAMEN

DEL SR. D. NICOLÁS MARÍA DE RIVERO.

«Puede, sin faltarle á los artículos 3.º, 7.º, 16, 18 y 23 de la ley de 1.º de Agosto de 1851 y á los derechos que los mismos consignan en favor de los acreedores por las deudas amortizables de primera y segunda clase, verificarse la emisión de nuevas lánimas de dichas deudas en los términos que aparecen en el proyecto de ley relativo á la deuda de Ultramar?»

Ó DE OTRA MANERA:

«Tiene facultad el gobierno, dentro de la ley, para acumular á la deuda amortizable que fuera objeto exclusivo de la citada ley de 1.º de Agosto de 1851, la que reservó para una ley especial el art. 23 de dicha ley, aunque se le reconociera una cantidad proporcional para la amortización de las mismas?»

Antes de entrar en el fondo de esta cuestión, tan delicada como trascendental al crédito del país y á los intereses de legítimos acreedores, sea permitido observar al letrado que suscribe que no existe perfecta conformidad en el modo de proponer esta cuestión, bajo las dos formas en que se hace. Presentase por la primera desde un punto de vista absoluto, colocándola entre la ley de 1.º de Agosto de 1851 y el proyecto actual del gobierno; por la segunda se formula bajo la hipótesis de un fondo proporcional para la amortización de la nueva deuda; y esta limitación importantísima nos obligaría á prescindir de consideraciones muy atendibles que caben en la primera forma de la consulta, como se verá más adelante. Por este motivo, la cuestión que ha habido que resolver previamente ha sido la de saber á cuál de las dos fórmulas debía darse la preferencia, y la elección no era dudosa. La primera coloca la cuestión, como queda dicho, entre la ley de 1.º de Agosto y el proyecto actual del gobierno, en términos absolutos, debiendo por lo mismo resolver por la comparación de ambos documentos, tales como son en sí mismos. La segunda pregunta establece la cuestión entre dicha ley y una hipótesis que no existe en el proyecto presentado á las Cortes; porque este proyecto nada dice, nada ofrece sobre aumento de fondo; y aunque fuera cierto que el gobierno estuviera dispuesto á admitirlo, nunca convendría á los acreedores actuales conceder que este fondo sea proporcional al aumento de créditos todavía desconocidos.

Hay más. En la segunda fórmula se pregunta si tiene facultad el gobierno dentro de la ley para hacer la acumulación que es objeto del proyecto. Y propuesta así la cuestión, el letrado que suscribe se limitará á contestar que el gobierno mismo la ha resuelto ya negativamente en el mero hecho de acudir al poder legislativo, probando de este modo que no se cree autorizado para hacerlo por sí mismo. Siendo, pues, la forma de la primera pregunta más expedita; comprendiendo mejor y conformándose más á los términos opuestos con arreglo á los cuales debe resolverse la duda; siendo en fin, más favorable á las pretensiones de los señores consultantes, no podía menos de ser preferida á la segunda, que, encerrando una limitación ó caso puramente hipotético, modificaria en gran manera la resolución pedida, por lo menos al considerar la cuestión desde el punto de vista de la garantía ofrecida al crédito general acumulado.

Entrando ya de lleno en el punto consultado, sentaremos como preliminares del verdadero criterio para resolverlo, los supuestos siguientes que deben considerarse como axiomas admitidos:

1.º Que todo arreglo de deuda hecho por el Estado, impone al acreedor pérdidas y perjuicios más ó menos graves, resultando de aquí un contrato bilateral, tanto más sagrado é inviolable, cuanto que todas las ventajas del arreglo han quedado en beneficio del deudor.

2.º Que por la ley de 1.º de Agosto contrajo el Estado obligaciones con acreedores de deuda determinada y reconocida, señalando para su amortización efectos ó valores especiales suficientes á cubrir el importe de los reintegros anuales.

3.º Que los valores destinados á la extinción de la deuda amortizable, constituyen verdadera hipoteca en favor de dichos acreedores.

4.º Que el valor de aquellos créditos quedó pendiente desde entonces y en justa razón de la proporción establecida entre su entidad y el tiempo señalado para su reintegro, y de la seguridad de la garantía ofrecida hasta el completo pago.

5.º Que la deuda de Ultramar quedó excluida de aquella ley, estipulando que su arreglo sería objeto de otra ley especial.

Consideremos ahora el pensamiento del gobierno, envuelto en el proyecto, á la luz de estos principios.

En el ingreso del preámbulo finge un respeto hipócrita á la ley de 1.º de Agosto, diciendo que viene á presentar el proyecto de aquella ley especial que se ofreció para el arreglo de la deuda de Ultramar. Sigue ocultando su verdadero pensamiento á la sombra de los inconvenientes que teme de lo desconocido, y considerando, por lo mismo, como preferible el sistema adoptado para la amortizable peninsular.

Llega á la parte dispositiva del proyecto, y establece que el reconocimiento, liquidación y abono de la deuda de Ultramar se hará con arreglo á las leyes de 1.º y 3 de Agosto. Y en verdad que si solo hubiéramos de juzgar este proyecto por lo que dice, no podría sostenerse sin grande esfuerzo que el gobierno alteraba en lo más mínimo la ley, porque en él se afirma que la presente es aquella especial que se prometió; y como al prometerla no se dijo si había de redactarse sobre estas u otras bases, claro es que á lo único á que se obligó el Estado fué al arreglo de la deuda de Ultramar con entera separación de la que fué objeto de la ley anterior. El verdadero pensamiento del gobierno, insidiosamente envuelto en el proyecto, solo se descubre al reflexionar que, no solici-

tándose para la nueva deuda aumento de fondo, ni afectándose genero alguno de valores ó efectos especiales para garantizar su amortización, lo que pura y simplemente se pretende por el gobierno, es hacer una verdadera amalgama de ambas deudas. No viene, como falsamente ha dicho, á cumplir lo prometido en la ley de 1.º de Agosto presentando una ley especial; viene, por el contrario, á suprimir y anular por completo aquella misma ley que invoca en cuanto tiene de más importante, de más sagrado, de más inviolable, como son los derechos adquiridos por los acreedores, las garantías estipuladas y el solemne compromiso de no confundirlas nunca con los acreedores de Ultramar.

Lo que el gobierno se propone es traer nuevos partícipes por cantidades desconocidas á dividirse en ignorada proporción las ya mezquinas seguridades y garantías concedidas especialmente á los acreedores de 1851: hacer extensiva á Ultramar la ley decretada única y especialmente para la península, en lugar del arreglo separado prometido para las colonias: despojar á legítimos y reconocidos acreedores de la hipoteca afecta exclusivamente á su crédito: romper contratos sagrados, á cuya sombra descansaban seguros inmensos intereses, sin consultar la parte del acreedor; y matar de un solo golpe el crédito del país, diciendo á los antiguos y nuevos partícipes que así como el anterior arreglo ha sido anulado por este, este á su vez puede serlo por otro.

El gobierno comprendió muy bien que no podía arrostrar por sí mismo tamaña responsabilidad, y en su consecuencia ha querido arrojarla sobre los representantes del país. Pero pueden estos aceptar legalmente el proyecto del gobierno? Hé aquí la verdadera cuestión, puesto que al Congreso es á quien el proyecto se ha sometido.

Más por grande que se quiera suponer la esfera de competencia de los legisladores, por más que, en términos generales, las cuestiones de crédito y arreglo de la deuda estén á ellos solos reservadas; por más que las mentidas formas del proyecto solo aparenten el cumplimiento de lo pactado en otra ley, el letrado que suscribe cree firmemente que esta cuestión, tal como el gobierno la propone, es tan ilegítima como lo son los derechos de propiedad, como lo sería un proyecto de despojo ó cualquier otro atentado que conmoviera los fundamentos de la sociedad.

Cierto es que no podemos comparar al deudor que se llama Estado con el deudor particular: cierto es que el derecho de conservación que tiene el cuerpo social supone el derecho consiguiente de limitar sus sacrificios en favor de sus acreedores hasta el punto de preservar su crédito, conservando al mismo tiempo las fuerzas necesarias, los recursos que basten á su existencia, lo que en los individuos se llaman primeras necesidades. Certo es también, por lo mismo, que tiene la facultad de arreglar sus deudas bajo las condiciones convenientes y en proporción con sus recursos; tanto más, cuanto que los que con el Estado contratan saben ya de antemano las eventualidades á que se sujetan. Pero una vez que este deudor privilegiado ha reconocido una deuda, ha establecido las condiciones para su pago, ha señalado los valores ó efectos que han de constituir su garantía; una vez, en fin, que de esta manera ha creado un derecho de propiedad, esta propiedad es tan sagrada como cualquiera otra; este derecho es irrevocable; y si es irrevocable, es ilegítima. Hay aquí dos derechos que nunca podrán confundirse sin confundir con ellos y subvertir las bases de la sociedad: uno es el derecho de arreglar sus deudas, que compete al Estado; el otro es el derecho de alterar el pacto celebrado con sus acreedores. Pero ¿y si el Estado, después de arreglar sus deudas, viniera á caer en un período de decadencia tal que no le fuera posible cumplir los compromisos que él mismo se había creado? ¿No volvería á revestirse de aquel mismo derecho de salvarse de una ruina cierta, y por consiguiente, de disminuir ó anular por completo las garantías ofrecidas? Es indudable que á las naciones que caen en tal estado de penuria y abyección, les queda todavía un derecho: el fatal, el terrible, el vergonzoso derecho de la bancarota; pero nunca el incomprendible, el contradictorio derecho de faltar á lo prometido y conservar la honra.

Y para demostrar que esta no es una teoría, más ó menos aceptable, más ó menos justa, pero exclusiva de alguna escuela ó de algún individuo; para probar que los efectos y valores que por la ley de 1.º de Agosto se señalaron para el reintegro de la deuda amortizable constituyeron una verdadera hipoteca especial; para evidenciar, en fin, que los derechos concedidos entonces á esta clase de acreedores eran de naturaleza tan irrevocable como los que competen á cualquier propietario sobre la finca que haya adquirido por alguno de los títulos hábiles para transferir el dominio, vamos á ver que los legisladores del año 51, y el mismo Bravo Murillo, autor del arreglo de la deuda, reconocieron explícitamente esta doctrina con aplicación á la ley de 1.º de Agosto.

Desandando saber un señor diputado, pág. 699 del Diario de las sesiones, si el 20 por 100 de los bienes de propios, que era uno de los valores señalados por el art. 16 del proyecto para el pago de la amortizable, se entenderían perpetuamente gravados con esta carga, ó si las Cortes sucesivas tendrían la facultad de libertarlos de este ó cualquier otro gravamen, el Sr. Bravo Murillo contestó, entre otras cosas:

«Quiere S. S. que sepan los pueblos que esto puede tener alguna vez variación; pero en esta ley no se dice, ni se pudiera decir tampoco, que lo que en este punto como en cualquiera otro de aquellos que no tienen relación con los acreedores, en lo cual no cabe alteración ó cambio, que en cuanto á los medios no se pueda variar por otra ley; todo lo que aquí pueda haber de interesante es, que se designen los seis millones de reales en que se ha presupuesto el 20 por 100 á ese objeto, y en cualquiera tiempo que las Cortes estimaran que había otra cosa mejor que sustituir al 20 por 100, que había otra cosa mejor que los propios, podían hacerlo. Todo lo que pudieran exigir los acreedores era que no se les quitara el producto del 20 por 100, sino que en el caso que se dispusiera de él para otro objeto, se sustituyera con otra cosa en la misma cantidad.»

Vemos, pues, que el gobierno declaró, y el Congreso aceptó estas declaraciones:

1.º Que en todo cuanto cuantía tuviera alguna relación con los acreedores reconocidos por aquella ley, ni aun las Cortes podrían en lo sucesivo hacer alteración ni cambio alguno.

2.º Que estos cambios ó alteraciones solo podrían tener lugar respecto á los medios establecidos para el pago.

3.º Que teniendo derecho estos acreedores á conservar íntegra la importancia ó entidad de sus garantías, no podría despojarse de ellas ni aun por el poder legislativo, sin sustituir al mismo tiempo con otras de igual valor.

De donde resulta: Que por confesión del mismo gobierno, autor del arreglo, y asentimiento del Congreso, las Cortes sucesivas perdieron toda facultad de suprimir ó amenguar los medios sucesivos para la amortización de aquella deuda.

Y si el cúmulo de las atribuciones legislativas queda tan reducido en este punto, aun cuando se trate de acorrer á las necesidades del Estado, ¿qué no deberemos decir cuando la razón suprema del proyecto del gobierno no nace de la imposibilidad de sostener los compromisos contraídos, sino del deseo injustificado de favorecer á nuevos acreedores con gravísimo perjuicio de los antiguos? En este caso cesa y desaparece por completo la única razón eficiente del único derecho del Estado, porque ya no se trata de él ni de su conservación, sino de quitar ó lastimar los derechos de unos, derechos solemnemente reconocidos, para darlos ó dividirlos entre otros particulares, cuyos derechos están todavía por reconocer; y esta facultad monstruosa nadie ha soñado jamás en concederla al Estado en las sociedades modernas.

Y que el único pensamiento del gobierno es tan solo el de favorecer á unos acreedores á expensas de los otros, se evidencia más y más al considerar que el Estado se obligó únicamente á dar una ley especial para la deuda ultramarina, sin señalar plazo para este arreglo, y que por lo mismo, no puede escudarse pretextando la necesidad de hacerlo al presente: que no existiendo esta necesidad, el proyecto del gobierno solo tendría razón legal en el supuesto de que el estado de las rentas públicas hubiera llegado á la prosperidad que exige el reconocimiento y abono del nuevo crédito; y que bajo cualquier hipótesis que se establezca, el arreglo que ahora se propone debe ser objeto de una ley especial.

En efecto, se ha dicho ya, y volvemos á repetir, que no es nuestro ánimo sostener que por la palabra especial quisieran entender el gobierno y las Cortes una ley basada sobre condiciones y principios distintos. Lo que se quiso significar, porque solo así podría darse al papel que hubiera de emitir el crédito y valor convenientes, fué que cualquiera que pudiera ser el arreglo futuro de la deuda de Ultramar, nunca, jamás vendría á confundirse ni amalgamarse en una sola las dos deudas.

Se quiso apartar de la vista de la especulación la eventualidad desastrosa que tiende á realizar el proyecto del gobierno, de que nuevos acreedores por cantidades hasta hoy desconocidas, y que tal vez excedan ó por lo menos igualen al capital amortizable de la península, vengan á intrusarse entre los tenedores de este capital, dividiéndose entre todos, y por lo tanto despojándoles de una gran parte de las garantías que especialmente se les concedieron; de que en las licitaciones públicas para la amortización de la deuda no pudieran concurrir los acreedores de la península con los que han adquirido la deuda de Ultramar por un vil precio, siguiéndose de aquí que la deuda más moderna se amortizara antes que la más antigua; de que esta amalgama, hecha contra ley y en fraude de acreedores reconocidos, introdujera una perturbación terrible en los valores actuales, matando legítimas esperanzas, arruinando una colosal fortuna dentro de la península en beneficio del crédito ultramarino, y colocando así la colonia sobre la metrópoli; de que al solo anuncio de esta amalgama ilegal, cayeran en menosprecio créditos respetables consagrados por los poderes públicos, mientras se levantaba á grande altura la olvidada deuda de Ultramar, y con ella subieran á rápidos y colosales beneficios los que habiendo tenido medios de conocer anticipadamente el pensamiento del gobierno, pudieron prepararse haciendo grandes adquisiciones de un papel que casi se ha vendido al peso. Todo esto se quiso evitar con la ley especial que se prometió, prestando así justo tributo al crédito interior, á los derechos adquiridos y á la moralidad pública; todo esto se vulnera por el proyecto del gobierno!

Y se vulnera también, y se vulnera de muerte, otra cosa que vale tanto como todo esto, el crédito general del Estado; porque si por desgracia de nuestro país se convirtiera en ley ese desastroso proyecto; si se sentara el precedente de que las garantías ofrecidas á los acreedores pueden anularse ó dividirse entre nuevos copartícipes, según el estado de las rentas ó el beneplácito de cada legislatura; si del seno de la representación nacional sale un eco amenazador que diga á los antiguos acreedores: esas garantías que hoy os ofrecemos podrán desaparecer dentro de un año, ¿qué vendría á ser del crédito del Estado? ¿Podría este sentarse orgulloso sobre la ruina de sus acreedores? Y por lo que respecta á la consideración y confianza de los extranjeros, ¿qué sería también de nuestro crédito si se les diera bastante motivo para decir que en España no quedaban ya más garantías para los acreedores del Estado que las que á naciones más poderosas que nosotros ofrecen la fuerza y la razón de sus cañones? ¿Qué proyecto es ese, pues, que arruina los acreedores antiguos; que no favorece, porque no da garantías, á los originarios que van á crearse; que mata nuestro crédito en el interior y en el exterior, y que, faltando á la ley y á la fe solemnemente prometida por los poderes públicos, sacrifica cuanto de sagrado y respetable existe en un país, en aras de un agio más que probable y de sordidas especulaciones?

Ahora nos haremos cargo de esta misma cuestión, aunque más ligeramente, considerándola en el caso hipotético de que para deslumbrar la conciencia de los diputados y del país, consintiera el

gobierno en aumentar el fondo destinado á la amortización. Y en verdad que si la nueva deuda que se trata de liquidar nos fuera conocida con exactitud; y si el aumento del fondo destinado á su extinción fuera proporcionado á su entidad, aunque siempre se faltaría á la ley y los acreedores peninsulares quedarían de peor condición, con todos los demás inconvenientes que quedan enumerados, aún podría suceder que los perjuicios no fueran ya tan graves. Pero la deuda de Ultramar no es conocida más que de la manera vaga y artificiosa con que el gobierno ha querido anunciarla: es más, en el proyecto se conceden dos años para reclamar el reconocimiento de los créditos, y está en la conciencia de todas las personas competentes en la materia, que una vez votada la ley, esa deuda ha de presentarse con asombrosas proporciones.

Hé aquí por qué no puede admitirse la hipótesis de que el aumento de fondo esté en justa proporción del aumento de la deuda amortizable: hé aquí por qué, aun prescindiendo de los demás inconvenientes, los acreedores actuales no pueden ni deben aceptar la amalgama y mancomunidad que establece el proyecto: hé aquí por qué un aumento de fondo, aun sin contar con sus mezquinas proporciones, no podría despojar al proyecto de su evidente injusticia. O las nuevas garantías son ó no suficientes para cubrir las exigencias de la deuda que va á liquidarse. En el segundo caso, quedaría por este solo hecho demostrada la injusticia del proyecto con respecto á los antiguos acreedores, cuyas garantías vendrían á compartirse: en el primer caso, ¿qué inconveniente puede tener el gobierno para cumplir lo pactado, presentando una ley especial que tendría la doble ventaja de garantizar suficientemente la nueva deuda y de tranquilizar á los actuales acreedores, conciliando así todos los intereses? Precisamente por esta razón, porque no puede comprenderse ni presumirse siquiera cuál sea el motivo de legalidad, ó de conveniencia al menos, que tenga el gobierno para faltar á lo pactado, por eso mismo es por lo que la alarma general se halla suficientemente justificada; porque un motivo que claramente no se ve nacer ni de la ley ni de la conveniencia, ese motivo no puede ofrecer á la especulación otra idea que la de un grave peligro, tanto más temible cuanto menos conocido. Por consiguiente, tampoco podría ser admisible, legalmente hablando, el proyecto del gobierno, aun cuando se votara un aumento de fondo para amortizar la nueva deuda, mientras no se establezca la prometida separación de la deuda anterior.

De todo lo expuesto se deducen lógicamente estas conclusiones:

1.º Que no puede negarse al Estado, ni por lo mismo al poder legislativo, la facultad de arreglar la deuda pública bajo las condiciones y con la limitación racional que aconsejen la extensión de sus recursos y la necesidad de conservar su crédito.

2.º Que una vez que haya usado de esta facultad privilegiada, los derechos declarados y las garantías concedidas á los acreedores crean un verdadero derecho de propiedad y tienen todos los caracteres de un título de dominio.

3.º Que, por rigorosa consecuencia, el poder legislativo no puede ya atacar ó perjudicar esta propiedad, reconocida por él, sin indemnizar ó declarar al país en insolvencia ó bancarota.

4.º Que así lo reconocieron el gobierno y los Cuerpos colegisladores al discutirse el art. 16 de la ley de 1.º de Agosto, declarando que las Cortes sucesivas no podían cambiar ni alterar cosa alguna que tuviera relación con los acreedores.

5.º Que, según esta misma declaración, los cambios ó alteraciones respecto á los medios establecidos para el reintegro, únicos posibles, se podrían verificar á condición de sustituir una garantía de valor igual á la que se hubiera de suprimir; lo que equivale á una simple sustitución de hipoteca.

6.º Que el proyecto del gobierno, en cuanto propone que la deuda de Ultramar se arregle con entera sujeción á la ley de 1.º de Agosto, sin señalar aumento de fondo ni nuevas garantías para los futuros acreedores, con la debida separación, establece pura y simplemente una amalgama, fundiendo en una sola la deuda de la península y la de Ultramar.

7.º Que aun cuando se admitiera por el gobierno un aumento de fondo, no por eso se evitarían la injusticia del proyecto, ni la ruina de los acreedores de la península.

8.º Que por esta razón el proyecto del gobierno, en lugar de ser el cumplimiento de lo prometido en la ley de 1.º de Agosto, como supone, es por el contrario su completa negación, porque no es la ley especial estipulada, y porque destruye todas las garantías concedidas á los acreedores por aquella ley.

9.º Que la conducta del gobierno es tanto menos disculpable, cuanto que, no habiéndose obligado al arreglo de la deuda de Ultramar en un plazo fijo, ha debido esperar á que la reconocida en 1851 estuviera amortizada, ó á que el estado de prosperidad de las rentas públicas le permitiera arreglar la nueva deuda separadamente, con fondos, condiciones y garantías especiales.

10.º Y como consecuencia de todas estas premisas derivadas de la ley, de los hechos admitidos y de declaraciones auténticas: Que el gobierno no ha podido proponer, ni las Cortes pueden admitir, dentro de sus facultades, las modificaciones y profunda perturbación de derechos, que una vez reconocidos por el Estado, adquieren el sello sagrado de verdaderos títulos de propiedad, que si alguna vez pueden ser modificados por la necesidad imperiosa de conservar el Estado mismo, nunca podrán serlo en beneficio exclusivo de particulares.

Con lo cual queda resuelta negativamente la cuestión consultada.

Y antes de terminar este informe, en cuya redacción no ha influido ni el fanatismo de escuela, ni la pasión política, ni los respetos ni consideraciones de ningún genero, sea permitido al letrado que suscribe expresar su ardiente deseo de que la conversión de toda especie de deuda á un solo y único tipo, liquidadas según sus orígenes y circunstancias especiales, sin lastimar derechos adquiridos, venga á poner término á tanta confusión, á

tanta inseguridad, á tantas arbitrariedades, fuentes impuras de reprobados manejos, de agios escandalosos que permiten la improvisación de sorprendentes fortunas elevadas sobre las ruinas de otras más legítimas, y del crédito del país.
 Madrid 28 de Diciembre de 1860.—Licenciado Nicolás M. Rivero.

DICTAMEN

DEL SR. D. GREGORIO DE MIOLA.

El proyecto de ley para el arreglo de la deuda de Ultramar, aprobado que sea por los Cuerpos colegisladores, y sancionado por S. M., más bien que una ley especial sobre dicha deuda, será una ampliación y una parte integrante de las de 1.º y 3.º de Agosto de 1851, y dando participación á los nuevos acreedores en los recursos que la de 1.º de Agosto destina en el art. 16 para el pago y extinción de la deuda amortizable de que habla el artículo 3.º, determinando en el 18 que se dividan por mitad entre las amortizables de primera y segunda clase, altera esta en su letra y en su espíritu.

Altérala en su letra, ora porque no será una ley especial sobre la deuda de Ultramar, sino una declaración de que la misma de 1.º de Agosto sea aplicable á la deuda de Ultramar, ora porque los recursos de que habla el art. 16 de la de 1.º de Agosto, están destinados precisa y exclusivamente á la amortización de las deudas de que habla el 3.º, y desde el momento en que se confunda con estas parte de la de Ultramar, á calidad de que se pague con los mismos recursos ó arbitrios, resultará que estos no se destinan exclusivamente á la amortización de la deuda comprendida en dicho art. 3.º, por más que se destinen también otros valores á la amortización.

Por lo que toca al espíritu de la ley, que no puede dejar de estar en consonancia con la letra clara de las disposiciones que acabamos de indicar, y ofrecen á los acreedores garantías especiales de que se les satisfará lo que se les prometió, en la forma que se les prometió, es claro que el nuevo proyecto lo contrario, defraudándoles en las esperanzas legítimas que concibieron y aun en los derechos que adquirieron.

Presumo que el señor ministro sostendrá que su proyecto no lastima los derechos ni defrauda las esperanzas de los acreedores, toda vez que S. E. se allana á destinar á la amortización nuevos valores que equivalgan ó superen al aumento que el proyecto producirá en la deuda amortizable, asegurando así la extinción de toda ella en igual tiempo y con las mismas ventajas que con los recursos marcados en la ley de 1.º de Agosto, se extinguiría la existente, y que los acreedores tienen el deber de prestarse á lo que no les perjudica y al Estado favorece, por un principio que no es menos aplicable á los negocios de administración que á los de jurisprudencia civil; pero yo, sin embargo de opinar como, según la exposición que precede al proyecto de ley de presupuestos, opina el señor ministro, que sería conveniente que no hubiese más que una clase de títulos representativos de nuestra deuda, entiendo que ni en este camino se daría un paso por la amalgama proyectada, y que esta, hecha contra la voluntad de los acreedores, lastimaría más ó menos nuestro crédito, porque en esta materia basta que los acreedores se entiendan y se digan lastimados por una nueva ley en los derechos que les otorga otra, para que se ponga en duda la buena fé del gobierno, y nazca el temor de que más adelante, en virtud de otra ú otras, se alteren todos los derechos creados; y el crédito de los gobiernos descansa en la seguridad moral de que cumplen y han de cumplir lo que han ofrecido de la manera que lo han ofrecido, sin alterar ni la esencia ni la forma de sus obligaciones contra la voluntad de los acreedores.

Partiendo de estos principios, aun cuando fuera exacto que los nuevos valores que ofrezca el señor ministro para aumentar la amortización aumentan las garantías ofrecidas en la ley de 1.º de Agosto en la misma ó mayor proporción que el nuevo proyecto aumenta la deuda amortizable, opinaría que no es justa ni conveniente la amalgama á que se aspira; y sin embargo, yo dudo que pueda apreciarse exactamente la proporción en que se hallen los nuevos valores que ofrezca el señor ministro con los de la ley de 1.º de Agosto destinada á la amortización, y me fundo en que el importe de estos mismos es desconocido, toda vez que la única cantidad fija y numeraria es la de los 12 millones de reales anuales, y nadie conoce con exactitud el monto de los demás arbitrios de que habla el art. 16. Y como por otra parte sería, á mi juicio, imposible que el público se penetrara perfectamente de que la nueva ley no lastimaba los derechos que la de 1.º de Agosto otorga á los tenedores de la deuda amortizable actual, comprendo que la amalgama bajo todos conceptos sería insostenible, y siempre perjudicial á nuestro crédito. Tal es mi opinión, que con sujeción á otra más acertada, firmo en Madrid á 27 de Diciembre de 1860.—L. Gregorio de Miola.

DICTAMEN

DEL SR. D. LUIS DIAZ PEREZ.

La ley de 1.º de Agosto de 1851 fué la consecuencia de un pacto entre el Estado y los diversos acreedores del mismo que aceptaron sus bases. De dicho pacto, como de todo contrato bilateral, nacieron derechos y obligaciones indeclinables para ambas partes contratantes, hasta el punto que ni aquellos ni estas pueden alterarse, modificarse ni variarse en ningún sentido, sin el mutuo consentimiento de las mismas.

Los artículos 3.º, 7.º, 16, 18 y 25 fijaron los derechos y las obligaciones de los acreedores del Estado, que por los conceptos expresados en el artículo 3.º aceptarían la conversión de sus respectivos créditos en deuda amortizable de primera y de segunda clase.

Tan clara está la ley en este punto, que no ofrece materia á dudas ni interpretaciones. Dice así el citado art. 3.º: «La deuda amortizable se dividirá en dos clases: La primera comprenderá: 1.º, los capitales de la corriente á papel; 2.º, los capitales de la deuda provisional, que por esta ley no se con-

sideren en otra categoría; y 3.º, los vales no consolidados. La segunda comprenderá las deudas llamadas sin interés, pasiva y diferida de 1851.»

Por este artículo se obligó el Estado de la manera más solemne á no convertir en deuda amortizable de primera y segunda clase otros créditos que los expresados en el mismo y los pendientes de liquidación que hubieren sido presentados en tiempo hábil de que habla el art. 7.º

Los acreedores quedaron obligados á su vez á cambiar sus respectivos créditos por los que el Estado les ofreció, y sufrir por lo tanto las consecuencias de la amalgama y acumulación de créditos de tan diversa procedencia. Se obligaron también dichos acreedores á que los nuevos títulos que se les daban no pudieran pasar á ser renta perpétua, consolidada ó diferida, sino á esperar su extinción ó amortización en la forma y con los recursos que se establecen en los artículos 16, 18 y 25.

Se ve, pues, que el Estado, de acuerdo con sus acreedores, determinó: 1.º, la clase de créditos que debían ser objeto de la conversión en deuda amortizable de primera y segunda clase; 2.º, la cantidad y condiciones con que debía verificarse la amortización de la misma. Es evidente como la luz del medio día, que tanto el Estado, al prescribir la conversión de ciertos créditos en deuda amortizable, y fijar las cantidades para la amortización, como los acreedores al aceptar las bases y condiciones propuestas por el gobierno, ni aquel ni estos pudieron, ni debieron tener presentes para sus respectivos cálculos otros créditos que los que previamente y con expresiva minuciosidad se fijaron en el art. 3.º y el 7.º que le sirve de complemento; porque si así no hubiera sido; si se hubiera pensado, como hoy se pretende, á los diez años de hallarse vigente la ley, de traer á la masa convertible en deuda amortizable otros créditos que los determinados nominativamente en el referido art. 3.º, es natural y lógico que los acreedores hubieran rechazado con todas sus fuerzas una propuesta que dejaba á merced exclusiva del Estado el hacer indefinida la amortización por medio de la emisión de nuevos títulos ó inscripciones.

Y no basta, para coonestar el principio que hoy pretende el gobierno, hacer prevalecer el proyecto de ley de arreglo de la deuda de Ultramar el que se allane á fijar una cantidad proporcional para la amortización de las nuevas inscripciones que se emitan, porque cualquiera que sea la forma en que esto se verifique, constituye una modificación ó novación del pacto primitivo, que conforme á las reglas y nociones más sencillas y elementales del derecho común, no puede realizarse sin el consentimiento de los acreedores que aceptaron aquel.

Ni del espíritu, pues, ni de la letra de los artículos de la ley de 1.º de Agosto de 1851 que quedan citados, se infiere ni puede inferirse que el reconocimiento y conversión de la deuda de Ultramar, la procedente de oficios enagenados y demás á que pueda contraerse el art. 23, que debían ser objeto de una ley especial, se hubieran tomado en cuenta, ni por el gobierno ni por sus acreedores, al fijarse las bases de la conversión y amortización de los créditos que fueron objeto de las mismas.

Tan cierto es esto, que con la misma autoridad que opta el gobierno, en el proyecto de ley presentado á las Cortes, por la conversión en deuda amortizable de la deuda de América, hubiera podido optar por pagar á estos acreedores en dinero efectivo, ó en deuda consolidada ó diferida. Lo mismo decimos de la procedente de oficios enagenados y cualquiera otra que juzgue conveniente arreglar.

No siendo, pues, potestativo del gobierno el alterar las bases que de mutuo acuerdo con los acreedores se fijaron en la ley de 1.º de Agosto de 1851, el argumento que pudiera hacerse de la conveniencia que resultaría al Estado de amalgamar la deuda de América con las amortizables que fueron objeto de dicha ley, queda destruido por sí mismo desde el momento en que los acreedores no consentían en ello, porque no vean tal conveniencia de la misma manera, ó simplemente porque no quieran.

De todo lo expuesto se deduce claramente que el proyecto de ley presentado á las Cortes para la conversión de la deuda de América en deuda amortizable, amalgamándola á la existente, es contrario al espíritu y letra de la sancionada por S. M. en 1.º de Agosto de 1851, y que de llevarse á cabo lo que el gobierno pretende, sin contar previamente con el beneficio y consentimiento de los acreedores que aceptaron las condiciones fijadas en la misma, constituye un acto de arbitrariedad ministerial, tan perjudicial á aquellos como al mismo gobierno que lo realizara.

Madrid 26 de Diciembre de 1860.—Licenciado Luis Díaz Pérez.

DICTAMEN

DEL SR. D. JUAN GONZALEZ ACEVEDO.

Es para mí una verdad incontrovertible que el Estado se halla con relación á sus acreedores en la misma situación que un deudor particular respecto á los suyos, fuera del caso de una excepción procedentemente formulada. Si abusando del legítimo poder que tiene para imponer á los nacionales los sacrificios que exija la conservación y fomento del crédito público, aspirase á obligar á sus acreedores á aceptar las modificaciones que crea convenientes para reducir sus obligaciones, ya en su cuantía, ya en sus garantías, forma de pago y demás condiciones, no solo cometería una expoliación disfrazada, una confiscación simulada, sino que minaría irremediablemente las bases del crédito público, puesto que no siendo en su esencia más que la confianza que tiene el público de que el deudor (que es el Estado) llenará fielmente las obligaciones que ha contraído con relación á sus acreedores, nada socavaba más hondamente esta confianza que la falta de respeto á las obligaciones contraídas.

Esto supuesto, es evidente que la única dificultad que ofrece la consulta que precede, consiste en resolver si el proyecto de ley presentado á las Cortes por el Excmo. señor secretario de Estado y del despacho de Hacienda, para el arreglo de la

deuda de Ultramar, perjudica á los tenedores de efectos de la deuda amortizable en los derechos legítimos que han adquirido en virtud de la ley de 1.º de Agosto de 1851.

Para la amortización de aquella deuda destina esta ley los fondos que expresa el art. 16, disponiendo en el 18 que se emplearán mensualmente en la compra de deuda amortizable, destinándose la mitad á la de primera clase y la otra mitad á la de segunda. De manera que todo el derecho de los tenedores de esta clase de valores consiste en que no se menoscabe esta garantía, y se realice la amortización en los términos dispuestos en la ley.

Propónese ahora por el gobierno que la deuda de Ultramar comprendida en los párrafos segundo, tercero y cuarto del art. 2.º del proyecto de ley de 13 de Junio del corriente año se reconozca, liquide y abone con arreglo á la ley de 1.º y 3.º de Agosto de 1851; y la comprendida en el párrafo primero, con arreglo á la repetida de 1.º de Agosto; es decir, que se reconozca como deuda amortizable y con las mismas garantías que la peninsular, amortizándose por consiguiente en igual forma. Parece á primera vista que bajo tal concepto es injusto este propósito, puesto que aumentando el importe de la deuda amortizable de primera y segunda clase, el efecto de esta medida no puede ser otro que la depreciación de los valores en el mercado público, no solo por la gran masa que se arroja á la contratación pública, sino en virtud de la ley general, según la cual, cuando se aumentan las responsabilidades de un deudor, en la misma proporción crece la dificultad del reintegro y se aumentan las eventualidades de la amortización.

Sentados estos precedentes, creo que se presenta fácil la respuesta á la pregunta que se hace en la consulta; y la formulo diciendo que el gobierno no tiene facultad dentro de la ley para acumular á la deuda amortizable que fué objeto de la ley de 1.º de Agosto de 1851, la que reservó para una ley especial el art. 23 de la misma, aunque se reconozca una cantidad proporcional á la misma. En efecto, el art. 3.º determina taxativamente los valores que han de formar la deuda amortizable, sin reservarse aumentar su importe con otros que pudiera agregarse posteriormente. Bajo este supuesto ha venido contratándose sobre esta clase de efectos públicos, cuya depreciación en daño de los actuales tenedores sería inevitable desde el momento en que tenga lugar el aumento de la responsabilidad del deudor. Para que dentro de la ley pudiera el gobierno hacer la acumulación á que se refiere la pregunta, sería indispensable que previamente se hubiera reservado esta facultad de un modo claro y terminante; porque solamente así sabrían los que se interesaran en esta clase de valores, los riesgos que podrían correr, ya respecto á su importancia efectiva en la contratación pública, ya en cuanto á la época probable de su amortización. Y solamente podría hacerlo con acuerdo de los acreedores de primera y segunda clase, puesto que, según se me informa por los señores consultantes, la ley de 1.º de Agosto de 1851 fué resultado de arreglo con sus acreedores; y ya queda advertido arriba que es un principio de justicia, de equidad y de buena fé, en cuyo religioso respeto estriba principalmente el crédito público, que no podría hacerse alteración alguna por el deudor en los términos de su obligación, sin la anuencia de sus acreedores.

Otra cosa sería si la inexorable ley de la necesidad exigiera este ú otro sacrificio superior. Pero afortunadamente no estamos en este caso. El crédito nacional se halla á una gran altura, de que no es de creer que descienda, á menos de que medidas perturbadoras de la confianza pública no vengán á atajar su creciente progreso, y esto no es de temer hallándose la deuda bajo la salvaguardia y protección de la nación.

La sabiduría de los Cuerpos colegisladores á que se someta el proyecto de ley, es una prenda segura de que no pueden realizarse semejantes temores, y que desarrollándose cada día más las fuentes de la prosperidad pública, y robusteciéndose la confianza general en el cumplimiento de los pactos celebrados con los acreedores, no será necesario exigir la renuncia de sus derechos, ni imponerles modificaciones que crean perjudicarles y que se resisten á aceptar.

Este es mi dictamen, que con sujeción á otro más acertado, firmo en Madrid á 25 de Diciembre de 1860.—Ldo. Juan Gonzalez Acevedo.

DICTAMEN

DEL SR. D. JOSÉ DE OLÓZAGA.

Para darla con claridad (la respuesta), ya que no con acierto, conviene advertir que no es una sola la pregunta. Se supone, en efecto, que la primera solo se distingue de la segunda en la forma; pero en realidad hay dos preguntas esencialmente distintas una de otra. Siendo, pues, diferentes las preguntas, no se extrañará que también lo sea la respuesta.

Sobre la primera pregunta, no vacila el letrado que suscribe en afirmar que no debe verificarse la emisión de nuevas láminas de deudas amortizables de primera y segunda clase en los términos que aparecen en el proyecto de ley para el arreglo de la deuda de Ultramar.

En la de 1.º de Agosto de 1851 se determinaron expresamente los valores que habían de convertirse en deuda amortizable de primera y segunda clase, y no está comprendida entre ellas la deuda contraída por el gobierno en los dominios de Ultramar. Lejos de eso, está terminantemente excluida cuando se previene que su arreglo será objeto de una ley especial; de suerte que la emisión de nuevas láminas de deuda amortizable para pagar la de Ultramar, no solo sería conforme, sino abiertamente contraria á la ley de 1.º de Agosto de 1851.

Los derechos de los acreedores del Estado reconocidos y satisfechos por ella, son igualmente firmes y legítimos, y no se encontrará una sola razón para introducir un privilegio odioso contra los que recibieron en pago de sus créditos láminas de la deuda amortizable, que no fueron por cierto los más favorecidos.

Aumentar las láminas de esta deuda en los términos del proyecto de ley, esto es, sin aumentar proporcionalmente el fondo de la amortización, sería ilegal y evidentemente injusto, porque equivaldría á deshacer en gran parte lo hecho por la ley, disminuyendo con el aumento de láminas en favor de nuevos acreedores, el valor de las que solo debían emitirse para los que fueron señalados al hacerse el arreglo de la deuda de España. Su número, su clase y su importancia, se tuvieron presentes al fijar el fondo de amortización, y es claro que este hubiera sido mayor si lo hubiera sido el de acreedores; porque aunque hubo un diputado, el Sr. Llorente, que creyó ser bastante, no solo para amortizar la deuda comprendida en aquella ley, sino también la de América y además una gran parte de la del clero, sus palabras, por respetables que sean, no pueden producir un efecto legal contrario á lo dispuesto en la ley.

Y si fuere conforme á ella la emisión de nuevas láminas de deuda amortizable en pago de la de Ultramar, también lo sería, por la misma razón, en pago de los créditos procedentes de oficios enagenados, y de cualquiera otro cuyo reconocimiento estaba en suspenso, que así como la de Ultramar habían de ser objeto de una ley especial, según lo dispuesto en el art. 23 de la ley de 1.º de Agosto de 1851. Pues tan injusto y tan irritante sería el emitir nuevas láminas de deuda amortizable sin aumentar el fondo de amortización para uno, como para todos los créditos, de que habla el citado artículo. Sería un modo de pagar tan cómodo como ilegal.

Y siendo esto tan evidente, no hay para qué decir más sobre la primera pregunta.

Es tan diferente de esta la segunda, que no podrá menos de resaltar la misma diferencia en la contestación.

No puede ponerse en duda la facultad del gobierno para la emisión de nuevas láminas de deuda amortizable en pago de los créditos de que habla el art. 23 de la ley de 1.º de Agosto de 1851, siempre que reconozca una cantidad proporcional para su amortización.

No hay en la ley de 1.º de Agosto de 1851 nada que lo impida. En ninguno de los artículos citados en la primera pregunta, ni en los restantes, se halla la prohibición de pagar en los mismos valores los créditos que habían de ser objeto de una nueva ley. Así, pues, ni se infringe ninguna disposición especial, ni se infringe ninguna regla general, ni se ofende ningún derecho satisfaciendo deudas reconocidas después de la ley, en la forma y en los términos en que fueron satisfechas las que anteriormente estaban reconocidas. Así como antes se sentó que no debe introducirse un privilegio odioso contra los acreedores que fueron satisfechos en láminas de la deuda amortizable, tampoco hay motivo para que se haga en su favor una excepción. ¿Se quiere que el gobierno pueda proponer el abono de las deudas no arregladas en la ley de 1.º de Agosto de 1851, en cualquiera de los modos establecidos en ella, menos en láminas de la deuda amortizable? Ese sería un privilegio favorable, tan injusto como odioso.

El derecho no consiente exageraciones. Si las hay de una parte, es forzoso que las haya de otra. Aquí el derecho del Estado y de sus acreedores está bien determinado. El Estado tiene libertad para la emisión de nuevos títulos de la deuda pública de la misma clase que los antiguos, con arreglo á las leyes; pero si estos títulos son amortizables, el antiguo acreedor, el tenedor de ella tiene derecho á que se aumente el capital de la amortización en la misma proporción que el amortizable. Lo contrario sería, respecto del gobierno, imponerle la obligación de crear títulos nuevos para toda deuda nueva.

Estas cosas, pero fundadas indicaciones, bastan para resolver: bajo su aspecto legal la cuestión que encierra la segunda pregunta; pero conviene hacer una aclaración importante. Si por la palabra acumular que se usa en la pregunta, se entiende confundir ó amalgamar una deuda con otra, la arreglada y la ultramarina, de suerte que sean absolutamente idénticas las láminas de una y otra, eso sería monstruoso, eso sería legalmente imposible. Entre las láminas emitidas ó que se emitan de deuda amortizable para el pago de los créditos que han de satisfacerse con estos valores, con arreglo á la ley de 1.º de Agosto de 1851, y las que se emitan para satisfacer los créditos que se arreglen por la ley especial para la deuda de Ultramar, ha de haber naturalmente la diferencia que existe en ellas, ya por la época en que se han arreglado una y otra deuda, ya por el origen de ella, y ya por el distinto capital de amortización. Lo demás sería suponer una acción absurda, y no sería el menor mal el de faltar á la verdad, sino que además se faltaría á la justicia.

En resumen: el gobierno estará en su derecho acordando que se pague la deuda de Ultramar en láminas de la deuda amortizable, con tal que en ellas se especifique la ley en virtud de la cual se hace su emisión, y se señale para su amortización un fondo distinto del que se creó por la ley de 1.º de Agosto de 1851, que, como se ha dicho, no puede aplicarse á otros créditos que á los reconocidos por ella.

Esta es mi opinión, que someto á otra más acertada, en Madrid á 25 de Diciembre de 1860.—Licenciado José de Olózaga.

DICTAMEN

DEL SR. D. ANTONIO DEL RIVERO CIDRAQUE.

El letrado que suscribe, abogado del ilustre colegio de esta corte, habiendo sido consultado en la esfera del derecho por varios tenedores de deuda amortizable de primera y segunda clase, ó invitado á consignar por escrito su dictamen acerca de las dos preguntas concretas que preceden, ha examinado y meditado con el debido detenimiento el contexto de dichas preguntas con presencia de la ley de 1.º de Agosto de 1851 relativa al arreglo de la deuda del Estado, en particular de los artículos que en aquellas se citan, y del proyecto de ley dirigido al arreglo de la deuda de Ultramar que el gobierno de S. M. presentó á las Cortes en 13 de Junio último; y en vista de todos estos anteceden-

tes, contesta á ambas preguntas por su orden en los siguientes términos:

A la primera: Que atendidos los artículos 3.º, 7.º, 16 y 23 de la precitada ley de 1.º de Agosto de 1851, entiendo que el proyecto de ley para el arreglo de la deuda de Ultramar, tal como fué presentado al Congreso de los diputados por el señor ministro de Hacienda, envuelve una trasgresión de las disposiciones legales contenidas en aquellos artículos, especialmente en los 3.º, 16 y 23; trasgresión que, á prevalecer aquel proyecto sin enmienda, lastimaría sin duda alguna los derechos que legítima y solemnemente adquirieron los acreedores del Estado por las deudas amortizables de primera y segunda clase. El art. 3.º, al dividir la deuda amortizable en estas dos clases, y al fijar de una manera precisa y notoriamente limitativa los créditos que habían de ser convertidos en cada una de ellas, no hizo mérito de la deuda de Ultramar. El art. 16, al caracterizar la deuda amortizable, y al señalar los recursos destinados al entretenimiento de la misma, hasta llegar á su completa amortización, es evidente que se refería única y exclusivamente á las emisiones que se hicieran de conformidad con el art. 3.º, ó sea por los valores ó créditos en él comprendidos.

Por último, el art. 23, en el hecho de declarar que serían objeto de una ley especial que el gobierno sometería á la aprobación de las Cortes, la deuda de Ultramar, los créditos procedentes de oficios enagenados, y cualquiera otro cuyo reconocimiento estuviese en suspenso á la sazón, claramente determinó no hacer extensivos en ningún caso los efectos de aquella ley á otros créditos que á los en ella de una manera expresa y limitativa comprendidos. Si otro hubiese sido el propósito del poder legislativo, habría dicho que la deuda de Ultramar, etc., llegado el caso de proceder á su reconocimiento y liquidación, se ajustarian á las prescripciones de la ley de 1.º de Agosto de 1851 por medio de reales decretos expedidos por S. M., á virtud de autorización en la misma ley conferida á su gobierno, ú otra cosa idéntica en el fondo. Empero la determinación de reservar para una ley especial el arreglo de la deuda de Ultramar, legalmente significa que la ley que así lo declaró quiso prescindir por completo de tal deuda, que sus disposiciones no fueron dictadas para serle de ningún modo aplicables á esta, y que, si bien la nueva ley especial, por razón de lo parecido de su objeto, por lo análogo de los créditos, ó por otra cualquiera causa de interés público ó de buena administración, puede legítimamente adoptar principios y dictar disposiciones semejantes y aun idénticas á las de la ley de 1.º de Agosto de 1851, será solo respecto de apuntes que no tiendan á menguar en lo más mínimo los derechos adquiridos por los acreedores del Estado á la sombra de aquella medida legislativa, y á alterar la especie de pacto que entre los unos y el otro ella representa.

Ahora bien, el proyecto de ley presentado por el gobierno á las Cortes en 13 de Junio último, en su silencio acerca de los medios con que deba atenderse al entretenimiento y sucesiva amortización de la deuda de Ultramar que propone convertir en amortizable, parece tender á llenar aquella obligación con los mismos recursos consignados por el art. 16 de la precitada ley de 1851 para atender exclusivamente á las deudas amortizables que fueron objeto de la misma, y en este concepto, el que dice, opina, como ha fijado al principio, que, á prevalecer dicho proyecto sin enmienda en un punto tan trascendental como importante, saldrían lastimados los legítimos derechos de los acreedores del Estado por deuda amortizable de primera y segunda clase, ya por la importancia que tener pueda la deuda de Ultramar, como por las consecuencias que lógicamente habría de producir este precedente al tratarse de las leyes especiales que han de venir á fijar en un día no lejano la suerte de los demás créditos aplazados por el art. 23 de la de 1.º de Agosto de 1851.

CONTESTACION Á LA SEGUNDA PREGUNTA.

El que suscribe entiendo que el gobierno de S. M., sin violar la ley de 1.º de Agosto de 1851, tiene facultad para aumentar las deudas amortizables del Estado con el importe de la deuda de Ultramar, cualquiera que él sea, siempre que se reconozca y fije en la nueva ley una cantidad proporcional para atender á la amortización sucesiva de la última hasta llegar á su total extinción, fin de la ley en esta parte; y lo mismo opina respecto de los demás créditos aplazados por el art. 23 de la misma, comprendiéndose siempre que esta facultad del gobierno ha de provenir siempre de una ley que se la confiera. En la de 1.º de Agosto de 1851, nada se encuentra determinado acerca de la facultad á que se refiere la pregunta formulada, ni en sentido afirmativo, ni en el negativo, y precisamente por este silencio de aquella ley es indudable que una nueva medida legislativa puede venir legítimamente á aumentar la deuda amortizable de una y otra clase hasta la cifra máxima que hagan necesarias las justas exigencias del crédito público de España, con tal de que no se falte al principio que constituye la esencia de la deuda de que se trata. Es este que se dejen íntegros los recursos que creó la ley de 1851 por su art. 16 para atender con ellos exclusivamente al entretenimiento y amortización anual de las deudas amortizables por ella establecidas, y que al emitir por uno ó más conceptos ajenos á aquella ley, á la par que nacidos de otra, láminas de las mismas clases, se constituya un fondo proporcional de la misma índole y condiciones para subvenir á su amortización gradual y sucesiva. Obrando la ley de este modo, desaparece á juicio del que suscribe, toda idea de perjuicio para los tenedores actuales de deudas amortizables, y pueden aumentarse estas en interés del Estado y del crédito del mismo, faltando razón de alguna importancia para reclamar que las emisiones que hayan de verificarse para el pago de la deuda de Ultramar tengan una denominación especial, que separe de las demás esta clase de deuda, constituyendo una diversa dentro de la misma. El gobierno y la administración de un país tienen derecho é interés legítimo en dar á la deuda del mismo, si no la unidad absoluta, que sería lo mejor, al menos la po-

sible; y en este concepto queda resuelta en sentido afirmativo la segunda de las preguntas consultadas, al paso que la primera lo ha sido en el negativo.

Madrid á 24 de Diciembre de 1860.—Ldo. Antonio del Rivero Cidraque.

DICTÁMEN

DEL SR. D. MANUEL RUIZ DE QUEVEDO.

Considerando: 1.º Que el art. 3.º de la ley de 1.º de Agosto de 1851 determinó los créditos que debían comprenderse en las dos clases de deudas amortizables.

2.º Que el art. 16 destinó á la amortización de las dos referidas deudas, señalados créditos y rentas del Estado.

3.º Que los artículos 17 al 21 establecieron reglas para la realización de dichos arbitrios y rentas, para su administración y la exclusiva aplicación de sus productos á la adquisición por el Estado de las deudas amortizables, fijando cantidades y épocas de amortización ó de pago y garantías administrativas y aun penas que impidiesen la distracción de aquellos recursos á otras atenciones.

4.º Que el art. 23 previno serian objeto de una ley especial la deuda de Ultramar, los créditos procedentes de oficios enagenados, y cualquiera otro cuyo reconocimiento estuviese en suspenso.

5.º Que las determinaciones de la ley sobre los créditos comprendidos en las deudas amortizables, medios, épocas y garantías de pago constituyen las condiciones esenciales del arreglo, objeto de la misma, siendo su resultado la fijación de los derechos adquiridos por los acreedores y de las obligaciones contraídas por el Estado deudor y el consiguiente valor real y estimación efectiva en el mercado de los títulos de las referidas deudas.

6.º Que la terminante excepción del art. 23 supone necesariamente que los créditos á que se refiere se sujetarían á un arreglo especial, esto es, á condiciones sobre reducción de sus valores, sobre títulos de conversión, sobre medios y garantías de pago, distintas de las condiciones de los créditos comprendidos en el arreglo general de 1.º de Agosto de 1851.

7.º Que la opinión de ser permitido convertir la deuda de Ultramar en deuda amortizable de las dos clases determinadas en la ley de 1.º de Agosto, no solo repugna á su art. 3.º en cuanto fijó taxativamente los créditos comprendidos en aquella y á la exclusión expresa del art. 23, sino también al pensamiento capital de la ley, cuyo objeto parecería frustrado, porque habiendo quedado indefinidos los créditos á que dicho art. 3.º se refiere, afectando esta indefinición necesariamente á los demás y faltando en consecuencia la posibilidad de apreciar la importancia de unos y otros y el valor relativo de los medios destinados á su pago, no resultaría verdadero arreglo.

8.º Que de consiguiente el llamamiento de la deuda de Ultramar á su conversión en amortizable, segun propone el gobierno de S. M. en el proyecto de ley de 13 de Junio último, causaría una novación esencial en el arreglo de 1.º de Agosto, novación que afectaría á la persona acreedora, á los medios, épocas y garantías de pago, y principalmente á las seguridades fundamentales del arreglo.

9.º Que el aumento de los recursos de amortización en cantidad proporcional á la importancia de las nuevas láminas, no desnaturaliza el hecho de la novación ni desvanece su gravedad.

10.º Que consistiendo la garantía capital para los tenedores de la deuda comprendida en el arreglo de 1.º de Agosto en el reconocimiento por parte del Estado y sus acreedores de su inviolabilidad, en la convicción de constituir un pacto fundamental entre el mismo Estado y sus acreedores, obligatorio, con igual fuerza á las dos partes, resultará gravemente debilitada esa garantía de los acreedores desde el momento en que el Estado, sin contar con la voluntad de estos, y aun á pesar de su declarada repugnancia, alterase ó modificase en circunstancias comunes y por motivos de propia conveniencia, mal ó bien entendida, dicho arreglo en cualquiera de sus extremos, ejemplo de consecuencias incalculables;

Soy de parecer de que la emisión de nuevas láminas de deudas amortizables de primera y segunda clase para pago de la de Ultramar, sería contraria á lo dispuesto en la ley de 1.º de Agosto de 1851 y lesiva á los derechos de los actuales tenedores de aquellas; y de que no hay facultad en el Estado para dicha emisión, aunque se aumente el fondo destinado á amortización con una cantidad proporcional á la importancia relativa de las nuevas láminas.

Madrid 27 de Diciembre de 1860.—L. Manuel Ruiz de Quevedo.

DICTÁMEN

DEL SR. D. MIGUEL LÓPEZ MARTINEZ.

La pregunta que antecede no ofrece en el concepto teórico la menor dificultad para su solución. Ella encierra una cuestión de crédito público, cuya simple enunciación revela desde luego un absurdo, como esos problemas que se fundan en la infracción de un axioma de una ciencia cualquiera. En efecto, la definición universalmente admitida del crédito público no es otra que «la confianza que inspiran los compromisos que la nación contrae.» Es, pues, conveniente, ó lícito, herir ó amenazar la confianza pública en los pactos de la nación? Esta es realmente la pregunta que se nos dirige, traducida en términos generales; y por eso no hemos titubeado en calificar de absurdo el problema que en ella se contiene, tomado del proyecto de ley presentado por el gobierno á las Cortes para el arreglo de la deuda de Ultramar.

Bajo el punto de vista de la nación, nunca pueden ser legítimos los actos de los poderes que la representan, si esos actos le son perjudiciales; y como no hay expresión más perfecta del interés general que el derecho, se deduce clara y rectamente que este es el criterio más saludable en la gestión de los intereses públicos.

Ahora bien, el crédito público es hoy la medida de cuanto á valor y carácter á las naciones; de él

se deriva el más poderoso elemento de la riqueza moderna, las obras públicas; él es la expresión más clara y evidente de la conciencia política de la nación; y él es, en fin, el que facilita la entrada en ese gran mercado europeo, donde se labra actualmente la solidaridad de intereses de las naciones civilizadas, con objeto de ensanchar más y más el horizonte de la riqueza y asegurarla firmemente contra las eventualidades del porvenir.

El crédito público es hoy, pues, en una palabra, la vida de la nación misma. Quien quiera que atente á él, sea en la forma que quiera, y aun cuando sea bajo el punto de vista del interés público, que nunca podría ser más que un interés transitorio y efímero, comete el acto más digno de la reprobación general, en estos tiempos en que el herviente espíritu industrial tiene fijos en el crédito público sus ojos, como norte de sus arriesgadas y gigantescas empresas.

Si el crédito público significa algo en el concepto del gobierno, y si el gobierno admite para el crédito público la definición universalmente admitida, no alcanzamos á comprender ni una siquiera de las insignificantes razones que pueden haber aconsejado la formulación del proyecto de ley que para el arreglo de la deuda de Ultramar ha presentado á la Cámara de los diputados de la nación, y no vacilamos en calificarlo de un atentado y una aberración. Porque ¿qué otro nombre merece que el de una aberración ó de un atentado contra el crédito público, un proyecto de ley que anula compromisos anteriormente contraídos en virtud de otra ley; que destruye la confianza pública fundada en aquella ley y aquellos compromisos, y que trunca los cálculos, operaciones y esperanzas legítimas fundadas en aquellos compromisos, en aquella ley y en aquella confianza?

La ley de 1.º de Agosto de 1851 definió terminantemente la suerte de los créditos contra el Estado, después de oídas las justas reclamaciones y observaciones de los acreedores, que habían estado desatendidos por espacio de diez y seis años. Los que lo eran por las deudas comprendidas en el art. 3.º, recibieron en pago láminas de deuda amortizable de primera y segunda clase, y sus capitales debían amortizarse mensualmente por mitad en el fondo especial que debía consignarse y se ha consignado en el presupuesto del Estado, procedente de los derechos y arbitrios á tal obligación hipotecados en el art. 16 de la citada ley de 1.º de Agosto de 1851.

El art. 3.º de la misma ley, enumera las clases de papel que debían componer la deuda amortizable de primera y segunda clase, y entre ellas no solo no se hallan los créditos de Ultramar, sino que por el art. 23 se les reserva una ley especial de arreglo, lo cual dió derecho á esperar que este nunca se verificaría en perjuicio de la deuda amortizable, no solo por esta separación que literalmente establece la ley entre ellas, sino por la promesa solemne del art. 25 de modificar en lo sucesivo las deudas arregladas, si felizmente llegasen á alcanzarse tiempos de más prosperidad.

Tales son los fundamentos del derecho consignado á los tenedores de la deuda amortizable de primera y segunda clase en la ley de 1.º de Agosto de 1851, y ante ellos no hay razón, ni derecho, ni consideración capaz de justificar el proyecto de ley para el arreglo de los créditos de Ultramar, si como en él se propone, se hace su acumulación á aquella deuda, aun en el supuesto del aumento proporcional en el fondo de amortización mensual. La deuda amortizable de primera y segunda clase, desde la promulgación de la ley de 1.º de Agosto de 1851, pasó á ser una propiedad de sus tenedores; y después que estos han corrido y sufrido todos los riesgos y vicisitudes propias de los valores públicos en el mercado por espacio de diez años, la situación en que hoy se encuentran estos valores constituye un capital tan sagrado y respetable como cualquiera otro debido al trabajo, la economía, la inteligencia, ó al riesgo corrido en una empresa mercantil.

Ninguna otra propiedad, ningún otro capital puede ofrecer más ni mejores títulos en abono de su respetabilidad, y si se atenta á la que merece la actual deuda amortizable, no habrá ley, ni pacto, ni derecho, por muy positivos y garantidos que parezcan, que no sean tenidos por precarios, y por vanas las esperanzas que en ellos se funden. La acumulación de los créditos de la deuda de Ultramar á la deuda amortizable de primera y segunda clase, aun en el supuesto del aumento proporcional en el fondo de amortización, no podrá menos de perjudicar estos valores profundamente por la razón natural de las proporciones entre la oferta y la demanda; y por lo tanto, no solo se contravendría abiertamente á lo prometido en el artículo 23 de arreglar la deuda de Ultramar bajo una ley especial, sino que se falsearía el principio de sagrada justicia reconocido en el art. 25, segun el cual el espíritu de las disposiciones sucesivas debía tender á mejorar, y no perjudicar, los créditos arreglados en dicha ley.

Pero si prescindiendo de todo derecho y de toda consideración de interés público descendemos á la realización, á la materialidad de la ejecución del proyecto de ley para el arreglo de la deuda de Ultramar, resaltará aún más, si cabe, la improcedencia de su amalgama con la actual deuda amortizable, por la imposibilidad material de llevarla á cabo segun las imprescindibles reglas aritméticas. Hablamos siempre en el supuesto de que al aumentar la deuda de Ultramar á la amortizable, se aumentaría proporcionalmente el fondo de amortización, porque toda otra suposición es imposible. Pues bien: ¿cuál es la cifra que representa el capital de los bienes y arbitrios consignados en el art. 16 de la ley de 1.º de Agosto de 1851? ¿Cuál el alcance de la deuda de Ultramar que trata de arreglarse? ¿Y cuál la consideración ó aprecio debido á la demora de los diez años transcurridos? Estos términos son totalmente desconocidos, y en rigor de cálculo no puede prescindirse de ellos para fijar el aumento proporcional en el fondo de amortización. De manera, que tanto en el concepto legal como en el concepto práctico, el proyecto propuesto por el gobierno para el arreglo de la deuda de Ultramar no se rige sino por la arbitrariedad y el capricho; mientras que la ley de 1.º de Agosto de 1851 determina la solución más ar-

reglada á derecho y más prácticamente equitativa.

Con arreglo á ello el gobierno no tiene más medio que proponer un proyecto de ley especial para el arreglo de la deuda de Ultramar, creando para su amortización un fondo especial distinto, dispensando, si se quiere, á los acreedores todas las consideraciones que sus facultades y recursos le permitan. Nada puede oponerse á esta facultad del gobierno; pero hacer el arreglo de la deuda de Ultramar en combinación con la actual deuda amortizable, sea en la forma que quiera, no puede menos de ser hondamente perjudicial á los intereses de sus tenedores, de anular los derechos consignados en el espíritu y en la letra de la ley de 1.º de Agosto de 1851, y de afectar por tanto de un modo lastimoso al crédito del Estado.

En resumen: La ley de 1.º de Agosto de 1851 que arregló las diferencias entre el Estado y sus acreedores, no es otra cosa que una garantía dada á la esperanza y la confianza públicas en el cumplimiento de lo que en ella se estableció. La ley de 1.º de Agosto de 1851, formada después de oídos los acreedores del Estado, no puede en sano derecho considerarse sino como un pacto inalterable en tanto que ambas partes en él interesadas no se presten á su modificación. La misma ley, en fin, que promete literalmente bonificar á los acreedores del Estado en tiempos de mejor fortuna, es inequitable en sus compromisos, en el sentido que pretende hacerlo el gobierno, hoy que felizmente la nación ha entrado en una senda de prosperidad.

Y no sirve oponer á estas razones que una ley puede derogar otra ley, porque se incidiría en la aberración que dejamos condenada de considerar lícito ó conveniente atentar contra el crédito público, que no es otra cosa que el respeto que merecen al gobierno sus propios compromisos, que nace de la confianza que sus compromisos inspiran, de los cuales se burlaría si tocase á un solo tilde de la mencionada ley sin el consentimiento de la otra parte en ella interesada.

¿Quién puede dudar que el derecho de iniciativa del gobierno, combinado con la organización especial de la mayoría de las Cámaras legislativas, puede modificar una ley de crédito público de la manera que el gobierno lo intenta, á pesar de las inconveniencias que llevamos expuestas? Indudablemente puede modificarse; pero por eso mismo el crédito público solo se desarrolla sólidamente en los países cuya forma de gobierno no permite fácilmente la violación de los compromisos contraídos, y cuyos recursos igualan por lo menos á sus necesidades.

El hecho de la violación de una ley de crédito, aunque revestido de la fórmula constitucional, dejará de producir por eso las funestas consecuencias que no pueden menos de surgir de la infracción de los buenos principios? Las razones en que se funde la buena ley, ¿serán por esto menos insignificantes ante la opinión pública, cuyo criterio es el derecho, y por consiguiente el interés general y permanente? ¿Quién dudará, repetimos, de esta posibilidad de anular una ley de crédito? Pero la razón, el derecho, la conveniencia que lo aconsejen, nadie las ha demostrado ni sostenido hasta ahora.

Hay circunstancias, como ya hemos indicado, en que la ley suprema de la necesidad, de la falta de recursos, obliga tristemente á los gobiernos á faltar á sus compromisos, á pesar de sus buenos deseos y de su respeto á los sanos principios de administración pública; pero esa ley impuesta por la fuerza de tales conflictos, no puede considerarse nunca como ley propiamente dicha, sin profanar el sagrado origen de donde toda ley debe derivarse; y así, jamás se estatuye en aquellos casos supremos con perjuicio de tercero, sin consignar la promesa del art. 25 de la ley de 1.º de Agosto de 1851, de cumplir religiosamente con lo que la justicia exige cuando se lleve á mejor fortuna.

Desdichado país el que abrumado por la necesidad se ve forzado á faltar á sus compromisos, si bien dejando á salvo los principios de la justicia; pero más desdichado aún el que conculcando estos principios al llegar á tiempos más bonancibles, olvida los sacrificios hechos en su servicio, falta á las promesas empeñadas, y se acoge á una vana fórmula legislativa para justificar su conducta! Y esta sería evidentemente la del gobierno si, contra lo que es de esperar, se aprobara su proyecto de ley para el arreglo de la deuda de América.

Este es al menos mi informe, que someto á otro más acertado, en Madrid á 31 de Diciembre de 1860.—L. Miguel Lopez Martinez.

DICTÁMEN

DEL SR. D. RAFAEL MONARES.

El art. 23 de la ley de 1.º de Agosto de 1851 estableció terminantemente que la deuda de Ultramar, los créditos procedentes de oficios enagenados, y cualquier otro cuyo reconocimiento estuviese suspenso en aquella fecha, serian objeto de una ley especial que el gobierno debería someter á la aprobación de las Cortes. No quiso por consiguiente la referida ley comprender los mencionados créditos en ninguna de sus disposiciones; porque de otro modo no habria ordenado que la deuda de Ultramar y los demás citados créditos habian de ser objeto de otra ley especial.

Tan cierto es esto, que precisamente para cumplir con el precepto de dicho art. 23 ha presentado á las Cortes el actual ministro de Hacienda el proyecto de ley de 13 de Junio último.

Se trata, pues, de una ley especial para el reconocimiento, liquidación y abono de la deuda de Ultramar; y basta la idea de especialidad para que ningún modo pueda concebirse que lo que se establece en el proyecto de esta ley puede afectar ni perjudicar los derechos y garantías que aquella ley general concedió á todos los otros créditos expresa y determinadamente comprendidos en la misma.

La nueva ley podrá adoptar las disposiciones de la antigua, como tipo y norma para el reconocimiento, liquidación y pago de la deuda de Ultramar; podrá convertir los créditos de esta procedencia en la especie de deuda que tenga por conveniente; pero si persiste en convertirlos en amor-

tizable, tendrá necesidad de arbitrar nuevos recursos que constituyan un fondo tambien nuevo para su amortización; porque de otro modo vendria á suceder que por la ley especial se haria extensiva la hipoteca y garantía que la ley general concedió tacitamente á ciertos créditos, á la amortización de los de Ultramar, que aquella ley no quiso tomar en cuenta, ni comprender entre sus disposiciones.

El art. 3.º de la referida ley comprendió en la deuda amortizable de primera clase los capitales de la corriente á papel, los de la provisional que no se consideraba en otra categoría, y los vales no consolidados; y en la amortizable de segunda clase, las deudas llamadas sin interés, pasiva y diferida de 1831. El art. 16, después de declarar que la deuda amortizable no pasaría á la clase de renta perpétua consolidada ó diferida, y de ordenar que se procediese desde luego á su amortización, destinó expresa y especialmente, como recursos para llevarla á cabo, el producto de la enagenación de ciertos y determinados bienes, el 20 por 100 con que se hallaban gravados á favor del Estado los propios de los pueblos, y 12 millones de reales efectivos que se consignarían en el presupuesto anual del Estado; sin perjuicio, segun el art. 25, de aumentar estos arbitrios cuando el resultado de los presupuestos lo permitiese, para la más pronta extinción de la referida deuda.

Ahora bien: si la deuda de Ultramar convertida en amortizable de primera y segunda clase, hubiera de amortizarse con el producto de los arbitrios y subvención anual consignado en el art. 16, se despojaría en parte de su garantía á los tenedores de la deuda amortizable de 1851, en favor de los acreedores de Ultramar; y esto no procede, con arreglo á derecho. Los tenedores de la deuda amortizable de 1851 le tienen, no solo para que se amorticen sus créditos, sino para que esto se verifique en el menor tiempo posible; porque de la seguridad y de la brevedad de la amortización, depende la mayor ó menor estimación de dicha clase de deuda. Si los arbitrios destinados por el art. 16 fuesen susceptibles de aumento, si la subvención anual fuese de 24 millones en vez de 12, si se viese muy próximo el término de la amortización, la deuda amortizable valdria más de lo que hoy vale. Si, por el contrario, los arbitrios disminuyesen y la subvención decreciese, y el término de la amortización se dilatase, el mérito de dicha deuda seria considerable. Pues bien, esto sucedería indudablemente en más ó en menos, si convertida en amortizable la deuda de Ultramar, se acumulase para su amortización á la que fué objeto único y exclusivo de la ley de 1.º de Agosto de 1851; porque no aumentándose los arbitrios ni la subvención actual, habria que atender con estos solos recursos á la amortización de la nueva deuda y se dilataría la extinción de la antigua, viéndose los tenedores de esta defraudados en sus esperanzas y en sus derechos legítimos. Y digo en sus derechos legítimos, porque el tiempo dentro del cual debe realizarse un derecho ó cumplirse una obligación, entra por mucho en los contratos y en los pactos, segun su diversa naturaleza, y en todas las transacciones y operaciones de crédito, no siendo justo que al que tiene derecho á realizar sus créditos dentro de un término breve, se le obligue á realizarlos dentro de otro más remoto.

Por las consideraciones expuestas, y principalmente porque en la nueva ley especial sobre la deuda de Ultramar no puede adoptarse medida ni disposición alguna que afecte en su esencia las determinaciones contenidas en la general de 1851, puesto que la hipoteca consignada en el art. 16 quedó solemnemente constituida á favor de los créditos taxativamente enumerados en el art. 3.º y no en favor de otro alguno, soy de dictámen que el gobierno de S. M. procedería contra equidad y contra justicia acumulando la deuda de Ultramar á la amortizable de 1851.—Otra cosa sería si el gobierno reconociese ó consignase de nuevo una cantidad proporcional para amortización de la de Ultramar, ó lo que es lo mismo, un fondo de amortización especial tambien, como la ley cuyo proyecto ha presentado; en tal caso, no podrian quejarse los tenedores de la de 1851, aunque la nueva emisión hiciese decrecer algun tanto el valor de la que hoy está en circulación; porque el art. 23 aplazó ya para otra ley el arreglo de la deuda de Ultramar, ó más bien anunció que se verificaría; y el gobierno, viniendo á realizar aquella promesa, puede adoptar el medio de conversión que tenga por conveniente; si bien con la condición, y no sin ella, de que arbitre, determine y consigne nuevos medios para atender á su amortización. Más allá de este limite no pueden llevar sus pretensiones los actuales tenedores de la deuda amortizable.

Así lo entiendo, salvo mejor dictámen.—Madrid 7 de Enero de 1861.—Rafael Monares.

DICTÁMEN

DEL SR. D. FRANCISCO PERMANYER.

Para contestar á las dos preguntas que anteceden, ha examinado el infrascripto detenidamente la ley de 1.º de Agosto de 1851, tomando en cuenta no solo la letra de la misma, y en especial la de los artículos 4.º, 7.º, 16 y 18 de la citada ley, sino tambien su índole y carácter general, para determinar, con arreglo á él, el espíritu de sus disposiciones, á tenor del cual es preciso resolver las dudas que puedan tal vez ofrecerse; y por el resultado de ese examen, opina: que sin infringirse los artículos 3.º, 7.º, 16 y 18 de la citada ley, y sin lastimar los derechos que ella misma creó á favor de los acreedores á que dichos artículos se refieren, no pueden aplicarse los valores consignados en su artículo 16 á la extinción de otra deuda que á la declarada allí amortizable de primera y segunda clase; con lo cual queda contestada la primera pregunta.

Y contestando á la segunda, opina el infrascripto que tampoco puede el gobierno de S. M. acumular á la deuda amortizable de que antes se ha hecho mérito otra alguna, inclusa la que se reservó para ser objeto de una ley especial en el art. 23 de la de 1.º de Agosto de 1851, sin lastimar los derechos de los acreedores en cuyo interés fué aquella promulgada, y sin faltar á las prescripciones de justicia y buena fé á que debe considerarse y está

subordinada hasta la potestad legislativa; y últimamente, que esa violación de derechos é infracción de los altos deberes legislativos, no dejarían de existir dado el caso que antes se ha supuesto, por más que al acumular otras deudas á las que fueron calificadas de amortizables y atendidas en la citada ley de 1.º de Agosto, se reconociese una cantidad proporcional para la amortización de unas y otras.

Fúndase la opinión del infrascripto, primero: en la letra de la ley sobre arreglo de la deuda pública interior y exterior, por cuanto en el art. 3.º de la misma se declaró definitivamente cuál sería en adelante la deuda amortizable, sin comprenderse en esta calificación ni en primera ni en segunda clase la de Ultramar, ni las demás que por el art. 23 quedaron reservadas para ser objeto de una ley especial; y al consignarse en los artículos 16 y 18 los valores que quedaban destinados á la inmediata y gradual extinción de dicha deuda amortizable, y el tiempo y el modo con que aquella debería efectuarse, no se dijo ni se significó que alguna parte de los referidos valores hubiera de quedar reservada para extinguir á su tiempo la deuda cuyo arreglo se habia aplazado, ni que la aplicación de los mismos valores á la ya declarada amortizable hubiera de entenderse sin perjuicio de distraerse en todo ni en parte para la extinción de otra deuda, los que quedarían en poder del gobierno á medida que se fuese llevando á efecto lo prescrito en los citados artículos 16 y 18; de todo lo cual se infiere que los valores indicados tuvieron desde entonces ó hubieron de tener una absoluta ó privativa aplicación á los objetos á que quedaban legalmente destinados.

Pasando ahora á otro linaje de consideraciones, ó sean las que surjen de la índole y espíritu de la ley sobre arreglo de la deuda, observa el infrascripto que teniendo esta por objeto calificar, reconocer y atender derechos á ella preexistentes, como eran los de los acreedores del Estado, vino á constituir una vez publicada un verdadero contrato bilateral entre el Estado mismo y los referidos acreedores, ó que á eso pudo y debió equipararse la promulgación de dicha ley, aceptada por los interesados, cual debe presumirse que lo fué, toda vez que los acreedores no solo la han aceptado, sino prestándose por su parte espontáneamente á su ejecución y cumplimiento. Si á esto se añade que los intereses y voluntad de esos mismos acreedores no dejaron de ser consultados al confeccionarse la ley, y se trató de obtener su aquiescencia, cuando menos tácita, á las bases que por la proyectada ley iban á quedar sancionadas; si se atiende, por otra parte, á que los créditos entonces reconocidos sufrieron una reducción en sus capitales respectivos, no pudiendo ocultarse que las garantías de efectividad concedidas á los acreedores fueron por estos tomadas en cuenta y necesariamente entraron por mucho para que el nuevo arreglo fuese como ha sido tan espontáneamente aceptado por los mismos, no cabe ya dudar que fué dicho arreglo un verdadero contrato bilateral, del que nacieron derechos que es lícito lastimar por leyes posteriores; antes deben ser, por todas las que promulguen, religiosamente respetados.

Ahora, aplicar á otra deuda que la reconocida y calificada en la ley actual los valores que á su extinción fueron solemnemente destinados, fuera indudablemente disminuir la garantía á que los tenedores de la deuda amortizable tienen adquirido derecho; y aunque al acumular á dicha deuda otra nueva se reconociese una cantidad proporcional para la amortización de ambas, y pudiera decirse que se deja más ó menos equitativamente compensada aquella reducción de garantía, tampoco sería esto lícito sin el beneplácito de los acreedores interesados, ya porque todos los que lo son en un contrato han de ser consultados y llamados á intervenir en cualquiera innovación que se pretenda hacer en el mismo, ya tambien porque si á uno solo de los contrayentes fuere dado erigirse en árbitro de la justicia ó equidad de las compensaciones establecidas á su placer para novar el contrato, quedaria barrenado el principio de buena fé y reciproca igualdad, que es la base fundamental de la contratación, y debe serlo de toda ley que tienda á afectar ó afecte derechos adquiridos por leyes anteriores.

Lo últimamente expuesto desvanece de todo punto el único pretexto que podría invocarse contra las conclusiones que se dejan establecidas, á saber: el de que la ley sancionada y promulgada por los poderes constituidos en un Estado, puede siempre modificarse y derogarse por otra ley posterior que dicten estos mismos poderes. Semejante teoría, cierta en principio general, no solo no es aplicable á las leyes de la índole y carácter de la que es objeto de la consulta, sino que siempre debe entenderse y aplicarse limitada por el gran principio de la no retroactividad; el cual quedaria necesariamente vulnerado si ahora por una nueva ley se alterase la condición de los acreedores, cuyos derechos fueron reconocidos por otra ley anterior, y por la misma clasificados y asegurados con determinadas garantías, de las cuales por consiguiente no es lícito privarles, ni disminuir ó modificar las que fueron por ellos aceptadas.

Por consecuencia de todo lo dicho, y dado que llegándose á sancionar y publicar como ley del Estado la que está hoy en proyecto y ha dado ocasión á esta consulta, podrian verse los interesados reducidos de hecho á la imposibilidad de hacer valer sus derechos, cree el infrascripto que están en el caso de reclamarlos oportunamente, empleando todos los medios legítimos de que en la actualidad pueden echar mano, á fin de impedir que llegue á consumarse lo que, si obtuviera la aprobación de los Cuerpos colegisladores y la sanción de la Corona, no dejaria de ser ley para todos respetable, por más que en el fondo contuviese una violación de derechos adquiridos y una verdadera injusticia.

Este es, salvo siempre mejor parecer, el del que suscribe en Madrid 7 de Enero de 1861.—Francisco Permanyer.

Editor responsable: D. RAMON ARQUELLADA.

Madrid, 1861.—Imp. de M. Tello, calle de Hita, 6.